Arancha González Laya

Solos en el mundo



Estados Unidos amenaza, Rusia hace la guerra, China reconstruye un imperio... ¿Y Europa?

arpa

Arancha González Laya

Solos en el mundo



Estados Unidos amenaza, Rusia hace la guerra, China reconstruye un imperio... ¿Y Europa?

arpa

Arancha González Laya

Solos en el mundo



Estados Unidos amenaza, Rusia hace la guerra, China reconstruye un imperio... ¿Y Europa?

arpa

solos en el mundo

Arancha González Laya

solos en el mundo

arpa

© del texto: Arancha González Laya, 2026

© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.

Primera edición: junio de 2026

ISBN: 979-13-88182-03-7

Diseño de colección: Enric Jardí

Diseño de cubierta: Anna Juvé

Maquetación: El Taller del Llibre

Producción del ePub: booqlab

Arpa

Manila, 65

08034 Barcelona

arpaeditores.com

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.

Este libro está dedicado a mi familia,

sin la cual nada hubiera sido posible.

Gracias a Ángela González y

a Vicente Montávez por estar siempre ahí.

índice

prólogo

1. año 2049. ¿cómo se jodió europa?

2. el retorno de trump: solos en el mundo

3. guerra y paz

4. la anatomía del poder militar europeo

5. china-europa, dos líneas paralelas que se separan

6. la venganza de la globalización americana

7. bienvenidos a la era de la geoeconomía

8. el ártico es el nuevo pacífico, bering es el nuevo malaca

9. algoritmos contra la democracia

10. nosotros y los otros

epílogo

«Continúen, continúen, no hay futuro para los pueblos de Europa más que en la unión».

jean monnet

(1888-1979)

«Ha llegado el momento en que es necesario deshacerse definitivamente de las pesadas rémoras del pasado, y mantenerse atentos a la llegada de lo nuevo, tan diferente de todo lo que habíamos imaginado, descartando a los ineptos entre los viejos y suscitando nuevas energías entre los jóvenes. Comenzando a tejer la trama del futuro, hoy se buscan y se encuentran los que han comprendido los motivos de la actual crisis de la civilización europea, quienes —por lo tanto— recogen la herencia de todos los movimientos de superación de la humanidad naufragados por la incomprensión del objetivo a ser alcanzado o de los medios para alcanzarlo. El camino por recorrer no es fácil ni seguro, debe ser recorrido, y lo será».

Manifiesto por una Europa libre y unida

altiero spinelli y ernesto rossi

Ventotene, 1941

Era verano de 2025. Me acerqué a Silfra una mañana de luz oblicua, cuando el sol islandés apenas se atreve a rozar la superficie del agua. A pesar de ser agosto, el aire era tan frío que parecía afilar los pensamientos y el silencio del valle de Thingvellir tenía algo de premonición. Frente a mí, la grieta se abría como una herida azul entre dos continentes. Me coloqué el traje seco, me ajusté la máscara y al sumergirme sentí cómo el mundo se volvía transparente hasta lo insoportable.

El agua de Silfra es tan clara que no admite mentiras. Cada piedra, cada pliegue de la roca, cada burbuja de mi respiración se revela con una nitidez que desarma. Mientras buceaba entre las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia, pensé en la extraña belleza de ese espacio intermedio, un lugar donde dos mundos se separan sin romperse del todo. Donde la geología y la política se tocan. Estaba nadando dentro de la metáfora viva de las relaciones transatlánticas.

Las placas se alejan unos milímetros cada año, un movimiento imperceptible en el día a día, pero implacable en su constancia. Allí abajo la distancia era visible, medible, inevitable. Y mientras avanzaba comprendí que habíamos llegado a un punto de inflexión en las relaciones transatlánticas.

La llegada de Donald Trump por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos ha sido un momento revelador. No porque inaugurara un distanciamiento que ya venía gestándose, sino porque lo hizo visible, explícito, imposible de ignorar. Como el agua de Silfra, su estilo político ha dejado al descubierto tensiones que antes se amortiguaban en la penumbra de los despachos. De repente Europa se ha visto obligada a mirar con claridad quirúrgica algo que llevaba tiempo evitando: su propia vulnerabilidad estratégica.

Mientras avanzaba entre placas, mis manos rozaban alternativamente la roca americana y la europea. Ese gesto me recordó cómo, durante décadas, Europa había confiado en que la

alianza atlántica era terreno firme, casi geológico. Pero las dudas sobre el compromiso estadounidense con la OTAN en el momento en que Rusia atacó a Ucrania, es decir, a Europa, el chantaje comercial, el uso de la tecnología para erosionar la democracia o la injerencia en procesos electorales poniéndose del lado de las fuerzas políticas antieuropeas, obligan a Europa a tomar conciencia de una incómoda realidad: Occidente ha muerto. Europa está sola.

En Silfra, la separación entre placas no destruye el paisaje, pero lo transforma. De igual modo, la política ha obligado a Europa a replantear su posición en el mundo. Ha acelerado una reflexión profunda sobre la soberanía europea: la necesidad de poder actuar aun cuando Estados Unidos no quiera que lo haga. La soledad geopolítica no es un abandono, sino una constatación: en un mundo más competitivo, más fragmentado e imprevisible, depender de otro, por cercano que sea, implica un riesgo estructural.

La transparencia del agua me obligaba a mirar cada fisura de la roca. Esa claridad me recordó cómo, en estos años, Europa ha tenido que observar sin filtros sus propias debilidades: la fragmentación, la falta de capacidades militares, la lentitud en la toma de decisiones. La metáfora era casi demasiado perfecta: un continente que descubre su desnudez estratégica justo cuando la otra orilla del Atlántico se repliega.

Al salir del agua, con el frío clavándose en los huesos, comprendí que Silfra no era solo un maravilloso espectáculo natural, sino una advertencia. Las placas se separan, pero el valle sigue en pie. La distancia no implica ruptura inmediata, pero sí obliga a adaptarse. El continente europeo, empujado por la evidencia, empieza a asumir que su seguridad, su prosperidad y su estabilidad no pueden depender únicamente de la voluntad de Estados Unidos.

Mientras me quitaba la máscara pensé que quizá la verdadera enseñanza de Silfra era esta: la soledad no es un destino, sino una llamada a la responsabilidad. Que incluso cuando dos mundos se

alejan, existe un espacio intermedio donde es posible redefinir el equilibrio. Y que, tanto en política internacional como en geología, lo esencial no es detener el movimiento, sino aprender a sostenerse cuando el terreno cambia. Y el terreno ha cambiado.

prólogo

Este libro busca entender cómo hemos llegado aquí, qué significa el momento actual para Europa y cómo puede navegar esta nueva fase del orden internacional. Es un tema complejo y con muchas aristas. No pretendo abarcarlo todo. He elegido lo que me ha parecido más relevante y me he apoyado en mis propias vivencias.

He pasado gran parte de mi vida adulta trabajando en la construcción de algo que creíamos sólido, casi inevitable: un orden internacional basado en reglas, un equilibrio precario pero real entre poder y derecho, un mundo donde la cooperación —por lenta, imperfecta o desigual que fuese— avanzaba inexorablemente. Lo hice en Europa, desde Bruselas, en instituciones multilaterales y también desde España, desde el convencimiento profundo de que la historia, por una vez, caminaba en la dirección correcta.

Durante años pensé que ese orden podía corregirse, ampliarse, perfeccionarse. Y lo sigo pensando. Pensé que los grandes equilibrios de la posguerra —la alianza transatlántica, el multilateralismo, la economía global integrada— eran tan fundamentales para la estabilidad mundial que ninguna generación los pondría en riesgo. Pero la historia rara vez respeta nuestras expectativas. Y ahora ese orden, al que tantos hemos dedicado tiempo, energía y convicciones, está mutando ante nuestros ojos.

Europa ha entrado en una década en la que ya no puede apoyarse en certezas heredadas. Estados Unidos, el socio que garantizó nuestra seguridad, se repliega hacia sí mismo. Rusia, la potencia que un día creímos debilitada, ha devuelto la guerra de alta intensidad al continente. China, ese socio-competidor-rival, ha construido una red de poder geoeconómico que condiciona nuestras cadenas de

suministro, nuestras industrias y nuestras decisiones. Y en el Sur plural, regiones que durante décadas miraron a Occidente buscando cooperación y oportunidades, buscan ahora rutas alternativas, construyendo sus propios centros de gravedad.

Europa despierta tarde a una realidad que llevaba años gestándose: somos una potencia dependiente en un mundo que premia la autosuficiencia; una potencia normativa en un entorno donde la fuerza vuelve a tener primacía; una potencia democrática en un tiempo donde la democracia se erosiona desde dentro y desde fuera.

Este libro nace de esa constatación. De esa mezcla de lucidez, dolor y responsabilidad que sentimos quienes hemos dedicado años a construir instituciones que ahora se ven frágiles. No se escribe desde el miedo, sino desde la urgencia. No desde la nostalgia, sino desde la convicción de que Europa todavía puede —y debe— decidir su destino.

En las páginas que siguen, el lector se embarcará en un recorrido que no pretende ofrecer un catastrofismo fácil, sino una lectura honesta del mundo que nos rodea.

Descubrirá en primer lugar cómo Europa llegó a su soledad geopolítica actual, cómo el equilibrio transatlántico se ha desplazado y qué significa convivir, no con un aliado, sino con un socio imprevisible. Analizaremos el retorno del trumpismo —no solo como fenómeno político, sino como síntoma de una transformación cultural profunda y duradera en Estados Unidos— y el impacto de esa mutación para la seguridad europea. Se ha acabado el periodo álgido de Occidente. La erosión comenzó en 2008. Ahora el Occidente somos nosotros.

Más adelante, el lector se adentrará en la metamorfosis del orden mundial: la Rusia que decide volver a la lógica del poder duro, el auge de China como arquitecto de un nuevo multilateralismo, la emergencia de un Sur plural que ya no acepta tutelas, la

competencia por recursos estratégicos, rutas marítimas, cadenas tecnológicas y espacios digitales. También veremos cómo la geoeconomía —esa dimensión donde el comercio, la tecnología y las finanzas se convierten en instrumentos de poder— ha sustituido a la globalización benigna que conocimos.

El libro ofrece, además, una mirada profunda a la anatomía del poder militar europeo: cómo están configurados nuestros ejércitos, por qué nuestra industria de defensa no puede competir con las grandes potencias, qué debilidades estructurales arrastramos, qué capacidades necesitamos construir y qué decisiones políticas se requieren para defender lo que valoramos. La defensa ya no es un ámbito ajeno al ciudadano europeo: es el nuevo nombre de nuestra soberanía.

En otro tramo del viaje, el lector se encontrará con la fragilidad de nuestras democracias, sometidas a presiones internas —polarización, desinformación, erosión de contrapesos institucionales— y externas —actores que explotan nuestras divisiones—. La democracia europea siempre se consideró consolidada; ahora sabemos que requiere vigilancia, reparación y, a veces, reinvención.

Y es que vivimos en una gran paradoja: es la era de la desconexión en tiempos de interdependencia. Cuanto mayor es la interdependencia económica, mayor la conexión tecnológica y más sistémicos los riesgos como el del cambio climático o las pandemias, menor es el apetito para invertir en cooperación internacional o en alianzas estratégicas. Mayor es la búsqueda de una falsa protección tras fronteras, barreras y muros nacionales. Esa desconexión es también la del individualismo, la fragmentación social, la generacional o la polarización política. Buscamos refugiarnos en identidades excluyentes, o en civilizaciones pasadas que mitificamos como esa arcadia feliz a la que queremos retornar para protegernos. En la era de la inteligencia artificial (IA) la desconexión lo es también de lo que nos hace humanos; algunos ya hablan de una IA superhumana, la que nos hará prescindibles. Es también la

desconexión de lo que nos ha convertido en democracias. Los algoritmos corroen el suelo común sobre el que se asienta la democracia, dividen y polarizan. Ansiedad, miedo, desconfianza, fragilidad son el caldo de cultivo y la pócima mágica la promesa de liderazgos fuertes, masculinos, que ofrecen protección instantánea a cambio de más desconexión. Los hombres fuertes no respetan la legalidad internacional porque lo que importa es la seguridad nacional. Los pesos y contrapesos son engorrosos porque no permiten actuar con rapidez. La sociedad civil y el disenso molestan porque crean dudas. Ahí medran Putin, Xi y también Trump, Orbán o Abascal.

Finalmente, exploraremos lo que Europa puede —y debe— hacer para navegar esta era incierta: dotarse de autonomía estratégica, reactivar su modelo económico y social, fortalecer su industria, redefinir su papel en el mundo, cultivar nuevas alianzas, proteger su democracia y decidir qué tipo de potencia quiere ser.

Y lo haremos entendiendo que la batalla por la desconexión está también viva en Europa, entre quienes saben que solo una Europa más integrada será capaz de navegar sola, y las fuerzas políticas que quieren una Europa de las naciones, que buscan revertir integración, dar marcha atrás. Separar los huevos de la tortilla ya cocinada. El Brexit les dio alas. Pero el coste del experimento de desconexión del Reino Unido de la Unión Europea fue tan alto que nadie se atreve hoy a pedir Frexit, Italexit, Hungrexit. Ahora piden «cambiar la Unión Europea desde dentro».

He querido escribir este libro no para crear polémicas estériles ni para alimentar resignaciones, sino para encender una forma distinta de esperanza. Una esperanza que no nace de la ingenuidad, sino de la responsabilidad. La que invita al activismo europeísta. Una esperanza que reconoce que la historia no está escrita, que Europa no está condenada y que nuestra capacidad de actuar —si actuamos juntos— sigue siendo formidable. Que seremos lo que queramos ser. Que no hay nada inevitable.

Si este libro logra que el lector se haga preguntas más incómodas, pero también más necesarias; si despierta en él el deseo de entender, de situarse, de contribuir; si abre una ventana hacia un futuro europeo posible —más libre, más seguro, más consciente—, entonces habrá cumplido su propósito.

Porque Europa no es un accidente. Es una decisión. Y ha llegado el momento de decidirla de nuevo.

¿Y si no somos capaces de avanzar?

Por ahí empieza este libro. Una distopía que, si Europa no avanza, se hará realidad.

Bienvenido. Empieza la travesía.

parís, 2026

1

AÑO 2049. ¿CÓMO SE JODIÓ EUROPA?

Las democracias ya no mueren como antes. No hace falta sangre para enterrarlas. Basta con el silencio. Con la lenta erosión de sus cimientos. Con la indiferencia de sus conciudadanos. Lo advirtieron hace décadas dos profesores de Harvard —Levitsky y Ziblatt— cuando Harvard aún era Harvard. Las democracias ya no fracasaban de golpe, a manos de generales exaltados a lomos de sus caballos sedientos o sus tanques oxidados, sino que morían lentamente, a manos de presidentes o primeros ministros que subvertían el sistema por el que alcanzaron el poder. Para perpetuarse. Para manejarlo a su antojo. Lobos con piel de cordero. Europa no fue la excepción.

¿En qué momento se jodió Europa? Nos lo preguntábamos a modo de mantra mucho antes de que la catedral Europa, como si de la biblioteca de Alejandría se tratase, cayera. Durante décadas pensamos que el proyecto europeo desaparecería por amenazas externas —guerras nucleares, invasiones, crisis sistémicas—, pero nunca imaginamos que sería por la irresponsabilidad de sus líderes. Nunca por la inacción de su ciudadanía. Nunca, porque Europa dejara de ser ese horizonte que el resto del mundo aspiraba alcanzar.

Todo comenzó mucho antes. Seguramente con el fin del olvidado siglo xx. Pero si tuviéramos que elegir una fecha concreta, esa sería el día en que las tropas rusas entraron en Kiev. Putin seguía vivo, y su perverso sistema —su corte de oligarcas fanáticos— más vivo

todavía. Los pocos que se le enfrentaban, los seguidores de Navalny, habían huido hacía meses, tras el último gaseo masivo en San Petersburgo, cuando miles de opositores se concentraron para gritar «¡basta ya!».

Era 2027. Trump había reconocido Crimea un año antes, cedió en plenas negociaciones de paz. Ese mismo año, la Comisión Europea calculaba poder desconectarse por completo del gas ruso, como se recogía en su plan de 2025. Pero al levantar Estados Unidos sus sanciones contra Rusia, y acuciados por una competencia industrial despiadada de norteamericanos y chinos, la industria europea —con la alemana al frente— solicitó la reapertura del gasoducto Nord Stream. Ningún Estado miembro tuvo el arrojo suficiente para justificar ante su ciudadanía la desindustrialización por un país del este de Europa que cada vez quedaba más lejano, tanto en los corazones como en los parlamentos.

Los tanques rusos, con tecnología taiwanesa —que China había logrado anexionarse—, consiguieron lo que no habían logrado en febrero de 2022. Así culminó el colapso del orden internacional liberal. El que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. El que yo misma, aunque modestamente, había contribuido a fortalecer. Fue entonces cuando los sueños neoimperiales de Putin se hicieron realidad. Aunque vivió poco para presenciarlos.

Rusia emergió como una potencia revisionista hegemónica en Eurasia. Tras un lustro de guerra híbrida, asfixia económica y desinformación sistemática, Kiev capituló. Moscú se anexionó no solo el Donbás y el sur del país, sino toda Ucrania, convirtiéndola en un protectorado bajo bandera de la «Nueva Federación».

Con Ucrania, Bielorrusia y el sur de Kazajistán bajo control directo o indirecto, Rusia no solo conquistó territorios sino recursos: concentraba ya al final de la guerra más del 40 % del suministro mundial de trigo y cereales. El «Consorcio del Pan Eurasiático», controlado por oligarcas cercanos al Kremlin, raciona exportaciones

con criterios políticos: los países considerados hostiles —como Francia, Alemania o Japón— se enfrentan a bloqueos, mientras que los aliados, como Irán, Serbia o Argelia, obtienen descuentos estratégicos.

Hambrunas intermitentes afectan a regiones de África y Oriente Medio. Europa intentó reactivar cultivos en campos abandonados, pero la dependencia sigue siendo alarmante. En los supermercados del sur de Europa una barra de pan cuesta casi lo mismo que una buena botella de vino de Rioja. Por eso los europeos se alimentan cada vez más con nutrientes producidos en laboratorios; proteínas en polvo y gelatinas energéticas de distintos sabores.

Y entonces llegó la otra sacudida. La guerra de Irán. La que muchos en Europa quisieron leer, durante semanas, como una crisis regional más, una de esas tormentas que levantan titulares y luego se diluyen. No era eso. Era algo mucho más serio: la confirmación de que el planeta había entrado en una fase de combustión permanente. Los ataques contra Irán y la disrupción del estrecho de Ormuz —por donde pasa en tiempos normales cerca de una quinta parte del petróleo y gas del mundo— obligaron a la Agencia Internacional de la Energía a ordenar la mayor liberación de reservas estratégicas de su historia. El barril se disparó, el nerviosismo se trasladó a toda la cadena energética y Europa descubrió, una vez más, que su vulnerabilidad nunca había desaparecido del todo: solo había cambiado de forma.

La guerra de Irán no encareció solo la gasolina o la factura eléctrica. Encendió algo más profundo: la sensación de que ya no había periferias. Que cualquier incendio en Oriente Medio terminaba ardiendo en un hogar europeo. Primero fue el petróleo. Después el gas. Luego los seguros marítimos, los costes logísticos, las rutas comerciales, la inflación. Y enseguida los fertilizantes. Porque en el Golfo no se movían solo hidrocarburos: se movía también azufre, insumo esencial para la fabricación de fertilizantes y para industrias enteras. Cuando ese flujo se cortó, el precio de la urea se disparó y

la onda expansiva alcanzó a los agricultores de medio mundo en plena temporada de siembra. Europa, que ya había dejado escapar parte de su soberanía energética, descubrió que también había externalizado una parte decisiva de su seguridad alimentaria.

El resultado fue devastador. Oriente Medio, ya fracturado por guerras, milicias, rivalidades sectarias y Estados exhaustos, terminó de descomponerse. La energía cara desestabilizó presupuestos públicos; el alza de los fertilizantes hundió cosechas y encareció alimentos; la inseguridad cerró puertos y rutas; los desplazados se multiplicaron. Lo que en Bruselas se seguía llamando con lenguaje técnico «presión migratoria» era en realidad otra cosa: un corrimiento de pueblos enteros, una geografía humana empujada por el hambre, el miedo y el colapso. El Mediterráneo, antaño frontera, se convirtió en una cinta transportadora de desesperación.

El control del trigo no fue el único frente. Aprovechando el vacío estratégico dejado por Occidente, Rusia cerró un acuerdo con Siria para instalar una base naval permanente en Tartús, ampliando su presencia militar en el Mediterráneo oriental. Desde allí, la renacida flota rusa, reforzada por drones navales y submarinos silenciosos, comenzó a patrullar con regularidad. La influencia rusa no se detuvo. Moscú firmó acuerdos de seguridad alimentaria con Egipto y fue ganando terreno político en Grecia, donde desde 2030 gobierna una coalición ultraconservadora con claros vínculos prorrusos.

El Mediterráneo, antaño símbolo de unidad y origen compartido, se transformó en un escenario hostil, permanentemente vigilado. A la deriva entre faros abandonados y drones espía, los naufragios de barcos llenos de migrantes y refugiados, transportados por mafias sin escrúpulos, se cruzaban con narcolanchas de última generación y piratas buscavidas que merodeaban con el silencio cómplice de algún capitán al servicio de la marina rusa.

En semejante distopía donde Rusia ha ganado la guerra de Ucrania, controla el grano mundial y China domina los engranajes del

sistema, África ya no es la promesa del futuro: es el campo de batalla silencioso del presente donde todos juegan. El continente africano, con su explosión demográfica, sus reservas estratégicas de minerales raros y su dependencia alimentaria, se ha convertido en el epicentro de la geopolítica del siglo xxi. No por protagonismo propio, sino por ser la pieza decisiva de la nueva partida de ajedrez mundial. África no es la víctima silenciosa del nuevo orden: es su piedra angular ignorada. Quien controla sus rutas, puertos y campos, no necesita disparar misiles en Europa o Asia. Solo tiene que esperar. Porque en este siglo distópico, el futuro no se decide donde brillan los satélites, sino donde se siembra el grano, donde se extrae el litio y las tierras raras y donde se negocia una barra de pan con una bandera extranjera.

En este nuevo mundo de 2049, China no es el aliado de Rusia, sino su socio silencioso y superior. Fue determinante en la caída de Ucrania: mientras Occidente enviaba armas y paquetes de ayuda, Pekín incrementaba discretamente sus importaciones de gas y trigo rusos, proporcionando al Kremlin la liquidez necesaria para resistir las sanciones. No participó en la guerra, pero la financió.

Y cuando llegó el momento decisivo, dejó que los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU —Trump, Marine Le Pen y Nigel Farage— fueran quienes reconocieran la victoria rusa. China negoció desde una posición de fuerza. Obtuvo acceso exclusivo a recursos estratégicos en Siberia y Ucrania —litio, gas, cereales— o en condiciones preferenciales. Impulsó la construcción de un corredor ferroviario directo entre Pekín y Odesa, gestionado por empresas mixtas chino-rusas. Una nueva Ruta de la Seda que se ha convertido en el eje de la geoeconomía del siglo xxi. China es como la seda: suave, sinuosa, envolvente. Actúa de forma sibilina a través de su diplomacia blanda. El arte de la guerra es saber esperar a que el enemigo se mueva. Mientras, ella observa a los enemigos caer. Nunca se impone por la fuerza.

Pekín también supo ser pragmático y jugar a la realpolitik. No reconoció formalmente la anexión total de Ucrania en su momento, preservó su imagen de potencia «neutral» ante los países no alineados. Aunque, en realidad, China se ha convertido en el arquitecto del mundo posoccidental. Ha levantado una red alternativa al sistema SWIFT, ha fundado un tribunal arbitral económico con sede en Shanghái, y ha impuesto el yuan digital como moneda de referencia en más de cuarenta países del sur. Su lema no oficial lo resume todo: «Mientras otros conquistan con tanques, nosotros lo hacemos con contratos».

China es el imperio invisible. El nuevo líder mundial no despliega soldados, sino que firma contratos con cláusulas férreas. Con su red de infraestructuras estratégicas —ferrocarriles, represas, puertos— y el control sobre minerales clave como el litio, el cobalto o el coltán, ha convertido África en su fábrica descentralizada. En Angola, Kenia o Zambia, las zonas económicas especiales funcionan como enclaves semiautónomos, con legislación laboral made in Beijing y un modelo extractivo disfrazado de cooperación.

China ha perfeccionado su modelo expansionista en África. A través de su Iniciativa de la Franja y la Ruta, China ofrece deuda adaptada a las necesidades locales… pero con cláusulas leoninas: los impagos se saldan con derechos de explotación de recursos naturales durante décadas. Los gobiernos aceptan, porque la alternativa es el colapso. No es de sorprender, tras el cerrojazo de la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo USAID en 2025, la reducción del presupuesto de Naciones Unidas a menos de la mitad y el cierre de la Fundación Bill y Melinda Gates en 2045.

Ante la inacción de Estados Unidos y Europa, China también se hizo con la joya de la corona durante las primeras guerras comerciales de la Segunda Era Trump: Groenlandia. Lo hizo bajo un manto comercial: empresas mineras «privadas», proyectos de infraestructuras, puertos de aguas profundas, drones de vigilancia climática, estaciones de datos cuánticos. Pero tras la fachada

investigadora se esconde una estructura de proyección militar gris: buques oceanográficos que vigilan sin bandera, satélites en órbita polar, vuelos no identificados sobre el casquete glaciar. Groenlandia se ha transformado en una antena china clavada en el Atlántico Norte. Ya no es un espacio remoto: es un punto focal de la nueva hegemonía. Y también de una nueva ruta comercial más corta entre Europa y Asia que relega al olvido el canal de Suez y el de Panamá.

A nivel doméstico, el nuevo líder Xi Jan Pung perpetúa el control férreo de su antecesor, aunque más obsesionado con la videovigilancia y las epidemias globales. El Partido Comunista ha perfeccionado un sistema de control total basado en vigilancia biométrica y reeducación social. Vivir en China se parece cada vez más a vivir en ese 1984 de Orwell. Tras la anexión de Taiwán en 2031, bautizada como operación «Gran China», cualquier disidencia es cruelmente castigada. La oposición democrática se había exiliado en Corea del Sur y Japón. Sin embargo, no todo era pan y rosas para el nuevo gran imperio. La escasez de materias primas y el encarecimiento de los productos han erosionado el poder adquisitivo de la población, especialmente en las grandes ciudades, donde hay graves problemas de hacinamiento y escasez de vivienda disponible. Con una clase media cada vez más envejecida e insuficientes robots domésticos, caros de fabricar y aún más caros de mantener, China se ha visto obligada a abrir sus puertas a inmigrantes del Sudeste Asiático y África para cubrir tareas de cuidados y servicios básicos, lo que ha dado lugar a problemas de convivencia. La tasa de natalidad es la más baja de la historia, 0,9 hijos por mujer.

Ante el ascenso del dragón, en paralelo vivimos el declive absoluto del que era el guardián del mundo libre. Estados Unidos dejó de exportar democracia para exportar algoritmos de control, gas licuado y nostalgia. La ruta 66 se ha convertido en el nuevo centro de peregrinación de los que buscan la esencia del mundo de ayer: cowboys, Chevrolets y Harley Davidson con música de fondo de Dolly Parton.

Pero hubo un momento en el que Washington dejó de limitarse a replegarse y volvió a intervenir, no para defender un orden, sino para asegurarse un recurso. Fue Venezuela. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a comienzos de 2026 y su traslado a Nueva York para ser procesado abrieron una grieta jurídica y geopolítica de enormes dimensiones. La Unión Europea insistió entonces en una transición venezolana pacífica y respetuosa con la soberanía del país; varios parlamentos europeos y centros de análisis hablaron abiertamente de violación del derecho internacional. Pero lo importante, con el paso del tiempo, no fue solo el debate legal. Lo importante fue el precedente: Estados Unidos había demostrado que, cuando el petróleo escaseaba y el tablero se descomponía, estaba dispuesto a actuar por su cuenta, al margen de las viejas liturgias multilaterales.

Y ahí fue como Venezuela dejó de ser solo Venezuela para convertirse en otra cosa: un protectorado petrolero de facto. No declarado, por supuesto. Washington nunca usa ese lenguaje. Prefiere hablar de estabilización, lucha contra el narcotráfico, seguridad regional, transición democrática, protección de infraestructuras críticas. Pero en la práctica aquello significó una tutela energética. La faja del Orinoco, las terminales, las exportaciones, los contratos de mantenimiento, los corredores logísticos y hasta la seguridad de los enclaves de producción quedaron progresivamente encajados en una arquitectura hemisférica diseñada en Washington. América Latina entendió el mensaje con claridad brutal: en la era de la escasez, la soberanía energética se había vuelto negociable.

Las consecuencias regionales fueron inmediatas. Colombia militarizó fronteras por miedo a una oleada de desplazados. Brasil endureció posiciones. México midió cada palabra. El Caribe volvió a convertirse en un archipiélago geopolítico. Y la izquierda latinoamericana, que llevaba años dividida entre el rechazo a Maduro y el rechazo a Washington, terminó fracturada del todo. Unos vieron la caída del chavismo como el final de una pesadilla. Otros vieron en ella el

regreso del viejo guion imperial. Tenían razón ambos, y por eso nadie supo qué hacer con aquella mezcla de alivio y humillación.

La variable venezolana cambió también el mercado mundial de la energía. Mientras Oriente Medio ardía y Ormuz se convertía en un punto de estrangulamiento del sistema, Estados Unidos presentó el petróleo venezolano como parte de una nueva doctrina de seguridad hemisférica. Ya no era solo el gas de esquisto, ni solo el GNL, ni solo la autosuficiencia norteamericana. Era una red continental de abastecimiento bajo tutela política. Un «patio trasero» rehecho en clave energética. El petróleo venezolano pasó a ser, para Washington, lo que el trigo ucraniano había sido para Moscú y lo que las tierras raras eran para Pekín: un instrumento de poder.

Tras la reelección de un presidente aislacionista en 2028, Estados Unidos limitó su presencia en Europa a operaciones de inteligencia remotas. La doctrina oficial era: «Defender lo defendible». Y Ucrania no lo era. El gigante se replegaba de toda Europa. Después del colapso ucraniano y dos mandatos de líderes aislacionistas, Estados Unidos entró en una fase de declive estratégico controlado: su presencia militar en Europa se ha reducido a unas pocas bases en Alemania y Noruega, convertidas en centros de espionaje. Las bases de Rota y Morón fueron abandonadas hace una década. La OTAN no se ha disuelto, pero funciona como una alianza burocrática sin capacidad de intervención autónoma y donde todos desconfían de todos. En el Pacífico, Washington mantiene un pulso débil con China por el control del mar de Filipinas y el estrecho de Malaca, pero sin comprometerse en conflictos abiertos. En América Latina se ha instalado la «Gran Valla Americana» para contener las cada vez menores oleadas de inmigrantes. Ya no hay sueño americano al que emigrar. El gran relato estadounidense ha cambiado: «Ya no somos la policía del mundo, la defensa empieza en casa». Estados Unidos ha consolidado el aislacionismo como doctrina oficial y ha rebautizado su nueva política exterior, o más bien la ausencia de ella, como «Fortaleza América». Ha renunciado por completo a la arquitectura multilateral, abandonando la ONU, casi la OTAN y

rompiendo casi de facto con la Unión Europea. Las embajadas han dejado de ejercer funciones diplomáticas para transformarse en simples delegaciones comerciales, y los tratados han sido sustituidos por acuerdos bilaterales transaccionales cuya única lógica es la del quid pro quo.

En el plano interno, la democracia estadounidense se ha convertido en un decorado de cartón piedra. Se han normalizado los referendos digitales sectoriales, sobre armas, aborto o educación, manipulados sistemáticamente por desinformación algorítmica. El Tribunal Supremo, convertido en una suerte de partido único, está compuesto mayoritariamente por jueces ultraconservadores que han revertido décadas de avances sociales: aborto, protección LGTBI, límites a la financiación electoral. El Supremo ejerce el poder real por encima del Congreso y del propio presidente.

Mientras tanto, la política ha sido absorbida por el espectáculo. La mayoría de la ciudadanía ya no vota directamente: delega su voto en sistemas digitales que deciden en función de una «afinidad emocional». Los partidos son aplicaciones gratuitas, los mítines se retransmiten por streaming y los líderes son influencers efímeros.

La sociedad estadounidense se ha fragmentado en territorios paralelos. Por un lado, las llamadas «zonas rojas soberanas» —Texas, Florida, Wyoming— donde las leyes federales hace mucho que dejaron de aplicarse. Por otro, las «ciudades azules autosuficientes» —Nueva York, San Francisco, Seattle— que operan como enclaves liberales cerrados. En algunos estados, el FBI actúa como potencia ocupante. Es el escenario de The Last of Us hecho realidad.

El sistema educativo ha sido colonizado por la desinformación. Se ha legalizado el «derecho a la versión propia de los hechos», incluyéndolo en la Primera Enmienda. La ciencia es opcional, la vacunación es considerada woke, y las escuelas enseñan lo que dicta cada gobernador. Las universidades tradicionales han perdido peso

frente a las «academias patrióticas», centros de formación ideológica con financiación privada y agenda doctrinaria.

El control social se ejerce mediante un índice de patriotismo digital, inspirado en el modelo chino pero adaptado al estilo libertario estadounidense. Calculado a partir de la actividad en redes sociales, este índice determina el acceso a empleo público, subsidios y permisos de armas. La desigualdad no solo persiste: se perpetúa digitalmente. Quien nace pobre, mal puntuado o racializado no escala.

En lo económico, Estados Unidos ha adoptado una lógica de autarquía tecnocapitalista. Ha blindado su producción agrícola y energética, vendiendo sus excedentes como arma geopolítica. Pero estas exportaciones están condicionadas por la ideología: los países que no comparten su «modelo patriótico» son excluidos. Lo que no ha cambiado es la concentración de la riqueza en manos de las grandes empresas tecnológicas. Cinco conglomerados controlan el 80 % del PIB digital. Son corporaciones-fortaleza, con ejércitos privados, tratados de inversión propios y ministros de facto. No están ya sujetas ni al control del Congreso. Incluso el Tesoro ha sido parcialmente privatizado. Las reservas federales están custodiadas por la gestora de activos BlackRock.

Estados Unidos se ha convertido en la peor versión que los padres fundadores hubieran podido imaginar. Ya no lidera… pero tampoco obedece. Se ha convertido en un actor imprevisible, capaz de alianzas momentáneas, venganzas económicas o cierres fronterizos exprés. El estilo Trump llegó para quedarse. No tiene una estrategia global: actúa por reflejos ideológicos. Si una crisis amenaza su hegemonía cultural, responde con sanciones o despliegues inmediatos. Ya no pretende cambiar el mundo. Solo pretende que el mundo no lo cambie a él.

Y en este mundo distópico, muchos lectores os preguntaréis qué ha pasado con Europa. Pues bien, en contra de muchos vaticinios agoreros, la Unión Europea no ha desaparecido, pero ha dejado de ser un actor de poder. Ha mutado en lo que algunos analistas llaman la «Confederación Administrativa Europea»: un bloque tecnocrático, funcional, pero sin alma ni proyecto político. Ya no marca el rumbo global. Solo gestiona su supervivencia.

Bruselas se ha convertido en un nodo logístico y financiero. La Comisión Europea administra fondos de resiliencia climática, gestiona el comercio digital y supervisa el mercado común… pero carece de voz estratégica. El Parlamento Europeo sigue existiendo, aunque con una participación mínima (de los 826 diputados electos solo acuden la mitad) y un poder marginal.

La Unión Europea ya no actúa como bloque. En las políticas del antiguo tercer pilar, exterior, migración y defensa, los Estados miembros operan por libre o en miniligas: el eje París-Roma-Atenas, con una orientación prorrusa; el eje Varsovia-Bálticos, el único claramente alineado con la OTAN. El eje París-Berlín se ha desvanecido, sobre todo desde que Alemania decidió reabrir el Nord Stream. España, Italia y Grecia, con partes del territorio totalmente desertificadas ante el avance del cambio climático, se sienten abandonadas ante la presión migratoria y energética. Polonia y Suecia ya no escuchan a Bruselas: escuchan a Washington o se escuchan a sí mismas. Europa ha pasado de mirar al Este a mirar a ninguna parte.

Europa se ha centrado en la contención y la administración. La política migratoria ya no habla de «acogida» ni de «solidaridad». Ahora se gestiona la externalización de fronteras, pagando a Turquía, Marruecos y Túnez para detener migrantes a cambio de trigo, drones y acuerdos comerciales. Frontex se ha transformado en una agencia paramilitar con competencias para actuar sin control parlamentario en el Mediterráneo, los Balcanes y el Sahel.

En materia de defensa, la Brújula Estratégica fracasó. La Unión Europea no tiene ejército ni capacidad de disuasión. Alemania no logró rearmarse. Francia, desde la llegada de Marine Le Pen al Elíseo, actúa por su cuenta. Solo los Bálticos y Polonia invierten, y lo hacen con ayuda estadounidense. El Báltico se ha convertido en una trinchera, el Mediterráneo en un coladero, y los Balcanes en un polvorín.

El colapso del proyecto europeo es ya una realidad. El sueño integrador ha muerto. La juventud ya no cree en Europa como un futuro compartido, sino como una red de subvenciones o un simple pasaporte laboral. El programa Erasmus ha sido recortado, y los antiguos programas culturales han sido reemplazados por «formación tecnológica prioritaria».

A nivel geográfico y emocional, el continente se ha fracturado. Nadie lidera. Todos se defienden.

¿Y ahora qué hace la Unión Europea? Sobrevive. Mantiene bancos, instituciones llenas de funcionarios sin rumbo, aduanas, convenios de datos, regulaciones comunes. Es garante de lo básico: agua limpia, moneda estable, circulación de mercancías. Pero también administra el declive. Se ha resignado a perder influencia y a gestionar lo inevitable: envejecimiento, escasez, inflación alimentaria y fragmentación. Casi como la URSS en sus últimos coletazos. Una gran estructura sin capacidad de poder real.

Mientras tanto, imita a quien domina. Algunos países copian el modelo chino: inteligencia artificial administrativa, puntajes digitales, gobernanza algorítmica. Otros buscan refugio en Estados Unidos a cambio de obediencia estratégica. La planificación a largo plazo ha desaparecido. Ya no se piensa a veinte años vista. Se piensa a seis meses.

En resumen, la Unión Europea no ha sido destruida, pero ha sido vaciada de voluntad histórica. Es una estructura sin relato, sin

estrategia y sin liderazgo. Lo que un día fue el proyecto más ambicioso de cooperación entre pueblos se ha convertido en una red de oficinas con diseño minimalista bien gestionadas, pero sin nadie al volante.

Este escenario distópico que acabo de describir y que parecería más una mezcla entre la serie Years and Years de la BBC y la película Blade Runner no es una proyección de futuro. Ni los más importantes mandatarios del Kremlin soñarían con este escenario tan beneficioso para ellos. Sin embargo, he querido empezar así este libro para que nos imaginemos todo lo que podría pasar si Europa no reaccionara. Si Europa se dejase llevar. Estamos solos, sí. Pero no tanto. La idea de que la Unión Europea siempre haya ido a contracorriente la hace más valiosa que nunca. Su espíritu por remontar, por dar grandes pasos adelante justo cuando más los necesita, es lo que la hace especial. Por eso quiero aportar un poco de optimismo. Como decía Hannah Arendt, incluso en los momentos más oscuros, tenemos derecho a esperar algo de iluminación. Y este libro es lo que pretende. Proporcionar algo de luz en medio de la brutalización del mundo. De un mundo cuyo futuro dependerá de si Europa vuelve a soñar o solo se resigna a sobrevivir. Es lo que trato de explicar en los capítulos siguientes.

2

EL RETORNO DE TRUMP: SOLOS EN EL MUNDO

Hay dos imágenes que definen con claridad el fin de una era y el deterioro de la relación transatlántica.

La primera fue la conmemoración del 80.º aniversario del desembarco de Normandía —el último gran acto internacional de Joe Biden como presidente de Estados Unidos—. Durante la ceremonia, un veterano estadounidense reconoció entre los presentes a Volodímir Zelenski y, con emoción, le dijo: «Eres el salvador de Europa». A lo que el presidente ucraniano respondió: «No, tú eres el salvador».

Ese breve intercambio capturó algo más profundo: el homenaje era, en realidad, para aquellos hombres que habían salvado Europa una vez. Quizás esa imagen sea la última postal genuina de la gran alianza transatlántica.

La playa de Omaha amanece silenciosa. Ochenta años atrás, sus arenas temblaron bajo el peso de la mayor armada liberadora de la historia. Aquel 6 de junio de 1944, decenas de miles de soldados estadounidenses, británicos y canadienses irrumpieron en Normandía para liberar a Europa de la tiranía nazi. Hoy solo quedan cruces blancas escrupulosamente ordenadas en Colleville-sur-Mer, y unos pocos veteranos nonagenarios que asisten, con lágrimas discretas, a la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario del Día D. Entre los dignatarios presentes en 2024, el presidente estadounidense Joe Biden, flanqueado por Emmanuel Macron y otras

autoridades, rinde homenaje a una hermandad transatlántica sellada con sangre. Aquella alianza cimentó el orden occidental que garantizó la paz y prosperidad europeas durante décadas. Sin el apoyo de Washington, la victoria de 1945 y la reconstrucción de la posguerra habrían sido impensables. Los cementerios militares en Normandía recuerdan que Estados Unidos y Europa combatieron hombro con hombro por unos valores comunes.

Sin embargo, la brisa salobre que recorre los acantilados normandos transporta hoy una inquietud: ¿Qué queda de aquella alianza? En 2019, durante las conmemoraciones del 75.º aniversario del Día D, el entonces presidente Donald Trump se mostró respetuoso ante los veteranos, pero en Europa muchos intuían fisuras en el vínculo atlántico. Años después, tras la inesperada victoria de Trump en las elecciones de 2024, la inquietud se ha transformado en alarma. Los líderes europeos, que brindaron antaño por la unidad occidental en Normandía, ahora se sienten solos en el mundo, huérfanos del tradicional paraguas estadounidense. La escena solemne en el cementerio de Colleville —con los himnos sonando y veteranos saludando por última vez— contrasta con la cruda realidad geopolítica actual: la era de certezas transatlánticas se desvanece, sustituida por un vértigo estratégico que Europa no vivía desde el comienzo de la Guerra Fría.

La base de la alianza atlántica se debe, sobre todo, a un interés propio bien entendido. Como bien expresó Winston Churchill en su famoso discurso en la Universidad de Zúrich en 1946: «La gran República del otro lado del océano Atlántico (Estados Unidos) se ha dado cuenta finalmente de que el caos o la esclavitud de Europa acabarían comprometiendo también su propio destino y nos ha tendido la mano para socorro y guía».

Así también lo expresó el secretario de Estado estadounidense George Marshall —autor del plan que llevaría su nombre, el Plan Marshall— en un discurso en la Universidad de Harvard en junio de 1947, refiriéndose a la calamitosa situación de las economías

europeas devastadas por la guerra: «Aparte del efecto desmoralizador sobre el mundo entero y de los desórdenes que pueden surgir de la desesperación de los pueblos afectados, las consecuencias de esta situación para la economía norteamericana han de ser obvias para todos. Es lógico que Estados Unidos haga cuanto esté en su mano para contribuir a que el mundo retorne a un estado normal de salud económica, sin el cual no puede haber estabilidad política ni puede asegurarse la paz».

No era caridad hacia Europa, era interés propio. La Guerra Fría, con su epicentro en el continente europeo, reforzó esta alianza. A pesar de las tensiones generadas por la invasión estadounidense en Irak, la alianza no se puso en cuestión. Incluso cuando el presidente Barack Obama anunció un giro estratégico en su política exterior para desplazar el foco de atención hacia Asia, mantuvo su compromiso con Europa. Washington transfirió fuerzas navales de Europa a Asia y redujo la presencia de militares estadounidenses en suelo europeo, pero también apoyó la implantación del sistema antimisiles europeo y su anclaje en la OTAN como elemento central de la defensa colectiva.

En un artículo de opinión en The New York Times, justo antes de la Cumbre de la OTAN en Lisboa en 2010, Obama declaraba: «La relación con nuestros aliados y socios europeos es la piedra angular de nuestro compromiso con el mundo y un catalizador para la cooperación global. Con ninguna otra región tiene Estados Unidos una alineación tan estrecha de valores, intereses, capacidades y objetivos».

Obama reclamaba que los países europeos invirtieran el 2 % del PIB en defensa, e insistía en la idea de que no siempre Estados Unidos tenía que tomar la iniciativa, que podía liderar «por detrás». Pero, a menos de nueve meses de abandonar la Casa Blanca, se dirigió a los europeos como quizá los propios europeos no lo hacían: «Estoy aquí, en el corazón de Europa, para decir que Estados Unidos y el mundo necesitan una Europa fuerte, próspera, democrática y unida.

Alguien de fuera tiene que deciros la magnitud de lo que habéis hecho […] las ideas que han nacido en este continente han ayudado en el progreso que se ha producido en el mundo, la prosperidad y la seguridad de Europa son indivisibles de la nuestra […] nuestra cultura, nuestras economías, nuestra gente […] están integradas […] Europa es vital para el orden mundial […] Irán, cambio climático, ébola, acabar con la pobreza extrema […] si Estados Unidos no tuviera un socio como Europa no podría haber ocurrido…».

Era un voto de confianza en la Unión Europea, pero también una invitación a que Europa se emancipara, a que aceptase liderar su propio destino. Europa dio un salto cualitativo durante la pandemia del COVID-19, decidiendo por primera vez endeudarse como Unión para invertir en una recuperación común de las economías europeas. Y ante la invasión de Ucrania, Europa también dejó atrás viejos tabúes y aceptó financiar armamento para el país invadido. Pero no fue consciente de la urgencia del momento. O más bien no llegó a creer que la segunda presidencia de Trump fuera a ser tan negativa para la Unión Europea, a pesar de las advertencias.

La segunda imagen fue mucho más cruda: Donald Trump sentado en el Despacho Oval, al otro lado de la mesa, los líderes europeos sentados enfrente, en silencio, mientras él marcaba las condiciones de su apoyo —o su retirada— en plena crisis con Ucrania en agosto de 2025. Más que una negociación, fue una imposición. En esa escena quedaba claro que Estados Unidos ya no miraba de igual a igual a Europa, y que su antiguo y más fiable socio se había convertido, en el mejor de los casos, en un cliente. O en un vasallo.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado entre ambas imágenes, separadas por apenas un año de diferencia?

Todo lo que escribimos sobre Trump 2.0 se quedó corto…

Y es que en 2025 los europeos proyectamos nuestra experiencia del primer mandato de Trump sobre el segundo, que no iba a ser como

el primero. Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2016 contra todo pronóstico. Nadie esperaba que ganase las elecciones, ni siquiera él. En realidad, no ganó, fue Hillary Clinton la que perdió. Llegó poco preparado, sin experiencia de gobierno, y se rodeó de leales, en gran parte miembros del establishment republicano, que siempre se mostró receloso. El vicepresidente, el secretario de Estado, los secretarios del Tesoro, Comercio, Defensa, el FBI, el consejero de Seguridad Nacional, todos republicanos duros pero que siempre buscaron limitar los peores instintos de Trump. Ellos mismos actuaban como peso y contrapeso sobre el presidente. En un viaje a Seúl en 2017, un miembro del gobierno coreano me contó entre risas cómo unas semanas antes Gary Cohn, el entonces jefe de los asesores económicos de Trump, evitó in extremis que el presidente firmase el documento que pondría fin al acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea. En un momento de distracción, Cohn retiró el documento del escritorio del presidente sin que este se diera cuenta y así evitó una calamidad económica.

El primer mandato fue caótico, con frecuentes cambios de personal —cuatro portavoces, cuatro jefes de gabinete, dos secretarios de Estado, cinco responsables del Pentágono—, frecuentes peleas internas y un lento aprendizaje institucional. Todo ello ralentizaba la acción gubernamental. Era una administración transaccional, que generaba tensiones con sus aliados, pero siempre dentro de marcos tradicionales. Así, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, evitó la imposición de aranceles prometiendo comprar gas y cereales, a pesar de que la Comisión Europea ni compra ni vende nada.

Mis relaciones con la primera administración Trump fueron respetuosas, pero siempre desde la firmeza. Difíciles con el responsable comercial Robert Lighthizer, dada la propensión estadounidense a aplicar medidas comerciales desfavorables a los intereses españoles. Correctas con el secretario de Estado Mike Pompeo, con quien me tocó discutir cuestiones como el proceso de paz en Oriente Medio, el deterioro de la situación en el Sahel o la

búsqueda de una salida negociada para Venezuela. Cuando organicé una conferencia de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, él se comprometió a que Estados Unidos aportase una contribución financiera. Tocó también discutir sobre la organización de la salida clandestina del líder opositor Leopoldo López hacia España —sobre la que siempre mantuve la mayor discreción— o de la organización de elecciones libres. Porque, a pesar de la retórica guerrera e intervencionista en relación a Venezuela, a menudo presentada por algunos sectores en España como dureza estadounidense versus blandura española y europea, eran constantes las divergencias dentro de la administración estadounidense entre halcones y realistas, lo cual impedía avanzar de manera concertada. Eso me llevó a trabajar en una alianza de países latinoamericanos de todo signo político con la que incidir sobre el régimen venezolano. Más fluidas fueron las relaciones con el consejero de Seguridad Nacional Robert O'Brien, sobre todo durante la gestión de la pandemia de COVID-19, con quien regularmente intercambiaba información sobre la gestión sanitaria y económica de la crisis.

Pero, sobre todo, durante el primer mandato de Trump Europa no tuvo que enfrentarse a la vulnerabilidad de una guerra abierta en el propio continente tras la invasión rusa de Ucrania. Las declaraciones de Trump que cuestionaban el compromiso estadounidense con la defensa de sus aliados en la OTAN no sonaban igual de amenazadoras que durante su segundo mandato, cuando para Europa era esencial reforzar su capacidad disuasoria frente a Rusia.

El asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 supuso un punto de inflexión en la política estadounidense reciente y marcó la pauta del segundo mandato de Donald Trump tras el paréntesis de la presidencia de Joe Biden. Anunció un estilo político más confrontacional, con una relación más tensa entre instituciones y liderazgo político, una movilización social intensa y muy polarizada y un discurso público más emocional y menos institucional en un clima

de gran confrontación nacional. Ese 6 de enero marcó lo que cuatro años después sería su segundo mandato.

El segundo mandato se caracteriza por una voluntad más definida, más consciente de su propio poder y menos inclinada a buscar la legitimación externa. Basta con mirar los retratos oficiales del presidente: sonriente, casi sorprendido de su victoria en el primer mandato, adusto, casi agresivo en el segundo. Ya no busca agradar a quienes no le apoyan, busca desafiar a quien no se pliega a su voluntad. Ha tomado el control del Partido Republicano, fagocitado por el movimiento Make America Great Again (MAGA). Cientos de acólitos en la Heritage Foundation han trabajado para crear una especie de programa de gobierno. Y aunque él es imprevisible, el Project 2025 ayuda a unificar la acción de gobierno. La ejecución es rápida y contundente.

Es un presidente anti statu quo. Busca destruir lo existente, las instituciones internacionales, las alianzas, el sistema de comercio multilateral, la lucha contra el cambio climático, los límites a la IA; pero también las vacunas, el sistema educativo, la migración o las políticas de igualdad. Quiere demostrar su capacidad de cambiar, de cuestionar, de deshacer en minutos lo que se había construido a lo largo de casi un siglo. Se gobierna como un show televisivo y la atención dura lo que tarda en aparecer un nuevo tema; pero no hay una estrategia de sustitución porque esto lleva más tiempo, requiere coherencia y solo mostrará resultados a largo plazo. Rompe, declara la victoria y se marcha a otro tema, dejando tras de sí un reguero de problemas. Impone aranceles, y cuando el Tribunal Supremo los declara ilegales, los vuelve a imponer con otra base jurídica, dejando en el camino reclamaciones millonarias de reembolso de aranceles por parte de miles de empresas. Declara la victoria en Gaza mientras persiste el asesinato de civiles y se sigue violando la legalidad internacional con nuevos asentamientos ilegales. Se anuncia el fin del conflicto entre Ruanda y la República Democrática del Congo a pesar de que nunca han cesado los ataques. Se bombardea Irán

para provocar un cambio de régimen, algo que los halcones republicanos nunca llegaron a hacer.

Pero además desea humillar. Se ensaña con los débiles y respeta a los fuertes. La debilidad europea con Ucrania, el miedo a ser responsable de la ira de Trump, la tentación de posicionarse como el europeo que puede susurrar al oído de Trump; las debilidades internas, el miedo al vacío; el peso de la historia; la desconfianza hacia otros países europeos; la simpatía hacia Trump; todo ello nos llevó inicialmente a preferir negociar, agradar; sumisión frente a dureza; y cuanta más sumisión, más ensañamiento; reflejo de una división dentro de la familia europea; y la división no hizo sino aumentar la vulnerabilidad europea.

No habrá tercer mandato Trump y tampoco hay un plan de sucesión. Será como en «El Aprendiz», el programa concurso de televisión protagonizado por Trump en el que un grupo de empresarios compiten por ganar 250.000 dólares por un contrato para dirigir una de sus empresas. La pugna es entre el vicepresidente Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Ninguno contradice a Trump, ambos buscan bruñir sus credenciales para suceder al líder al frente del movimiento MAGA evitando dar un faux pas. Usan a Trump para posicionarse, Vance en casa, como el guardián de las esencias del retorno a la civilización de una América blanca y cristiana. Rabiosamente antimigrantes y antiélites. No se mete en cuestiones de política internacional porque con ellas no se ganan las elecciones. Y también porque es restrainer, aboga por abandonar aventuras en el exterior y concentrarse en cuestiones nacionales. Rubio trabaja para afianzar su clan, quiere pasar a la historia como quien consiguió acabar con las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Hay una parte de la agenda de política exterior que se escapa del control de Marco Rubio; porque este es el método Trump: amigos y familia. Steve Witkoff, Jared Kushner o Massad Boulos son nombrados enviados especiales encargados de resolver conflictos

internacionales —Ucrania, Gaza, Irán, Sudán— siempre con un ojo puesto en cómo sacar tajada económica.

El segundo mandato de Donald Trump ha sacudido los cimientos de las relaciones internacionales. Nada más volver a la Casa Blanca en 2025, Trump ha dejado claras sus prioridades con una rapidez y agresividad inesperadas. Flood the zone, inunda la zona de acciones para desorientar a los otros e impedir una reacción coherente y contundente. Su escepticismo hacia las alianzas es ahora política oficial: ha insinuado que el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Europa ya no está garantizado, cuestionando la vigencia del artículo 5 de la OTAN. En su primer año de mandato, ha iniciado una guerra arancelaria con todo el mundo. Ha retirado de nuevo a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y desmontado regulaciones medioambientales, abrazando una expansión acelerada de la producción de combustibles fósiles. Ha abandonado sesenta y seis organismos internacionales, entre ellos la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Centro Internacional de Comercio que yo misma lideré durante siete años, con el argumento de que son ineficaces y están mal gestionados.

El viraje ha sido tan drástico que incluso ha reintroducido el concepto de «expansión territorial» como objetivo de la política exterior estadounidense, señalando abiertamente territorios como Groenlandia, el canal de Panamá o incluso Canadá como posibles metas estratégicas —sin descartar el uso de la fuerza—. La temeraria retórica de Washington ha dejado atónitos a los aliados. Él mismo ha adoptado la Doctrina Donroe —de Donald y Monroe— o ha rebautizado el golfo de México como golfo de América. El narcisismo es una constante con Trump, y se ha acentuado en su segundo mandato.

Qué lejos suena el eco de la Carta del Atlántico firmada por el primer ministro británico Winston Churchill y por el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt en 1941, con algunos principios sobre los que fundan sus esperanzas en un futuro mejor,

entre ellos «no buscar ningún engrandecimiento territorial o de otro tipo ni ver ningún cambio territorial que no esté de acuerdo con los votos libremente expresados de los pueblos interesados».

Las instituciones internacionales tampoco han salido bien paradas. En su primera presidencia Trump ya había tildado a la Unión Europea de «enemigo» comercial y a la OTAN de «obsoleta». Ahora, con un gobierno plagado de leales dispuestos a ejecutar su visión sin frenos, aquella retórica se traduce en hechos consumados. La Administración Trump 2.0 muestra una aversión abierta al multilateralismo, bloquea nombramientos en la ONU, paraliza la OMC e ignora al G7 y al G20. Para Europa, esto supone navegar sin el habitual acompañamiento estadounidense en la gobernanza global. La Unión Europea se encuentra defendiendo en solitario principios que antes eran compartidos a ambos lados del Atlántico, desde el libre comercio regulado hasta la lucha contra el cambio climático. Cada vez resulta más evidente que el mayor peligro para el orden mundial liderado por Occidente es el propio Trump. La idea misma de Occidente —esa comunidad de valores democrático-liberales que tomó forma tras Normandía y la Guerra Fría— se ve erosionada por la política exterior de Washington.

Todo está escrito en la «Estrategia de Seguridad Nacional», un documento de una treintena de páginas publicado en noviembre de 2025. El orden regional en el documento ya es indicativo de las prioridades: primero el hemisferio occidental, después Asia y en tercer lugar Europa. El objetivo: restablecer la grandeza (perdida) de Europa. Negociar un cese de hostilidades en Ucrania para estabilizar las economías europeas, con Estados Unidos como mediador entre Rusia y Europa; ayudar a Europa a recuperar confianza en sí misma como civilización. Y es que Trump ve a Europa no solo como un socio costoso, sino como un proyecto político rival. Un adversario ideológico en temas como el multilateralismo, la protección del ciudadano a través de la regulación o los valores liberales. Esta es la novedad del segundo mandato de Trump.

La salva inicial la había disparado el vicepresidente J. D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2025. Lo que más me impresionó no fue el discurso, sino el silencio largo, incómodo, lleno de respiraciones contenidas que le siguió. Allí, en medio de la sala, apenas unas filas detrás del canciller alemán, quien asistía atónito, comprendí que Europa entraba en una nueva época, la de la intemperie estratégica. El mensaje no podía ser más claro: la mayor amenaza para Europa no eran China o Rusia, sino la erosión interna de las normas democráticas europeas, especialmente la censura, la represión del disenso y la exclusión de las voces populistas. La culpa era de los gobiernos europeos por permitir la migración masiva, erosionar la libertad de expresión, ignorar la libertad religiosa y anular elecciones en nombre de «defender la democracia» (se refería a las elecciones presidenciales en Rumanía de diciembre del 2024, anuladas por el Tribunal Constitucional de ese país antes de celebrarse la segunda vuelta debido a la intervención rusa a favor del candidato de extrema derecha Calin Georgescu).

La soledad europea no se manifestó como un portazo, sino como una ausencia. La ausencia de complicidad en las palabras del vicepresidente. La ausencia de la vieja retórica de unidad. La ausencia de la certeza de que, llegado el momento, Estados Unidos actuaría como siempre lo había hecho. Mientras diplomáticos y periodistas tomaban nota con gesto rígido, sentí que presenciaba el fin de una ilusión. La ilusión de que Europa podía seguir navegando el siglo xxi con las redes de seguridad del siglo pasado. En esta revelación, tan fría como inevitable, se encontraba la verdadera soledad.

No es solo la desconfianza hacia compromisos permanentes como en el periodo de entreguerras, no son solo las tensiones comerciales y estratégicas de los años setenta bajo los presidentes Nixon o Ford, hay una tensión entre el proyecto político de la administración Trump y el proyecto político europeo. El resultado es una relación que no se basa en una afinidad estructural o en una confianza institucional,

sino en la lógica de una utilidad inmediata. Europa debe demostrar su utilidad en cada negociación, en cada crisis, en cada decisión presupuestaria. La cooperación ya no se da por sentada, se negocia, se condiciona y se redefine constantemente. Y las diferencias ideológicas justifican injerencias en el espacio político de los Estados miembros.

Es el fin de Occidente. Es el fin de una comodidad histórica, el momento en el que Europa descubre que para seguir siendo relevante debe aprender a sostenerse por sí misma.

Los líderes europeos encaran así una dolorosa toma de conciencia. Durante la presidencia de Biden (2021-2024) recuperaron cierta confianza en la alianza transatlántica, pero fue un espejismo; fuimos lentos en reconocer las implicaciones de un posible retorno de Trump. En efecto, tras la elección de 2024 muchos en Europa reaccionaron con negación o sorpresa, a pesar de que los primeros cuatro años de Trump (2017-2020) ya habían puesto en evidencia serias tensiones. El presidente francés, el canciller alemán y otros mandatarios europeos enviaron mensajes de pronta felicitación a Trump en noviembre de 2024 —algunos con una deferencia inusitada—, intentando congraciarse con el imprevisible socio americano. Pero bajo esas fórmulas diplomáticas se escondía la preocupación. Europa está mal preparada para resistir el ataque frontal de Trump. Nuestra dependencia de Estados Unidos aún es importante en seguridad y tecnología, y las divisiones internas dificultan una respuesta unificada. La Unión Europea se presenta como baluarte del orden liberal global, pero sigue siendo vulnerable, quizá más de lo debido en tiempos geopolíticamente tan inciertos. Pero tal vez la mayor dificultad sea una cierta dependencia psicológica de Estados Unidos; como si la existencia geopolítica de Europa dependiera de la alianza transatlántica. Pero ahora Estados Unidos no invita a Europa a emanciparse, sino que aplica políticas predatorias que buscan el vasallaje europeo.

Quien mejor había intuido este viraje estadounidense fue el presidente francés Emmanuel Macron. En su discurso en la Sorbona el 26 de septiembre de 2017, apenas unos meses después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, trazó los elementos esenciales de una soberanía europea en un contexto de fragilidad europea con la salida del Reino Unido de la Unión, el avance de los populismos y una relación con Estados Unidos cada vez menos previsible. Macron percibió como nadie que, si Europa no articulaba una visión más ambiciosa, el continente corría el riesgo de quedar atrapado entre fuerzas externas y divisiones internas: «Estados Unidos se desentiende de Europa de manera progresiva e inevitable… Finalmente Europa ha tomado conciencia de sus fragilidades y de la necesidad de actuar unida… La única manera de asegurar nuestro futuro es refundar una Europa soberana, unida y democrática». Dos años después, el 7 de noviembre de 2019, Macron concedía una entrevista a The Economist y anunciaba la «muerte cerebral de la OTAN», alertando a los países europeos de que no podían seguir confiando en la alianza transatlántica para su defensa y que debían acelerar su reemplazo por una soberanía tecnológica y militar europea. Las reacciones en el seno de la Unión fueron duras. Líderes como el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, acusaron a Macron de ponerse del lado de Rusia. Pero, a pesar del revuelo, Macron tenía razón. Europa no podía poner su seguridad en manos de unos Estados Unidos cada vez menos confiables.

Pero si Macron tenía razón respecto a la poca fiabilidad de la administración estadounidense, el presidente de Lituania Nauseda la tenía respecto a la agresividad rusa. Europa no supo leer las muchas señales que recibió de Rusia antes de que esta invadiera Ucrania. O quizá no quiso hacerlo porque cada una de estas señales chocaba con la comodidad de un orden que parecía eterno. No falló la información, falló la interpretación.

Desde 2021 se acumulaban los mensajes. La acumulación de tropas rusas en la frontera de Ucrania y Bielorrusia se interpretaba como presión diplomática, no como preparación bélica. El discurso de Putin

del 12 de julio de 2021 sobre la «unidad histórica» de Rusia, Ucrania y Bielorrusia desde los tiempos de la Rusia de Kiev se entendía como retórica nacionalista, no como programa político. La creciente represión interna en Rusia se veía como un asunto doméstico ajeno a la seguridad europea, más que como indicador de la radicalización del régimen. La instrumentalización del gas con cortes, amenazas y precios manipulados no se percibía como arma estratégica, sino como problema comercial.

Merece detenerse en este último asunto. El gas no era un simple recurso energético. Era una soga y Rusia llevaba años tirando de ella con una paciencia casi cruel. Cada país europeo vivió esos momentos de manera distinta, pero todos compartían la misma sensación de estar atrapados en una dependencia que Rusia manejaba con la precisión de un cirujano. Alemania fue el ejemplo más evidente. En 2021 Gazprom redujo el flujo por el gasoducto Yamal-Europa sin dar explicaciones convincentes. Berlín hablaba de «ajustes técnicos», pero en realidad era un aviso. Cuando Nord Stream 2 quedó pendiente de certificación, Moscú jugó con los volúmenes como quien juega con un interruptor: un día subían, otro día bajaban, siempre lo justo para recordarnos quién tenía la mano en la válvula. Cada titular de periódico era un tirón más de la cuerda.

En Europa Central la presión se vivió de forma más cruda. Polonia y Eslovaquia notaron caídas repentinas en los suministros en pleno invierno 2021-2022. Moscú alegaba problemas de tránsito en Ucrania, pero en realidad estaba midiendo la resistencia de los países más vulnerables. Recuerdo un viaje a Varsovia en enero de 2022 donde todos mis interlocutores hablaban de la necesidad de acelerar los planes de emergencia energética; sentí que el frío que se anunciaba no era solo meteorológico, era político.

En el sur la señal llegó de otra manera. Italia, que dependía en gran medida del gas ruso, vio cómo los volúmenes se reducían justo cuando intentaba diversificar con gas procedente de Argelia. Un

recordatorio de que cualquier intento de emancipación energética tendría un precio. El momento más simbólico tuvo lugar en verano de 2022, cuando Rusia redujo el flujo de Nord Stream 1 al 20 % de su capacidad. La excusa fue una «turbina retenida en Canadá» a causa de las sanciones occidentales. Rusia convertía una pieza industrial en rehén diplomático. Cada día que la turbina permanecía atascada en Canadá, el mensaje era el mismo: Europa dependía de un engranaje que Moscú podía declarar indispensable o irrelevante según le conviniera. Cuando finalmente Ottawa autorizó su devolución, Gazprom rechazó aceptarla demostrando que el problema nunca fue técnico. Cada uno de esos episodios era una pieza de un mismo rompecabezas. Rusia no necesitó tanques para empezar la guerra: le bastó con hacer girar la válvula. Y Europa, atrapada entre la necesidad y la esperanza de que no fuera tan grave, tardó demasiado en reconocer que el gas no era un suministro, sino un arma.

En ese convulso 2021 Gitanas Nauseda afirmó: «Rusia está usando el gas como arma geopolítica y este comportamiento forma parte de una estrategia más amplia que incluye preparar una agresión contra Ucrania». El presidente lituano tenía razón. No era una tensión coyuntural. Rusia perseguía un cambio brutal en el orden europeo.

Macron tuvo razón sobre la necesidad de que Europa no dependiera ciegamente de Estados Unidos, y Nauseda la tuvo sobre la amenaza rusa y el uso del gas como arma. Cuando ambas advertencias resultan ciertas, la lección no es elegir entre una u otra, sino entender que Europa falló por mirar solo una parte del tablero cada vez. El Este veía la amenaza, el Oeste la oportunidad. Para los bálticos, Rusia era un riesgo existencial. Para Alemania, un socio económico. Para Francia, un actor con el que negociar. La lección es que Europa necesita integrar tal diversidad de miradas, no elegir una sola. La diversidad de percepciones es una fuerza si se integran, una debilidad si se ignoran. Las advertencias incómodas suelen ser las más importantes.

La invasión rusa de Ucrania en 2022 y el segundo mandato de Trump han ayudado a clarificar la situación: Europa necesita construir su propia capacidad de disuasión. No como proyecto francés o como obsesión del Este, sino como una necesidad compartida. No para romper con Estados Unidos, sino para no depender de su humor político. No para enfrentarse con Rusia, sino para que esta entienda que la amenaza ya no le resultará rentable. No para levantar muros, sino para que la paz deje de ser un préstamo y se convierta en una propiedad.

La disuasión es cuestión de armamento, pero sobre todo de voluntad. De energía segura, de industria fuerte, de cohesión política, de claridad estratégica y, sobre todo, de capacidad de decir «no» sin temer las consecuencias; o mejor dicho, estando dispuesta a aceptarlas. Esa es la lección que nos deja la guerra en Ucrania y que refuerza el trumpismo: un continente que no pueda protegerse a sí mismo tampoco podrá decidir por sí mismo.

«Hasta que no te sientas cómodo estando solo, nunca sabrás si estás eligiendo a alguien por amor o por soledad». Son palabras atribuidas al filósofo Sócrates. Así puede describirse el estado actual del avance hacia la soberanía europea. Europa oscila entre decidir genuinamente si necesita avanzar hacia su propia defensa y seguridad o si se trata de pasar un mal trago. No acaba de decidir si es libertad (capacidad para decidir por sí misma, incluso cuando Estados Unidos se oponga) o si es soledumbre (soledad o desolación).

En medio de incertidumbres e inercias, Europa ha encontrado un sentido de la dirección, aunque no respuestas definitivas, porque navega entre dos pulsos que laten dentro de un mismo cuerpo político y empujan en direcciones opuestas, pero igualmente poderosas. Por un lado, un deseo creciente de más integración en amplios sectores de la sociedad europea, tal y como vienen recogiendo los sondeos de opinión (eurobarómetros), que muestran cotas nunca alcanzadas de apoyo europeo a la Unión Europea y

deseos de mayor unión. Este público proeuropeo quiere una Europa capaz de proteger, de decidir y de actuar. Ve la integración como una herramienta, no como un dogma, y sobre todo teme que la fragmentación aumente la vulnerabilidad.

Pero en paralelo crecen fuerzas políticas que ven la integración europea como una amenaza a la soberanía nacional. Su fuerza proviene no solo de una ideología, sino de emociones profundas: el miedo a perder identidad cultural, la falta de control democrático en decisiones que se toman lejos, en Bruselas; la desconfianza hacia élites políticas que hablan de Europa, pero no siempre explican para qué. Estos movimientos no son homogéneos, pero comparten una misma intuición: cuanto más fuerte es «Bruselas», más débil es el Estado-nación. Ambas fuerzas nacen de una misma sensación de vulnerabilidad en un mundo inestable. Pero la respuesta es opuesta: para unos, unirse más; para otros, cerrarse más. Son dos maneras de gestionar la incertidumbre, integracionistas que ven la cooperación como protección, y nacionalistas que perciben la cooperación como vulnerabilidad.

En muchos países europeos la tensión entre europeístas y nacionalistas no se vive como un debate académico, sino como formas distintas de sentir y comprender el mundo. No es una lucha entre razón y emoción, sino entre emociones y racionalidades distintas, que se expresan a través de proyectos políticos opuestos.

Los europeístas se mueven en un horizonte amplio. Ven el continente como un espacio donde la cooperación protege más que el aislamiento. Hablan de mercados, de seguridad colectiva, de poder geopolítico, de estabilidad monetaria. Pero bajo este lenguaje técnico late también una emoción: pertenecer a algo más grande que el propio país, una confianza en que la apertura no destruye la identidad, sino que la amplía. Su racionalidad es la escala, su emoción el horizonte compartido.

Los nacionalistas parten de otro lugar. No miran hacia fuera, sino hacia dentro. Su emoción central es la pertenencia inmediata: la lengua, la historia, el territorio, la religión, la comunidad cercana. No es irracional, es una forma de ordenar el mundo. Su racionalidad es el control: proteger lo propio, decidir sin interferencias, mantener un vínculo directo entre gobernantes y gobernados. Lo que para unos es apertura, para otros es pérdida. Lo que para unos es cooperación, para otros es dilución.

El futuro de Europa se juega precisamente en ese cruce: en cómo reconciliar la emoción de la cercanía con la racionalidad de la escala, y en cómo construir un proyecto que no obligue a elegir entre la identidad y la apertura, sino que permita que ambas respiren en un mismo espacio. En este cruce es donde Europa debe encontrar su nueva narrativa: la identidad que une, la Europa que protege.

Mientras los ciudadanos europeos deciden qué quieren para Europa, las fuerzas nacionalistas gozan de un apoyo inestimable: el Kremlin y la administración Trump. Desde el Kremlin se impulsa el relato de un continente debilitado por la integración, dividido por sus élites y necesitado de recuperar soberanía nacional. Cuando medios y portavoces rusos elogian a líderes que cuestionan Bruselas o critican las sanciones, esos elogios funcionan como un espejo que devuelve a los nacionalistas una imagen de fuerza y coherencia. Es un viento que alimenta su narrativa. Y para ello no se escatima en medios. Su lugar favorito son las redes sociales, donde se multiplican los bulos y la desinformación. En enero del 2026 y en el marco de la desclasificación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de documentos en el caso Epstein, varias cuentas en X, la red social de Elon Musk, distribuyeron vídeos falsos en los que el presidente francés Macron entraba en una mansión acompañado de modelos masculinos. Los vídeos eran falsos, pero la intención era claramente debilitar la figura del presidente francés asociándolo con el caso Epstein e insinuando su homosexualidad.

Desde Washington, la administración Trump privilegia las relaciones bilaterales, la primacía del Estado-nación y la desconfianza hacia las instituciones europeas. Ese enfoque encaja con las aspiraciones de muchos partidos soberanistas europeos, que ven en ese discurso una validación externa de sus críticas a la Unión Europea. Cuando la administración Trump elogia a líderes que desafían a Bruselas o cuestionan el valor de la integración, esos gestos se convierten en señales políticas que los movimientos nacionalistas europeos interpretan como legitimación. En su visita a Alemania para acudir a la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2025, el vicepresidente J.D. Vance tuvo a gala reunirse con la líder del partido de extrema derecha AfD, Alice Weidel, mientras rehusaba hacerlo con el canciller alemán Scholz.

Así, las fuerzas nacionalistas europeas se encuentran en un cruce peculiar: dentro de sus países son defensores de la soberanía frente a influencias externas; fuera de ellos, reciben guiños y simpatías que refuerzan su posición aun a costa de grandes dosis de interferencia extranjera, que los nacionalistas usan para argumentar que no están solos, que son parte de una corriente más amplia. Pero están solos, porque ni la Rusia de Putin ni los Estados Unidos de Trump quieren Estados soberanos fuertes, quieren vasallos.

En junio de 2025, al caer la tarde, el atardecer tiñe de dorado las cruces del cementerio americano en Normandía. Un veterano europeo de las instituciones, que creció en la posguerra confiando en la Alianza Atlántica, pasea entre las cruces y las lápidas blancas. Rememora las palabras de Churchill y Roosevelt, la solidaridad de 1944, el Plan Marshall, la fundación de la OTAN. Todo aquello forjó una confianza: pasase lo que pasase, Europa y Estados Unidos estarían juntos. Ahora, ese diplomático retirado se detiene ante una cruz cualquiera y lee el nombre de un soldado caído el Día D. Siente gratitud, pero también algo nuevo: orfandad. Porque comprende que aquella América que descansa aquí, la América que cruzó el océano por la libertad europea, ya no es la misma que tuitea desde la Casa Blanca. Europa, piensa, debe aprender a vivir sin su hermano mayor.

En la memoria colectiva europea resuenan ecos de épocas aciagas. En 1938, en Múnich, las potencias europeas cedieron ante Hitler con la esperanza de preservar la paz, solo para descubrir que la cesión traía guerra. Aquella «lección de Múnich» —que a los agresores no se les apacigua impunemente— marcó para siempre la psicología europea. Ahora, algunos temen un nuevo Múnich: que, ante la fatiga occidental y la presión de Trump por reducir el apoyo a Kiev, Europa termine aceptando un mal acuerdo con Putin sobre Ucrania, sacrificando territorio ucraniano a cambio de una paz engañosa. La sombra de la «paz a nuestro tiempo» proclamada por Neville Chamberlain planea sobre los debates europeos. Pero a diferencia de 1938, cuando Europa estaba dividida y debilitada, hoy la Unión Europea dispone de otra herramienta: su unidad y sus valores democráticos compartidos. Esa es su brújula. La amarga ironía es que en esta encrucijada Europa debe aferrarse a sus principios, incluso si Estados Unidos vacila en sostenerlos. La defensa de un sistema internacional basado en normas —la integridad territorial de las naciones, los derechos humanos, la cooperación frente a retos globales— recae ahora en gran medida sobre los hombros europeos, junto con aliados afines como Japón, Canadá, Australia o el Reino Unido.

El intelectual franco-americano George Steiner escribió que Europa es un continente hecho de memoria, una civilización construida sobre capas de historia, lenguas, ruinas, bibliotecas y heridas compartidas. Normandía nos habla del valor de la alianza. Múnich, de los peligros de la división y la cobardía moral. Bruselas, sede de la Unión, quizá deba ser el próximo símbolo: el lugar donde Europa decidió hacerse mayor de edad. En un relato periodístico-literario, podríamos imaginar una escena final: de noche, en la sala principal del Consejo Europeo, los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno de la Unión discuten acaloradamente. Fuera, la ciudad está húmeda por la lluvia; dentro, el ambiente carga décadas de desacuerdos. Pero esta vez algo es diferente: uno a uno, los líderes —incluso aquellos más escépticos— se van poniendo de acuerdo en pasos concretos para la autonomía europea. Un fondo común de defensa,

un plan industrial tecnológico para no depender de potencias ajenas, un presupuesto potente ligado al cumplimiento de estándares democráticos, una voz unida en la ONU pase lo que pase en Washington. No es una transformación rimbombante; no habrá titulares épicos en los medios al día siguiente. Solo un comunicado tecnocrático esbozando una Europa más fuerte y cohesionada. Pero en esa modestia reside la grandeza: Europa avanza sin estridencias, sobria y pragmática, como la crónica diaria de un continente que se niega a desaparecer de la historia.

Al salir de la reunión, quizás alguno de esos mandatarios recuerde las palabras de Jean Monnet, uno de los fundadores de la integración europea, cuando dijo que «Europa se forjará en las crisis y será la suma de las soluciones que se den a esas crisis». A veces hacen falta choques externos para que Europa despierte. Trump, involuntariamente, ha sido uno de esos choques. La «Europa potencia» que Macron describió y que muchos soñaron antes puede nacer precisamente de verse solos en el mundo. No para rivalizar con Estados Unidos —ojalá la alianza se recomponga en el futuro—, sino para no volver a depender ciegamente de nadie.

El veterano diplomático en Normandía cierra los ojos por un instante. En su mente resuena la pregunta que formuló Trump en un discurso: «¿Tiene Occidente la voluntad de sobrevivir?». La respuesta —piensa— no depende de Trump. Depende de nosotros, los europeos. Al abrir de nuevo los ojos, ve la hilera de banderas en lo alto del acantilado: la tricolor francesa ondeando junto a la Union Jack, la de Canadá, la de Estados Unidos… y la bandera azul estrellada de la Unión Europea, que ahora flamea con orgullo propio. Quizá ese sea el símbolo de los nuevos tiempos: Europa de pie, agradecida a sus antiguos aliados, pero dispuesta a caminar con sus propias piernas. Solos en el mundo, sí, pero con la determinación serena de quien, tras dudar, finalmente ha decidido tomar las riendas de su destino. Y que entiende que defender la paz hoy pasa por disuadir a otros de hacernos la guerra.

3

GUERRA Y PAZ

«Nada podía devolverles lo que habían perdido: ni la juventud, ni las esperanzas, ni los sueños. Todo había sido consumido por la guerra, como por un incendio que no deja más que cenizas». Así describió León Tolstói en los capítulos finales de Guerra y paz los efectos de las guerras napoleónicas sobre Rusia en el siglo xix. Y es que la gloria de la guerra es efímera pero sus cicatrices son eternas.

En suelo europeo esas cicatrices tienen forma de cruces blancas en los grandes cementerios militares de Normandía e Ypres (Bélgica). Es en las tumbas de esos soldados donde se encuentran las razones por las que se hizo la Unión Europea. Para no repetir las masacres perpetradas entre países que hoy componen el principal eje vertebrador de la construcción europea, el eje francoalemán. Somos la primera generación de europeos que nace libre de guerras. Construimos puentes, no muros. Desarmamos ejércitos y armamos derechos. Creímos que bastaba con la diplomacia, la cooperación, la interdependencia. Pero la historia, terca como siempre, ha vuelto a llamar a la puerta.

En la conmemoración del 80.º aniversario del desembarco de Normandía en Saint-Laurent-sur-Mer, las palabras del presidente Biden resonaron con fuerza: «El mundo libre no caminará lejos de Ucrania, no nos rendiremos ante los matones, es simplemente impensable rendirse ante la agresión rusa». La defensa de Ucrania es la continuación de este combate por la libertad que comenzó en las playas de Normandía. Abandonar a Ucrania equivaldría a

traicionar el legado de quienes murieron allí. Es imposible no acordarse de esas palabras. Todavía no sabíamos que Estados Unidos retiraría la ayuda y el apoyo militar al país de la nueva resistencia europea, Ucrania.

La Unión Europea ha vivido toda su vida de las rentas del relato de la paz europea, intentó poner en práctica la paz kantiana que pensamos que habíamos conseguido y que sería, esta vez sí, perpetua. Kant consideraba que los Estados debían renunciar al uso de la guerra, pero también reconocía la necesidad de crear condiciones para esa paz. La paradoja es que, para que haya paz, a veces hay que estar preparados para la guerra. No fue el primero en decirlo. Si vis pacem, para bellum. Vegecio, en el siglo iv d. C., ya señalaba que un ejército bien entrenado y equipado era esencial para mantener la paz y disuadir a posibles agresores. Es justamente lo que Europa lleva intentando desde 2022.

Aunque parezca novedoso, la necesidad de una defensa común está ligada a los orígenes del proyecto europeo. De hecho, se habla antes de una Comunidad Europea de Defensa o Plan Pleven, impulsada en 1950 y abortada en 1954 por la negativa del mismo país que la impulsó a aceptarla, Francia, que de una Comunidad Económica Europea, que llegaría en 1957.

Es importante entender qué ocurrió entonces, porque ha condicionado la defensa en Europa hasta ahora. Nos encontrábamos en plena Guerra Fría y los efectos de la Gran Guerra estaban aún muy recientes. Ante el inicio de la guerra de Corea y la necesidad de prestar más atención al flanco asiático, Estados Unidos urge a los europeos a mejorar su capacidad de defensa para protegerse de una posible operación militar en Alemania similar a la de Corea del Norte contra Corea. Esto pasa por permitir a Alemania rearmarse, algo que el canciller de Alemania Occidental (la República Federal), Konrad Adenauer, desea para recuperar su soberanía plena. Francia teme ese rearme y busca limitarlo enmarcándolo en una iniciativa europea de defensa, a imagen del proyecto de comunidad del carbón y del

acero —el plan Schuman— en construcción. Por su parte, Estados Unidos busca limitar la independencia de la iniciativa de defensa europea integrándola en la estructura militar de la OTAN. Firmado inicialmente por los seis Estados miembros fundadores en mayo de 1952 en París, el plan crea una Comunidad Europea de Defensa con personalidad jurídica propia, un presupuesto común, pero bajo el comando general de Estados Unidos en la OTAN. En palabras de Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, se trata de «rearmar Alemania sin asustar a Francia». Pero cuando el Tratado de Comunidad Europea de Defensa es presentado ante la Asamblea Nacional francesa para su ratificación en 1954, esta lo rechaza. Para entonces ya ha acabado la guerra de Corea, ha fallecido Stalin y la llegada de Nikita Kruschev y su política de coexistencia pacífica da alas al sector francés liderado por el general de Gaulle y su política exterior independiente. También da alas al Partido Comunista francés, el más fuerte tras la Segunda Guerra Mundial, que defendía una política exterior más cercana a la URSS. Vence la desconfianza a que Alemania se rearmara. Es precisamente esta desconfianza hacia Alemania lo que convierte el tabú alemán en tabú europeo.

La Comunidad Europea de Defensa da paso a la Unión Europea Occidental (UEO), su versión descafeinada, que consagrará la integración de la defensa europea en la OTAN. Europa vira hacia el Atlántico, bajo el paraguas protector de Estados Unidos, un socio cuya fiabilidad se había forjado en la Gran Guerra. Estados Unidos acepta una mayor implicación en la defensa de Europa para evitar la autonomía defensiva de Europa. Este fue el pacto implícito transatlántico. Un pacto win-win. Europa aceptaba su dependencia defensiva de Estados Unidos y a cambio este se aseguraba un alineamiento europeo con pingües beneficios para su industria armamentística.

Han tenido que pasar más de setenta años y una nueva guerra en territorio europeo —en Ucrania— para dejar de tener miedo a una Alemania con un ejército y una política de defensa fuertes. Ha sido en 2024 cuando Alemania ha cumplido por primera vez con el

compromiso de la OTAN de dedicar al menos el 2 % de su PIB al gasto en defensa, impulsado por el fondo extraordinario de 100.000 millones de euros aprobado tras la invasión rusa de Ucrania.

La historia no se repite, pero a menudo rima; y en este caso, la Europa de 1952 rima bastante con la Europa de 2025. Setenta años más tarde del fracaso del primer proyecto de defensa común europea, la guerra vuelve a suelo europeo y se repiten los mismos anhelos y protagonistas.

En los años cincuenta la amenaza venía del Este, en este caso de la URSS y del Pacto de Varsovia o de la primera guerra subsidiaria de la Guerra Fría, la de Corea, que acabaría en 1953 con la partición en dos Coreas. Estados Unidos quería que Europa se rearmase, abasteciéndose de armas estadounidenses, y bajo un paraguas controlado por ellos, el Tratado del Atlántico Norte. Como entonces, Rusia también trataba de dividir a los aliados. Es interesante recordar cómo en 1950, en plena discusión sobre la Comunidad de la Defensa Europea, Stalin propone el desarme y la evacuación de tropas extranjeras de las dos Alemanias —obviamente sin tener intención de ello, pero buscando sembrar cizaña entre los aliados—, ofreciendo que ambas se pronunciasen sobre su reunificación, una manera de evitar la remilitarización de la Alemania occidental. Europa titubeaba.

Hoy, las amenazas siguen viniendo del Este: Rusia, con Corea del Norte y China, que son sus principales apoyos para mantenerse en la guerra. Aunque ahora se trata de un este ampliado hacia el sur, bordeando el Mediterráneo. Estas nuevas amenazas adoptan expresiones muy diferentes. Ya no hablamos solo de tanques y armas nucleares sino de drones, ciberseguridad, difusión deliberada de información falsa, ataques a infraestructuras críticas y el uso de la migración como arma geopolítica. El arte de la guerra sí ha cambiado.

Como entonces, Rusia sigue jugando a dividir a los europeos, y algunos se prestan a ello gustosamente. Podríamos hablar de un nuevo telón de acero, intentando recrear su antigua zona de influencia con Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Rumania…

Y como entonces, ahora Europa tiembla. Es el eterno dilema de la seguridad europea, con casi los mismos actores y muy similares amenazas. Aún decidiendo si queremos ser mayores de edad o no en seguridad y defensa. El problema de base es el mismo, y no es otro que el miedo a ceder soberanía nacional en un asunto tan arraigado en los Estados nación como la defensa.

Estados Unidos, como entonces, quiere que Europa se rearme. Pero ahora ambos se miran de reojo. Nuestro viejo aliado ha cambiado de bando y ya solo pretende seguir aprovechándose de nuestra capacidad de compra. El 2 % ya no es suficiente. Nadie sabe explicar tampoco por qué el 5 % es el nuevo número mágico. Trump afirma que los europeos nos aprovechamos de Estados Unidos en defensa, que somos unos free riders, unos gorrones. No es verdad. Nunca lo ha sido. Es cierto que Estados Unidos ha aportado más a la OTAN, pero porque siempre fue obra suya, con los países europeos (y Canadá) de «segundones» que pagaban las facturas y no hacían demasiadas preguntas. A ambas partes nos venía bien. Cada cierto tiempo establecíamos compromisos de aumentar la inversión en defensa. El compromiso del 2 % del PIB en gasto de defensa dentro de la OTAN fue acordado por los países miembros en la cumbre de Gales en septiembre de 2014. En diez años casi todos los 31 países que conforman la alianza lo han alcanzado. En gran medida, debido a la guerra de Ucrania, que ha disparado la necesidad de invertir en seguridad, no solo en defensa. Según datos del Instituto SIPRI, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, cada vez compramos más a Estados Unidos. Entre 2014 y 2019 el 52 % de nuestras compras en defensa provenía de proveedores estadounidenses. Durante el periodo 2019-2025 aumentó a más del 70 %. Es precisamente esta excesiva dependencia la que podría salvar a Ucrania en este momento. Aunque Estados Unidos haya

retirado su ayuda, clave en materia de defensa aérea, el hecho de que las compras de material sigan dependiendo de ellos y el mantenimiento continúe vinculado a su industria garantiza que siga existiendo un fuerte interés por parte del sector armamentístico estadounidense en seguir vendiendo o prestando asistencia a Ucrania. Pero, a largo plazo, no podemos depender del humor del elector americano. Nuestra seguridad dependerá también de nuestras capacidades en la industria de la defensa.

En definitiva, nos encontramos ante la falsa trampa del gasto en defensa. Estados Unidos invierte en defensa, sí, pero gran parte de esa inversión termina teniendo aplicaciones civiles: desde aeronáutica hasta ordenadores personales o drones. Lo que se presenta como gasto militar es, en realidad, una forma de política industrial. Europa, en cambio, gasta menos en defensa, pero compra más a Estados Unidos. Ahora Washington presiona para que Europa aumente su inversión militar, sabiendo que gran parte de ese dinero acabará reforzando su propia industria, justo cuando retira tropas del continente. Cuestionar la alianza atlántica no solo debilita su capacidad disuasoria: debilita también a Europa. La confianza se ha roto. Y, parafraseando a los Beatles, el dinero no puede comprar la confianza. Setenta años después, la benevolencia estadounidense se ha convertido en arma de coerción. La dependencia europea se ha transformado en una enorme vulnerabilidad.

El arte de la guerra también está cambiando. La operación Telaraña, llevada a cabo por Ucrania en junio de 2025, demostró que ya no se necesitan tanques para matar lagartijas. Nos encontramos ante la primera guerra del siglo xxi, donde el peso de la tecnología es incluso mayor que el del armamento. En el nuevo campo de batalla, un enjambre de drones puede paralizar toda una base militar. Un dron de 10.000 euros puede llegar a inutilizar o destruir vehículos blindados de 10 millones de euros, lo que cambia la relación entre el coste y la eficacia en el campo de guerra. El ataque de Israel sobre Hezbolá en el Líbano y Siria —operación Grim Beeper — haciendo explotar simultáneamente miles de buscapersonas portátiles y de

walkie-talkies dejó sin comunicaciones a esta organización. El ataque israelí contra Irán demostró que se puede debilitar el programa nuclear iraní matando con drones de tecnología altamente sofisticada a los militares y científicos a cargo de su desarrollo.

La defensa, más que nunca, es cuestión de inteligencia, de inteligencia artificial también. No se trata de disparar a las flechas, sino de disparar a los arqueros antes de que ataquen. Satélites, ciberataques, sistemas de interferencia, big data, propaganda digital y redes sociales forman hoy parte del concepto de seguridad extendida. La guerra ya no empieza con una invasión terrestre o con el asesinato de un príncipe heredero, sino con una filtración, una campaña de desinformación o un acto de sabotaje a un cable submarino.

Además, el monopolio de la fuerza, que Weber otorgó a los Estados, ya ha dejado de pertenecerles en exclusiva. La industria privada desempeña un papel fundamental. Ya no son los tiempos de los ejércitos nacionales y los todopoderosos Ministerios de Defensa. El poder de Elon Musk para apagar satélites de comunicaciones, de Palantir, la empresa tecnológica estadounidense especializada en software de análisis de datos a gran escala para intervenir en inteligencia, o de los grupos mercenarios como Wagner o Blackwater crea un nuevo ecosistema de defensa donde se multiplican los actores, muchos de ellos en las zonas de sombra de la legalidad internacional. La defensa del siglo xxi se juega en el espacio, en los fondos marinos y en internet. Son el nuevo teatro de operaciones. Las guerras de hoy ya no se libran solo en trincheras, sino en las mentes de los ciudadanos. Los datos son el nuevo armamento de los grupos organizados que pretenden desestabilizar nuestras democracias. También de los propios Estados para intervenir en contextos de seguridad nacional. Mientras tanto, se debilitan las alianzas militares tradicionales de Estados Unidos en Europa y Asia, y tras el ataque de Israel a Irán resurge con fuerza la necesidad de dotarse del arma nuclear como mecanismo de disuasión. De ahí que muchos expertos encuentren un cierto paralelismo con la disuasión

nuclear de la Guerra Fría. En este caso estaríamos hablando de una disuasión ampliada. Reforzar el poder disuasorio de Europa no es apostar por la guerra, sino una garantía de paz: mostrar que Europa está preparada para defenderse es la mejor forma de evitar que otros se atrevan a atacarla.

Llevo tiempo diciendo que con Trump hay que sentarse con una pistola cargada en la mesa de negociación. Si los demás te ven débil, abusarán de ti. Lo que ha quedado de manifiesto desde el fin de la pandemia y sobre todo desde la segunda invasión de Ucrania por parte de Rusia es que Europa ya no está a salvo y nuestra seguridad ya no está garantizada por nuestra alianza con Estados Unidos. Estamos solos. Por eso necesitamos rearmarnos. Necesitamos capacidad de disuasión.

Mientras Europa debate y lentamente despierta, otras potencias se están rearmando a marchas forzadas.

Rusia, pese a las sanciones y a sus dificultades económicas, ha disparado su gasto militar hasta niveles estratosféricos. En 2024 invirtió oficialmente más de 120.000 millones de dólares en defensa (según SIPRI) —lo que supone cerca del 6-7 % de su PIB y aproximadamente un 40 % del gasto total del Estado ruso si incluimos la seguridad interna—. Es un porcentaje insostenible a largo plazo para cualquier nación, pero el Kremlin parece dispuesto a ese sacrificio en aras de su agenda imperial. Gracias a ese esfuerzo, ha puesto su industria armamentística en pie de guerra: la producción de misiles, tanques y drones en Rusia se ha triplicado desde 2022, superando incluso el ritmo al que los están perdiendo en el frente. Moscú está echando mano de fábricas clandestinas y triangulaciones para sortear las sanciones, importando tecnología de contrabando y ampliando sin escrúpulos el reclutamiento de carne de cañón, incluso de Corea del Norte: se estima que ha movilizado o reclutado hasta 300.000 soldados adicionales cada año desde que inició la guerra, compensando sus enormes pérdidas.

Por su parte, China sigue una trayectoria ascendente más silenciosa pero igual de contundente. Ya es la segunda potencia militar mundial en gasto: supera los 250.000 millones de dólares anuales, quizá bastante más en realidad y, aunque oficialmente su presupuesto representa solo un 1,7 % del PIB, en términos absolutos equivale aproximadamente a cinco veces el esfuerzo conjunto de todos los miembros de la Unión Europea. Pekín ha invertido esos fondos ingentes en una modernización acelerada de sus fuerzas armadas, especialmente de su armada. Hoy la marina china es la más numerosa del mundo en buques, muy por encima de los cerca de 300 buques de la US Navy, si bien la estadounidense conserva aún la ventaja en tonelaje y experiencia. China bota destructores, fragatas y buques anfibios a un ritmo sin precedentes, con el claro objetivo de dominar el Indo-Pacífico y desafiar la supremacía naval occidental. Paralelamente, invierte de forma masiva en tecnologías emergentes militares: inteligencia artificial aplicada a sistemas armamentísticos, misiles hipersónicos capaces de burlar defensas, capacidades espaciales y ciberarmas ofensivas. Pekín no oculta sus ambiciones: consolidar su influencia sobre el mar de la China Meridional, proyectar poder sobre rutas comerciales vitales y, llegado el caso, forzar la «reunificación» de Taiwán incluso por la fuerza.

Ni Rusia ni China están solos en este rearme global. Corea del Norte, pese a su aislamiento, ha logrado desarrollar y exportar armamento de impacto: ha vendido misiles tácticos, cohetes de artillería y municiones a Rusia para sostener la campaña en Ucrania; a cambio, posiblemente, de tecnología y divisas.

Irán, por su parte, se ha convertido en un fabricante destacado de drones de combate y misiles balísticos de medio alcance, como tristemente han comprobado tanto las fuerzas ucranianas, atacadas por enjambres de drones Shahed iraníes, como los países del Golfo, que amén de drones y misiles iraníes, sufren la amenaza de los misiles hutíes respaldados por Teherán.

Incluso potencias regionales amigas como India o miembros de la OTAN como Turquía siguen estrategias cada vez más autónomas en materia de armamentos: Ankara, por ejemplo, desarrolló sus propios drones de ataque (Bayraktar), sistemas antiaéreos e incluso adquirió misiles rusos S-400 cuando Estados Unidos titubeó en darles acceso a su tecnología, afirmando así su independencia; Nueva Delhi incrementa su arsenal tanto con compras a Rusia como con producción local (submarinos nucleares, misiles supersónicos BrahMos) al servicio de una doctrina de potencia emergente no alineada. Por no hablar de otros más cercanos a Europa, como Japón o Australia.

Todo este panorama dibuja un mundo en rearme acelerado, donde las herramientas de coerción militar proliferan. Europa se encuentra rodeada de vecinos en pleno proceso armamentista: al este, Rusia; al sureste, Irán y los conflictos latentes de Oriente Medio; al sur, Marruecos y Argelia, la inestabilidad del Sahel y la expansión de grupos paramilitares; incluso al oeste, nuestro aliado estadounidense presionándonos para que tomemos el relevo regional mientras ellos enfocan su mirada hacia China.

La conclusión es ineludible: ingenuidad o indefensión pondrán en riesgo la seguridad y el modo de vida europeo. Adaptarse a la realidad estratégica y prevenir amenazas o perder la prosperidad. Supervivencia o declive. Con estos datos sobre la mesa, ya parece menos exagerado que se hable tanto de guerra en la opinión pública y de cómo financiar la defensa.

En 1987 el presidente de la Comisión Europea Jacques Delors encargó al economista italiano Paolo Cecchini el «Informe sobre el coste de la no Europa», que utilizó para impulsar la construcción del mercado único europeo. La idea central era que la ausencia de una acción política común a nivel europeo implicaba una pérdida de eficiencia para la economía general o que no se dispusiera de un bien público colectivo que de otra manera sí estaría disponible. O, dicho de otra manera, de medir el «valor añadido europeo», puesto

que este último pretende identificar los beneficios de tomar medidas políticas a nivel europeo, ya sea en forma de crecimiento adicional generado, de ahorro en gasto público o de otros beneficios de una más eficiente asignación de recursos.

Si hay un ejemplo paradigmático de ese valor añadido europeo es el de la defensa, donde duplicidad e ineficiencia cuestan muy caro a los europeos tanto en términos económicos como en inseguridad.

No invertir en defensa europea tiene un precio, a menudo mayor que el de prepararse a tiempo. La historia nos brinda ejemplos elocuentes. Desentenderse de conflictos que amenazan valores democráticos suele acarrear resultados nefastos. Europa aprendió esto por las malas cuando, hace casi un siglo, las potencias liberales no respaldaron a la Segunda República española: primero lo pagó España y luego lo pagaron las propias potencias con una guerra aún más devastadora.

Hacer concesiones a agresores solo conduce a que estos pidan más; la política de apaciguamiento de Múnich en 1938, cediendo ante Hitler, no evitó la guerra, sino que la hizo inevitable. En nuestros días, la guerra de Ucrania ilustra brutalmente el coste de la inacción occidental previa. Durante años Europa confió en que la amenaza rusa podría contenerse con declaraciones y sanciones mínimas. Esa espera ingenua no disuadió a Putin: al contrario, terminó desembocando en una invasión a gran escala cuyo final aún es incierto. Hoy llevamos cuatro años de conflicto en suelo europeo, con un coste humano incalculable y más de 180.000 millones de dólares en apoyo europeo a Kiev. Esto supone menos del 1 % del PIB agregado de la Unión, pero el coste de no haber actuado antes —en disuasión militar, en reducir la dependencia energética de Rusia — ha sido claramente mayor. Del mismo modo, no intervenir en Siria al inicio de su guerra civil tuvo un precio elevado: más de seis millones de refugiados sirios terminaron huyendo de su país, de los cuales alrededor de 1,4 millones buscaron refugio en la Unión Europea con la consiguiente presión sobre nuestras sociedades. Y si

miramos al ámbito invisible de la red, la falta de preparación ante amenazas cibernéticas ha dejado hospitales e infraestructuras críticas expuestos a ciberataques extremadamente costosos.

Ahora bien, ¿en qué consiste la nueva defensa europea de la que tanto se habla? La Unión Europea como tal, con sus propios fondos a través de la Comisión Europea y agencias dependientes, invierte sobre todo en proyectos de investigación, para coordinar compra de capacidades conjuntas, infraestructura de despliegue, ciberseguridad, cooperación operativa y misiones externas. Los Estados gastan principalmente en personal y funcionamiento entre un 40 y un 50 %, en equipamiento e infraestructura alrededor de un 25 % y aumentando, y en misiones alrededor de un 15 %. En 2025 se prevé que la inversión en investigación y tecnología alcance los 5.000 millones de euros. El gran reto sigue siendo la lógica nacional: veintisiete ejércitos, veintisiete lógicas de compra y poca economía de escala.

Como repite constantemente el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, el verdadero talón de Aquiles europeo es la fragmentación industrial y estratégica. Nuestro mercado de defensa sigue organizado básicamente a escala nacional, con escasas compras conjuntas y muchas duplicidades. Esto provoca ineficiencias enormes: elevados costes unitarios, solapamiento de programas y falta de economías de escala. Por ejemplo, Europa llegó a tener en los años pasados hasta diecisiete modelos distintos de carros de combate y más de una decena de tipos de aviones de combate, un lujo que ni siquiera la superpotencia estadounidense se permitiría (Estados Unidos opera esencialmente con un modelo principal de tanque y unos dos o tres de cazas). La consecuencia de esta fragmentación es clara: competitividad menguante de la industria europea frente a gigantes como Estados Unidos o China, costes más altos y dependencia tecnológica.

La falta de un verdadero mercado único europeo de defensa encarece notablemente cada sistema de armas: la producción por

lotes pequeños hace que cada unidad salga más cara y que muchas empresas europeas no alcancen masa crítica para innovar. Sin una política industrial común, corremos el riesgo de perder definitivamente el tren tecnológico: quedarnos como meros compradores de las grandes potencias y ver cómo nuestro talento y tejido industrial se marchitan.

Pero la incómoda independencia que Europa debe forjar no es solo cuestión de presupuestos o ejércitos tradicionales, sino también de tecnología y control de las nuevas formas de guerra. En los últimos años, los campos de batalla —de Ucrania a Irán, de Siria al Sahel— han sido laboratorio de una revolución militar basada en drones, inteligencia artificial, satélites y poderío informativo. Y de nuevo, Europa corre el riesgo de quedarse atrás y dependiente.

El conflicto en Ucrania enseña al mundo el impacto decisivo de tecnologías emergentes. Los drones se han convertido en la «artillería del pobre»: desde cuadricópteros comerciales adaptados para lanzar granadas hasta sofisticados drones turcos Bayraktar, todos están cambiando las reglas del combate. Sirven para reconocimiento, ataques de precisión, logística e incluso combates navales, utilizados tanto por ejércitos regulares como por milicias. Europa no es ajena a esta tendencia y ha acelerado su desarrollo. Y se trabaja también en normativas conjuntas porque, hasta ahora, la regulación de drones militares es fragmentaria y cada país va por su lado. La Eurocámara elabora reglas claras, respeto al derecho internacional y prohibición de los llamados LAWS (armas autónomas letales) que puedan decidir matar sin control humano. Bruselas insiste en que cualquier inteligencia artificial militar mantenga control humano significativo sobre decisiones de fuego. Europa quiere innovar en tecnología bélica, pero sin perder sus valores éticos: es un equilibrio delicado, sobre todo si competidores globales como China o Rusia no comparten las mismas reservas. Y mientras Europa lidera la regulación ética de la IA, quiere a la vez fomentar su industria para no depender de otros en este terreno crítico, en tierra, en el espacio y en el ciberespacio. Por eso impulsa simultáneamente

una política industrial de chips y supercomputación para garantizarse insumos estratégicos. La autonomía tecnológica es la nueva frontera de la soberanía europea.

Mientras Europa busca ponerse al día en tecnología militar, Trump ha desbaratado equilibrios preexistentes. Su administración ha renunciado a iniciativas de control de armamentos, como renovar el New START, el tratado de reducción nuclear con Rusia, que expiró sin sucesor, lo que plantea un mundo más inseguro. También ha relajado restricciones a la exportación de armas estadounidenses, fomentando una carrera armamentística en regiones volátiles. Y ha coqueteado con la proliferación nuclear al sugerir que aliados como Japón o Corea del Sur quizá deberían armarse nuclearmente para defenderse sin depender de Estados Unidos. Todo ello obliga a Europa a redoblar sus esfuerzos diplomáticos al tiempo que acelera su resiliencia tecnológica.

En suma, la tormenta perfecta: más amenazas, menos certezas externas y una carrera contra el reloj para que Europa no se quede tecnológicamente rezagada en la próxima guerra. La inacción sale cara. Invertir en seguridad hoy es siempre más barato que pagar las consecuencias de la inseguridad mañana. Se trata, en definitiva, de un seguro colectivo: puede parecer oneroso, pero es sin comparación preferible a afrontar una tragedia por no haber estado asegurados o por la vulnerabilidad de depender de otros para nuestra seguridad. Pero ¿cómo avanzar políticamente?

Debemos al expresidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker la famosa frase pronunciada en el momento álgido de la crisis financiera de 2009: «Sabemos perfectamente lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo ser reelegidos después». Se refería a las dificultades de hacer reformas sistémicas manteniendo el apoyo de los votantes. Esta máxima es hoy algo menos sólida dados los tiempos convulsos en que vivimos y la demanda ciudadana de mayor seguridad. Pero ello no significa que los gobiernos tengan carta blanca. Necesitan argumentar, explicar y sobre todo convencer

a sus electores de que los europeos no estamos condenados a ser botín de guerra o esfera de influencia de otros. Pero si Europa desea autonomía estratégica, si quiere capacidad de decisión, entonces la respuesta pasa también por invertir más en defensa. Si Europa quiere ser capaz de disuadir amenazas, proteger sus fronteras y adaptarse a un entorno geopolítico cada vez más impredecible, ello pasa por modernizar sus ejércitos, invertir en capacidades comunes y avanzar, con paso firme, hacia una verdadera defensa europea, lo que implicaría a la larga un ejército común europeo.

Tres son los argumentos que se avanzan para cuestionar una mayor inversión en defensa en Europa. Hay quienes temen la transformación del paradigma de la Unión como proyecto de paz hacia un militarismo. Hay quienes cuestionan el aumento del gasto militar frente a las necesidades de inversión en políticas sociales. Hay quienes desconfían de que sus vecinos europeos estén dispuestos a morir por ellos y prefieren invertir en clave nacional o regional pero no a escala europea. La capacidad de avanzar en esta cuestión clave para la autonomía europea dependerá de la seriedad con la que se responda a estas críticas y se construya legitimidad democrática.

Tratemos en primer lugar el riesgo de militarismo. Si hay un país emblemático en el abandono del belicismo este es Alemania. La doctrina antibelicista nacida tras los horrores del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial dio lugar a la doctrina del «nunca más» y formateó el alma pacifista de los alemanes de la posguerra. Por eso, el 27 de febrero de 2022 quedará marcado en el calendario europeo como el del «cambio de era». Zeitenwende es como lo llamó el canciller Olaf Scholz en su discurso ante el Bundestag apenas tres días después de la invasión rusa de Ucrania, rompiendo con décadas de pacifismo estructural en Alemania. El canciller anunció una inversión sin precedentes de 100.000 millones de euros en modernización de las fuerzas armadas, un aumento del gasto militar más allá del 2% y una nueva estrategia para la industria de la defensa. El anuncio fue inmediatamente apoyado por el líder de la

oposición, el hoy canciller Friedrich Merz, y por cerca del 80 % de la población. Pero el canciller insistió en que este cambio de era no implicaba renunciar a la paz, sino protegerla mediante la disuasión. Que reforzar el poder disuasorio europeo no era apostar por la guerra, sino por lo contrario, por una garantía de paz. El discurso cosechó una gran ovación dentro y fuera del Bundestag, pero también suscitó la preocupación de una ciudadanía obligada a cambiar de pie para hacer frente a una guerra que siente cada vez más cerca.

Si la historia reciente demuestra algo es que la debilidad puede tentar a los agresores. En palabras llanas: si los demás te ven débil, abusarán de ti. Mostrar firmeza defensiva es la mejor forma de evitar que otros tan siquiera consideren la agresión. No se trata de armarse para hacer la guerra, sino de tener los medios para que no te la hagan. Elevar las capacidades militares europeas no significa abogar por soluciones militares a todo conflicto, sino disuadir a quienes podrían atacarla. De hecho, Europa no tiene por qué renunciar a su vocación pacifista por armarse. En el mundo actual, un pacifista armado tiene más probabilidades de sobrevivir. Estamos actuando por nuestra propia seguridad, «no para socavar la relación transatlántica, sino para mejorarla», así lo recordaba el ministro de Asuntos Exteriores polaco Radosław Sikorski. En otras palabras, dotarse de medios de defensa no significa convertirse en agresores, sino garantizar más seguridad y soberanía. Quienes hoy abogan por una autonomía estratégica europea insisten en que no hay contradicción entre ser una sociedad amante de la paz y mantener un ejército fuerte —la contradicción sería proclamar la paz mientras se permanece indefenso ante quienes sí tienen ejércitos agresivos—; en que Europa puede y debe ser, en suma, una «pacifista armada», fiel a sus valores, pero preparada para defenderlos. No se trataría de abandonar los ideales europeos, sino de protegerlos con realismo.

El segundo elemento de crítica podría resumirse en ¿cañones o mantequilla? Dicen que la expresión la formuló hace más de cien años William Jennings Bryan, famoso político progresista tres veces

aspirante demócrata a presidente de Estados Unidos, y que siendo secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson decidió dimitir de su cargo cuando este aumentó la producción de munición frente a la producción de lácteos en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial. Varias décadas más tarde, en 1936, el nazi alemán Hermann Göring afirmaba que «los cañones nos harán fuertes, la mantequilla solo nos hará gordos» para justificar el aumento del gasto militar de la Alemania de Hitler. En 2014, el presidente Obama fue acusado de gastar demasiado en «mantequilla» y desproteger el gasto militar. Cuando hablamos de «tanques o mantequilla» damos a entender que, si queremos más seguridad, tenemos que renunciar al gasto en políticas sociales.

¿Y si contraponer gasto social y gasto militar fuera un falso dilema, casi una trampa argumental? La narrativa de «o escuelas o tanques» no se sostiene empíricamente. En términos presupuestarios, la defensa es todavía una fracción mínima del gasto público europeo, muy por debajo de lo que destinamos a educación, sanidad u otras partidas sociales. Para dimensionarlo con datos: en 2023, el conjunto de la Unión Europea invirtió alrededor de 227.000 millones de euros en defensa, un 2,7 % del gasto público total (equivalente al 1,3 % del PIB). Incluso con el aumento reciente, esta proporción permanece cercana al 3 % de media, cuando la educación y la sanidad suman fácilmente cinco o diez veces más. Es decir, por cada euro que Europa dedica a sus fuerzas armadas, dedica decenas a sus escuelas, hospitales y pensiones. Además, el incremento en defensa de los últimos dos años —impulsado por la guerra en Ucrania— ha llegado tras décadas de recortes o estancamiento: partíamos de unos niveles muy bajos (en 2021 la defensa apenas suponía el 2,4 % del gasto público europeo, ahora ~2,7 %). No parece que se esté desmantelando el Estado del bienestar para invertir en armas; sino que se está corrigiendo parcialmente un déficit de inversión en seguridad acumulado. Incluso con el alza actual, muchos países europeos apenas alcanzan el objetivo mínimo del 2 % del PIB en defensa comprometido en la OTAN. En 2025, el gasto agregado de los 27 miembros de la Unión rondará el 2 % del

PIB, lejos de potencias como Estados Unidos (3,4 % del PIB) o Rusia (más del 6 % del PIB). Dicho de otro modo: no es que Europa gaste demasiado en defensa, sino que otros actores gastan muchísimo más.

Aumentar los presupuestos militares implica esfuerzos fiscales, pero plantearlo como una disyuntiva excluyente («o misiles u hospitales») sería erróneo y peligroso. Erróneo, porque los datos muestran que hay margen para reforzar la defensa sin desatender las necesidades sociales: la economía europea es lo bastante grande (PIB de 19 billones de dólares) para financiar ambas cosas a la vez. Además, la industria de la defensa puede asimismo contribuir a aumentar el tamaño de la economía europea.

Lejos de ser dinero «perdido» para la sociedad civil, la inversión en tecnologías militares suele traducirse en innovaciones civiles de alto impacto. La historia de la tecnología moderna abunda en ejemplos de este doble uso. Fue la investigación militar la que financió o aceleró algunos de los mayores adelantos de nuestra era: desde el microondas hasta los ordenadores, los radares, la energía nuclear, los semiconductores, y por supuesto Internet y el sistema GPS —hoy omnipresentes en nuestra sociedad— nacieron de proyectos de defensa. Incluso inventos tan mundanos como la cinta adhesiva duct tape tuvieron origen en necesidades militares. Los satélites artificiales que permiten las telecomunicaciones globales y la observación terrestre surgen de la carrera espacial motivada por la defensa. La medicina de emergencias y los adelantos en cirugía traumática se han perfeccionado (lamentablemente) en los campos de batalla, para luego salvar vidas en nuestras ambulancias. En suma, lo que se presenta contablemente como «gasto militar» es muy a menudo una forma de inversión en I+D con efectos multiplicadores en la economía civil.

Si Europa destinase más recursos a la defensa, buena parte retornaría a la sociedad en forma de empleos de alta cualificación e industrias punteras. La Comisión Europea estima que el sector defensa de la Unión ya emplea en la actualidad a 500.000 personas directamente, y a cerca de un millón adicional de forma indirecta, lo que equivale al 2 % del PIB de la Unión. Por supuesto, estos empleos y avances no surgen automáticamente de cualquier gasto militar —dependerá de cómo y dónde se invierta—, pero con una estrategia adecuada (apoyando la industria europea, la I+D dual, las pymes tecnológicas, etc.) la defensa puede ser un motor de innovación y progreso, no un lastre.

Pero la pretendida dicotomía también sería peligrosa, porque ese discurso enfrenta artificialmente a la opinión pública, y puede ser explotado por demagogos antieuropeos o por nuestros adversarios geopolíticos. En palabras de los profesores de ciencias políticas Hemerijck y Matsaganis, «toda la narrativa de que Europa debe elegir entre proteger su modelo social o reforzar su defensa es no solo políticamente desafortunada; es empíricamente infundada». Debilitar el Estado del bienestar minaría la cohesión interna, pero desatender la seguridad dejaría a Europa vulnerable a la coacción externa. No se trata de elegir entre tanques o mantequilla. Es que sin tanques tampoco habrá mantequilla. Sin inversión en defensa seremos pasto para los que sí se están armando y hacen ostentación de ello. No hay que irse muy lejos. Groenlandia. Nuestra soberanía ya está siendo amenazada.

La única estrategia sensata es preservar ambos pilares: seguir invirtiendo en cohesión social, porque esta es también generadora de mayor resiliencia, y destinar lo necesario a defensa, porque sin seguridad ninguna conquista social perdura. Europa puede permitirse ambas cosas a condición de hacerlo de manera más integrada. Oponer «defensa» y «bienestar» supone pasar por alto que en Europa defendemos precisamente un cierto modo de vida: libertades, prosperidad compartida, valores humanistas. Defender el

Estado del bienestar incluye, en última instancia, defender al Estado que lo sostiene y a la comunidad política que lo hizo posible.

La tercera duda que se plantea se resume en esta cuestión: ¿estamos dispuestos a morir por Europa? El 4 de mayo de 1939 el socialista francés, luego reconvertido al colaboracionismo, Marcel Déat escribió una columna de opinión titulada «¿Por qué morir por Danzig?». La Alemania nazi había enviado un ultimátum a la Segunda República polaca demandando la entrega de la ciudad de Danzig (hoy Gdansk). Ante la petición de ayuda de Polonia, en su artículo Déat se oponía al envío de tropas francesas a Polonia y acusaba a esta de provocar a Alemania, que pedía la entrega de la ciudad como gesto de apaciguamiento. Aunque esta columna no tuvo gran repercusión en Francia, en Polonia se convirtió en símbolo del riesgo de ser abandonado por sus aliados. No es de sorprender que desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania esta expresión se vuelva a escuchar con frecuencia.

No estamos en 1939. Los 27 Estados miembros también nos hemos comprometido a la defensa común en caso de agresión. Lo decimos en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea: «Si un Estado miembro es víctima de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas». Los europeos miembros de la OTAN nos hemos comprometido también a responder en caso de que uno de sus miembros sea atacado. Es el artículo 5 del Tratado de la OTAN. Soldados europeos han dado la vida bajo bandera de la OTAN o de Estados Unidos en Afganistán o en Irak, aunque Donald Trump rutinariamente lo olvide o lo desprecie. Nuestros soldados también han perdido la vida en misiones de paz bajo bandera de Naciones Unidas en lugares como Líbano, Mali o República Centroafricana. Pero lo cierto es que construir una autonomía estratégica europea requerirá de legitimidad democrática. Y por ello es importante auscultar el estado de opinión de los ciudadanos europeos.

¿Están los ciudadanos dispuestos a respaldar este refuerzo de la defensa? Todos los sondeos recientes indican que sí, rotundamente. Lejos de la caricatura de una opinión pública pacifista a ultranza o indiferente, la invasión de Ucrania ha despertado una conciencia nueva sobre la necesidad de proteger Europa. Según el último Eurobarómetro, más de un 80 % de los europeos está de acuerdo en que «la Unión Europea debe reforzar su capacidad para defenderse», y alrededor del 77 % apoya abiertamente que tengamos una política común de seguridad y defensa. Estos son niveles de aprobación inéditos en décadas, lo que demuestra que la ciudadanía entiende la gravedad del momento. El respaldo se extiende a países tradicionalmente reticentes: incluso en naciones con histórica neutralidad, la opinión se está inclinando hacia una mayor integración en defensa. En España, más del 75 % de los encuestados aprueba aumentar las capacidades defensivas europeas (dato del CIS, marzo 2024). Y una encuesta IFOP/Le Grand Continent de otoño de 2023 reveló que un 70 % de los europeos cree que «la Unión Europea debe garantizar su propia defensa sin depender de Estados Unidos». Este último dato es muy revelador del cambio de mentalidad: no porque Europa reniegue de su alianza con Estados Unidos, sino porque incluso los ciudadanos entienden que debemos ser capaces de valernos por nosotros mismos en última instancia. Los europeos —de Helsinki a Lisboa— han visto las imágenes de las matanzas rusas en Bucha y Mariúpol, han sentido la amenaza a las puertas y han llegado a una conclusión sencilla: prefieren invertir más en defensa a vivir con miedo o bajo chantaje de potencias agresivas. Esta madurez de la opinión pública es uno de los activos más importantes con que cuenta Europa en esta coyuntura histórica.

Llegados a este punto, es necesario asentar un principio fundamental: en el siglo xxi, el Estado de bienestar europeo solo podrá sostenerse si se garantiza la seguridad que lo hace posible. La seguridad nacional no es un añadido más a las políticas públicas; es la condición sine qua non para que todas las demás —educación, sanidad, pensiones…— la antecedan.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa construyó prósperos Estados de bienestar bajo el paraguas protector estadounidense. Aquel fue un pacto tácito de la posguerra: los europeos podían destinar más recursos a escuelas y hospitales porque confiaban en que la OTAN, es decir, Estados Unidos, velaría por su defensa frente a la URSS. Ahora, en plena era de incertidumbre geopolítica, ese contrato social implícito debe renovarse en clave europea. Si queremos seguir viviendo en sociedades abiertas, prósperas y libres, debemos asumir colectivamente que tenemos que costear también su seguridad. La defensa es hoy la condición de posibilidad del resto de políticas: sin seguridad no hay bienestar. En otras palabras, esperar ingenuamente «lo mejor» es irresponsable; esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor es la máxima realista que debe guiar el nuevo contrato social europeo. Esto implica integrar plenamente la seguridad en nuestro modelo europeo: así como ningún ciudadano cuestiona hoy la necesidad de financiar una sanidad pública o una educación universal, debemos entender que financiar unas fuerzas armadas eficaces forma parte del pacto social de nuestras democracias avanzadas. La defensa, lejos de ser un concepto reaccionario o ajeno a la Europa social, se revela como el seguro de vida del Estado del bienestar. Dicho con sencillez: invertir en defensa es invertir en nuestra forma de vida. Es el precio —modesto, si se compara con los beneficios— de vivir en paz y libertad.

Este nuevo contrato social europeo necesitará de tres elementos: compartir riesgos, integrar nuestros sistemas de defensa y construir una nueva épica de la paz europea.

En primer lugar, necesitamos definir las pesadillas que compartimos. Antes de construir una defensa común, debemos compartir un diagnóstico común: definir juntos las amenazas a las que nos enfrentamos. No basta con una visión abstracta de la seguridad; necesitamos una cartografía real de los miedos europeos. Hoy, las detonaciones se escuchan más cerca en el este que en el sur, pero las amenazas son transversales: ciberataques, sabotajes,

desinformación, terrorismo, y el uso de la presión migratoria como arma geopolítica.

En noviembre de 2022, el Parlamento Europeo declaró a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Minutos después, la web del Parlamento fue derribada por un ciberataque reivindicado por hackers prorrusos. Según reportó Político, el ataque fue «sofisticado» y buscaba enviarnos un mensaje tras la resolución contra Rusia: un mensaje claro de que pueden interferir en nuestras decisiones y en nuestra soberanía cuando les parezca oportuno. Lo mismo ocurrió con ataques a cables submarinos en el mar Báltico, o intentos de injerencia electoral en varios países. Las amenazas existen, aunque no siempre abran los telediarios.

En segundo lugar, necesitamos construir mercados y capacidades comunes. Es decir, poner orden en la fragmentación europea. Por eso no basta con invertir más, hay que invertir mejor, reducir duplicidades y coordinarnos, apostar por alianzas público-privadas. Veintisiete ejércitos, veintisiete modelos de adquisición, veintisiete criterios de interoperabilidad: así no se puede hacer frente a una amenaza común. Solo la suma de nuestras capacidades puede hacernos verdaderamente grandes. Por último, también se trata de invertir juntos, endeudarse juntos, comprar conjuntamente y cooperar con terceros países, permitir la incorporación de países candidatos, como Ucrania, así como de países del Espacio Económico Europeo, o del Reino Unido o Turquía, a través de acuerdos específicos.

Ya lo hicimos una vez durante la pandemia: supimos unirnos para negociar conjuntamente las vacunas, coordinar la producción y garantizar un acceso equitativo. En esta ocasión no nos enfrentamos a un virus, sino a la violencia. Necesitamos un mercado europeo de la defensa que funcione, que permita adquisiciones conjuntas, que apoye a la industria europea con músculo financiero e innovación propia.

La ventana de oportunidad está abierta, y se han dado pequeños pasos en esa dirección. Por ejemplo, el plan de estímulo «Readiness 2030», presentado en 2025, moviliza 500 millones de euros en proyectos de adquisición conjunta. Se han modificado las normas fiscales para facilitar la financiación comunitaria de proyectos de defensa. Además, por primera vez, la Comisión Europea plantea una suerte de «DARPA europea» para innovación dual civil-militar y promueve sinergias entre los fondos de investigación civiles y de defensa.

El programa de préstamos SAFE, con presupuesto comunitario, ya ha sido solicitado por dieciocho Estados miembros, entre ellos España, por un total de 127.000 millones de euros.

Pero aún es insuficiente. Necesitamos nada menos que una política industrial de defensa europea. Eso implica coordinar mejor las necesidades de los ejércitos nacionales para lanzarlas al mercado unificadamente, y evitar veintisiete concursos paralelos; fomentar consorcios transnacionales entre nuestros campeones industriales, al estilo Airbus en aviación civil, en vez de que compitan entre sí; y sí, aceptar cierta «preferencia europea» en compras estratégicas para impulsar la industria de defensa europea. Un mercado europeo integrado de la defensa supondría mayor escala, menores precios y más preparación militar. Además, reservar una parte del esfuerzo a compras de fabricación local —cuando sea viable— reforzaría nuestra autonomía estratégica y nuestra innovación tecnológica, evitando que quedásemos rezagados en tecnologías militares clave.

En los próximos años, los países europeos planean gastar cifras muy altas en rearmarse. Sería un despropósito histórico que todo ese dinero se desperdigase en veintisiete direcciones distintas o terminase engrosando las arcas de proveedores extraeuropeos. La integración industrial no será fácil —existen obstáculos políticos y rivalidades nacionales—, pero es imprescindible. Nos va en ello no solo la eficiencia del gasto, sino mantener una base tecnológica propia. Si no la logramos, Europa se verá relegada al papel de

«observadora» en la competición tecnológica global entre Estados Unidos y China. En cambio, si actuamos juntos, podemos ser competidores y no solo clientes. Indudablemente, habrá que adquirir cuando convenga ciertos armamentos de aliados externos, sobre todo en el corto plazo, pero también es crítico mantener y potenciar capacidades industriales europeas para no quedar rezagados en la próxima generación de tecnologías militares.

El riesgo de fragmentación es, en síntesis, un riesgo de debilidad estratégica: solo la unión hace la fuerza, también en la industria de defensa. La buena noticia es que esta idea gana terreno; hoy más que nunca existe voluntad política para cooperar. La mala noticia es que se necesita más celeridad y mayor ambición. Europeizar la defensa no es un capricho federalista, es una necesidad práctica: o sumamos nuestros recursos, o nos quedaremos atrás. Como dijo Paul-Henri Spaak, «en Europa hay dos tipos de países: los que son pequeños y los que aún no saben que lo son». Ha llegado la hora de reconocer que incluso las mayores naciones europeas, por sí solas, son pequeñas en el concierto global, pero que unidas pueden ser un verdadero «peso pesado» en la escena mundial.

En tercer lugar, vale la pena detenerse en la dimensión emocional y generacional de este cambio de paradigma. Europa ha vivido tantas décadas en paz que varias generaciones han nacido dando por sentado que la guerra era cosa del pasado. Los últimos europeos que experimentaron directamente la devastación bélica nos están dejando, y con ellos se difumina el recuerdo vívido de lo que significa perderlo todo. Hasta hace poco, para la generación Erasmus —esa juventud europea habituada a la libre circulación, la estabilidad y la prosperidad— las historias de guerra de sus abuelos sonaban a narraciones de un mundo superado. El relato fundacional de la integración europea, basado en «nunca más la guerra», empezaba a perder fuerza entre quienes no habían conocido otra cosa que la paz. Pero la invasión de Ucrania en 2022 supuso un brutal golpe de realidad. De repente, esas mismas generaciones más jóvenes vieron, en la pantalla de su móvil, bombas cayendo sobre

una ciudad europea; vieron a jóvenes como ellos empuñar un arma para defender a sus familias; vieron fluir a millones de refugiados, entre ellos estudiantes, profesionales, gente cuya vida se había parecido a la suya hasta el día antes.

De golpe, la guerra dejó de ser una abstracción histórica y se convirtió en una posibilidad concreta a «pocos kilómetros de casa». Esto ha generado una suerte de convergencia emocional entre abuelos y nietos en Europa. Quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría ven con tristeza confirmarse aquello que siempre supieron: que la paz es frágil y hay que estar dispuesto a defenderla. Y los más jóvenes, hijos de la poshistoria, están «redescubriendo» el valor de esa paz que heredaron sin esfuerzo. Hoy un estudiante de veinte años comprende quizá mejor a su abuelo de noventa cuando este le decía que la libertad tiene un precio y que la paz no se mantiene sola.

Esta memoria erosionada se está reconstituyendo: Europa reconecta con el relato de la guerra y la paz en su propio suelo. Es un despertar doloroso, pero también esperanzador en cuanto a la toma de conciencia. Por eso, el apoyo ciudadano al que antes me refería no es un frío dato estadístico: refleja una auténtica catarsis generacional. La sociedad europea, en su mayoría, ha hecho suyo el convencimiento de que más vale un sacrificio ahora (invertir en defensa, asumir riesgos calculados) que la tragedia irreparable después. Abundan historias personales que ilustran este cambio, como la del joven polaco que, tras años de pacifismo, se alista en las fuerzas de defensa territorial de su país porque entendió que «si Ucrania cae, nosotros iremos después»; o la de esa madre italiana que, viendo a familias ucranianas huir con lo puesto, comenta: «esa podría ser perfectamente mi familia; no podemos ser ingenuos».

Esta nueva épica europea —porque lo es, en el fondo una renovada épica de la defensa de la paz— está calando. Es notable cómo las palabras «patria», «defensa» o «estrategia» vuelven al debate público sin los complejos de antaño. Hablar de invertir en tanques o

cazas ya no escandaliza a la mayoría pacífica, porque la mayoría entiende que no hay verdadera paz sin la capacidad de protegerla. Como reza un proverbio sioux, «un pueblo preparado para la guerra vive en paz». Europa no se ha vuelto violenta, simplemente está asumiendo que debe invertir en la infraestructura de la paz del siglo xxi. Y esa infraestructura incluye a nuestras fuerzas armadas, nuestra industria tecnológica, nuestra resiliencia social. En última instancia, la defensa europea no va de avivar guerras, va de evitarlas —va de legar a nuestros hijos la misma paz que nosotros disfrutamos, y que durante un tiempo llegamos a dar por garantizada, sin fundamento.

En suma, Europa se encuentra en una encrucijada histórica que exige lucidez y determinación. Invertir en defensa no es elegir la guerra, sino evitarla. No es abandonar el modelo social, es protegerlo. No es imitar a nuestros adversarios, sino disuadirlos. Como hemos visto, el coste de no hacerlo sería mucho más alto, y la opinión pública lo comprende. Tenemos ante nosotros la oportunidad —y la obligación— de forjar un nuevo contrato social europeo donde la seguridad colectiva sea uno de sus pilares, junto con la prosperidad compartida y los valores democráticos. Se trata de que Europa asuma su mayoría de edad en un mundo peligroso. Un mundo en el que hoy está sola. Tal vez, después de tantas vacilaciones, estemos por fin a la altura del desafío. Esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor: ese es el camino de la prudencia. La Europa que saldrá de este despertar defensivo no tiene por qué traicionar su alma pacífica; seguirá amando la paz, pero habrá aprendido a afilar sus armas para cuidarla. Quizá gracias a ello las próximas generaciones no tengan que aprender por las malas lo que vale la paz, porque nosotros habremos hecho lo necesario para mantenerla.

En el futuro, seguramente veremos la imagen de una presidenta de la Comisión Europea pasando revista a las tropas. No será Ursula

von der Leyen, pero quizá sí la siguiente. Y muchos serán los que tomen nota, tanto al oeste como al este; China también.

4

LA ANATOMÍA DEL PODER MILITAR EUROPEO

En 1938, en un discurso en la Universidad de Bristol, Winston Churchill decía: «La civilización no perdurará, la libertad no sobrevivirá y la paz no se mantendrá, a menos que una gran mayoría de la humanidad se una para defenderlas». Traigo esta cita a colación porque describe bien la situación europea actual: la paz no se sostiene sola, la defensa colectiva es condición de supervivencia y el arma más preciada es la unidad. La geopolítica europea suele narrarse como un drama de voluntades, valores y vulnerabilidades. Pero bajo esa superficie emocional existe una arquitectura menos visible, más fría, casi biológica: la anatomía del poder militar europeo. No es un cuerpo fuerte ni definido, pero tampoco es un organismo moribundo. Es, más bien, un sistema incompleto: una colección de órganos que aún no han aprendido a latir al unísono. Y, sin embargo, de esa anatomía depende la capacidad del continente para sobrevivir en un siglo donde el uso de la fuerza vuelve a ser un lenguaje común.

He querido utilizar la metáfora del cuerpo para explicar el poder militar europeo, para alejarme de un ejercicio técnico o mecánico, y buscar descifrar el mundo que heredamos los europeos. Una radiografía de huesos, nervios y músculos que revela tanto las fragilidades como las posibilidades de Europa. La seguridad no es solo un acto político: es un cuerpo que hay que aprender a mover.

Europa ha vivido décadas convencida de que la política podía sustituir a la fuerza, que la diplomacia podía tomar el lugar de los

ejércitos, que la interdependencia haría obsoletos los conflictos armados. Tal vez porque el recuerdo de su propia destrucción era demasiado reciente, demasiado doloroso. Tal vez porque esto funcionó durante varias décadas. Pero en el mundo actual —más áspero, menos previsible— Europa ha descubierto que su sombra militar es más pequeña de lo que creía. Es la sombra de un gigante económico dibujada por el foco de un aliado que se ha retirado unos pasos hacia atrás. Y esa sombra revela un cuerpo incompleto.

Es útil descender a las capas internas de ese cuerpo: a su esqueleto institucional, a sus nervios estratégicos, a sus músculos operativos, a su circulación industrial, a su piel geográfica y a su ADN político. Una anatomía compleja que explica por qué Europa se encuentra hoy en una carrera contrarreloj para recomponer su sistema defensivo antes de que la historia vuelva a morder.

Toda anatomía comienza por los huesos.

Los huesos son estructura, soporte, continuidad. En Europa, el esqueleto militar se sostiene sobre tres niveles superpuestos que conviven con tensiones y contradicciones. En primer lugar, la OTAN, que ha sido y aún es la vértebra central del continente. Un escudo estadounidense incrustado en el corazón de Europa. Su fuerza era evidente: masa crítica, capacidad disuasoria nuclear, interoperabilidad consolidada, mando unificado. Lo que hacía posible su eficacia era, paradójicamente, lo que debilitaba la autonomía europea: la asimetría. Europa vivía apoyada en los huesos de otro. Cuando ese «otro» ha decidido flexionar la espalda, el cuerpo europeo ha temblado. En segundo lugar, la Unión Europea ha construido un marco propio hecho de cooperación estructurada, de fondos comunes, de planificación y de instrumentos industriales. Herramientas útiles, pero insuficientes. Esos huesos existen, pero todavía no soportan el peso del cuerpo. Faltan articulaciones, cartílago político y, sobre todo, un sistema nervioso que permita a esas piezas moverse juntas. Es decir, Europa tiene huesos, pero no tiene aún un esqueleto. En tercer lugar, los organismos militares

nacionales de cada uno de los Estados miembros, con sus doctrinas, presupuestos, cadenas de mando, tradiciones, capacidades y límites. Esa diversidad es comprensible. Pero, a escala continental, funciona como un rompecabezas: piezas diseñadas para sobrevivir solas, no para encajar. Es como intentar ensamblar un cuerpo con veintisiete tipos de huesos: todos útiles, ninguno hecho para formar una sola columna vertebral.

Un cuerpo puede tener huesos sólidos, pero sin un sistema nervioso eficaz es incapaz de reaccionar.

En Europa, el nervio estratégico es lento, fragmentado y, a menudo, contradictorio. Las decisiones de seguridad y defensa se resuelven entre capitales, calendarios electorales y consensos arduos. Pero la guerra acelera el tiempo y Europa sigue prisionera del suyo. Cada crisis exige coordinación, pero el reflejo europeo suele ser la negociación interna: veintisiete impulsos, veintisiete miedos, veintisiete memorias históricas. El resultado es un sistema nervioso que responde tarde, y que a veces confunde prudencia con parálisis.

¿Y qué pasa con el músculo?

La musculatura europea es desigual. Existen brazos fuertes, piernas débiles, ligamentos desgastados. Lo más problemático no es la ausencia total de fuerza, sino la falta de coordinación: la fuerza colectiva suele ser menor que la suma de sus partes.

La fuerza terrestre europea existe, pero la diversidad de plataformas, estándares y municiones encarece el mantenimiento y ralentiza la capacidad de despliegue conjunto. La experiencia ucraniana ha recordado, además, que la guerra convencional no ha desaparecido: exige masa, munición, reposición y profundidad industrial. Al inicio de la guerra en Ucrania, Europa descubrió que solo había quince fabricantes de municiones dispersos en once países de la Unión Europea, muchos de ellos con contratos previos que impedían

redirigir rápidamente producción hacia Ucrania. Es decir, que Europa no tenía economía de guerra.

En cuanto a aviación moderna y talento técnico, Europa los tiene, pero sufre límites de escala y dependencias críticas en áreas como sistemas de mando y control, inteligencia, reabastecimiento en vuelo o defensas antiaéreas. Son insuficientes y ello recuerda que la superioridad aérea ya no depende solo del avión, sino del ecosistema que lo sostiene. Esa dependencia quedó expuesta en junio de 2025, cuando Estados Unidos tuvo que desplegar más de treinta aviones cisterna para garantizar la continuidad de misiones aéreas aliadas en plena escalada en Oriente Próximo.

El poder naval europeo es significativo, pero desigual. Europa tiene 68.000 kilómetros de costa, puertos, astilleros y tradición marítima, pero no una estrategia común de mar. Y en un continente cuyo bienestar depende de rutas marítimas, cables submarinos y estrechos, la proyección naval no es lujo: es una condición de resiliencia. El despliegue del portaaviones francés Charles de Gaulle en el Mediterráneo acompañado de fragatas y medios nacionales durante la guerra en Irán de 2026 fue un primer ensayo tangible de lo que podría ser una misión naval europea en el futuro. No fue formal-mente una operación de la Unión Europea, pero puso en práctica los elementos que Europa necesita para asumir responsabilidades marítimas propias: un buque capital de proyección estratégica, escoltas interoperables, un espacio de operaciones en el que los intereses europeos convergen y la capacidad de integrar sensores, aviación embarcada y poder naval de superficie en una sola arquitectura operativa.

Además, la defensa contemporánea se juega en dominios donde la fuerza es menos visible: satélites, sensores, redes, datos, ciberseguridad, infraestructuras críticas. Europa tiene talento y capacidades parciales, pero carece todavía de un marco de coordinación equivalente al de las grandes potencias. En este

terreno, la dependencia tecnológica puede convertirse en vulnerabilidad estratégica.

Ningún cuerpo vive sin circulación. La industria de defensa es la sangre que irriga el músculo militar: munición, mantenimiento, repuestos, plataformas, componentes, software. Y aquí Europa arrastra una debilidad estructural: produce, pero produce fragmentado; innova, pero aún sin escala; compra, pero a menudo sin estrategia común. De hecho, la Unión Europea compra el 78 % de sus adquisiciones de defensa desde fuera de la Unión Europea y es a su vez el segundo exportador de armamento del mundo. Esto es la consecuencia y no la causa de una anemia estratégica: falta de masa crítica, lentitud de reposición y una economía de guerra difícil de sostener. La sangre circula, pero no siempre oxigena. Y en un conflicto largo, la logística decide tanto como la táctica. En un estudio reciente del centro de pensamiento Bruegel se muestra cómo el 70 % de las compras de material de defensa se concentran en un puñado de empresas establecidas que dejan poco espacio para nuevas empresas y para start-ups, lo cual es importante para la innovación, para la mejora tecnológica y para mejorar la relación calidad-precio. Europa necesita, por tanto, integrar más su base industrial, armonizar estándares y planificar capacidades como un bloque.

La geografía es la piel que envuelve al cuerpo. Europa tiene una piel marcada por fronteras expuestas, mares estrechos y cuellos de botella estratégicos. Hay lugares donde el mapa se convierte en destino: el Báltico, el Mediterráneo, el Ártico, el mar Negro, los Balcanes. Son espacios donde la fricción geopolítica se materializa con facilidad. Uno de ellos es el corredor de Suwalki, considerado por los analistas como el lugar más peligroso de Europa, un pasillo de sesenta y cinco kilómetros de ancho entre Polonia y Lituania, flanqueado por el enclave militarizado ruso de Kaliningrado por un lado y Bielorrusia por el otro. Es la única conexión terrestre entre los países bálticos y el resto de la UE. Si se cortase, dejaría a los países bálticos aislados del resto de la UE. Durante 2025 hubo varios

incidentes de seguridad en el corredor, incluidas maniobras militares rusas cerca de la frontera occidental de Bielorrusia, quizá con el objetivo de recordar a Europa sus puntos débiles. El propio Kaliningrado es otra debilidad, una base militar rusa dotada de misiles balísticos y con una flota rusa en el Báltico situada en el corazón de la UE, entre Lituania y Polonia. Desde ahí Rusia puede proyectar poder naval, interferir con rutas marítimas y disputar el acceso al mar a Estados miembros de la Unión Europea, ya que el Báltico es un mar semicerrado. La presencia de un enclave altamente militarizado y aislado genera inestabilidad psicológica y política en toda la región. El otro gran cuello de botella es el estrecho del Bósforo, sin el cual Europa quedaría desconectada del mar Negro. La lección que nos deja la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz es la importancia de preparar planes de contingencia y ensayos bien engrasados que eviten que la Unión Europea sea pillada por sorpresa. Estos planes han sido desarrollados en la OTAN, pero la Unión Europea también está reforzando su propia resiliencia territorial con una iniciativa de movilidad militar para permitir que tropas y material militar circulen rápidamente por carreteras, puertos, puentes y ferrocarriles del continente.

Existen también órganos vitales invisibles: cables submarinos, redes eléctricas, oleoductos y gasoductos, puertos, nodos logísticos, satélites, centros de datos. Infraestructuras que no aparecen en los desfiles militares, pero cuya interrupción puede paralizar economías y sociedades enteras. En la era híbrida, atacar estos órganos puede ser más eficaz —y más ambiguo— que atacar un cuartel. Entre 2024 y 2025 han sido numerosos los intentos de sabotaje contra cables y sistemas energéticos europeos en forma de interferencias de GPS que afectan a redes inteligentes, accesos digitales no autorizados o intentos de penetración en redes, registrados por servicios de inteligencia de varios países europeos y atribuidos a Rusia.

Como en todo organismo, el ADN importa. Con esto quiero referirme a la necesidad para Europa de dotarse de una doctrina militar. No de

una política de defensa. No. Esta ya está definida en el Tratado de la Unión Europea. Se trata de definir una visión estratégica y militar común, lo que en la jerga se conoce como «postura estratégica común». En Europa no existe un solo código genético estratégico. Francia piensa en términos de autonomía, disuasión nuclear y proyección; Alemania, tras décadas de contención histórica, prioriza reconstrucción y modernización industrial; el Este europeo vive con la amenaza existencial en la nuca y busca disuasión total; el Sur mira al Mediterráneo y al Sahel, y busca estabilidad y gestión de amenazas híbridas, donde otros ven periferia. Estas culturas no son un defecto: son la materia prima de una estrategia común que aún no termina de nacer.

La Unión Europea dio un primer paso hacia esa doctrina militar europea con la Brújula Estratégica de 2022 liderada por el alto representante español Josep Borrell. Este documento aglutina una visión común —incluida una definición compartida de los riesgos a los que se enfrenta la Unión Europea—, objetivos comunes y un marco de actuación; busca construir una cultura estratégica compartida, define líneas de acción concretas y coordina capacidades militares. Pero aún queda traducir esto en una doctrina militar europea, que incluya una planificación militar unificada a nivel europeo.

Como todo cuerpo sometido a estrés, Europa exhibe patologías crónicas que no se resuelven con discursos, sino con estructura y decisión. Una vulnerabilidad estructural en forma de fragmentación, duplicidades, lagunas de capacidades y dependencia tecnológica. Una vulnerabilidad política en forma de lentitud decisoria, divergencias nacionales, dificultad de sostener una estrategia compartida en el tiempo.

Pero existe una vulnerabilidad más profunda, menos visible, una vulnerabilidad cultural. La dificultad para asumir la fuerza como condición de la paz. Lo entendieron bien los fundadores de Europa: la paz no es un estado natural de la historia. La paz es una

construcción política. Y toda construcción política necesita ser defendida.

Durante una visita a Sciences Po en marzo de 2026, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski respondió a una pregunta de estudiantes sobre la lección principal de la guerra en Ucrania con una frase que dejó al auditorio en silencio: «La paz, la libertad y la democracia hoy tienen un precio. Y a veces ese precio es la vida».

Tal vez sea este el verdadero talón de Aquiles de la defensa europea. No la falta de capacidades. No la escasez de recursos. Sino la dificultad psicológica para asumir que la fuerza sigue siendo condición de la paz.

Cuando llega una crisis, el cuerpo europeo reacciona, pero a menudo con espasmos más que con reflejos. Europa aprende rápido cuando se ve obligada, pero también olvida rápido cuando el peligro se atenúa. Su fisiología defensiva se activa ante el trauma y se relaja ante la tregua. El mundo, sin embargo, ya no concede treguas largas.

¿Cuál debería ser el metabolismo defensivo europeo del futuro?

Yo lo resumiría en una triada: un metabolismo más rápido, más integrado y más resiliente ante sus dependencias. No se trata de «crear un ejército europeo» por decreto, sino de construir capas de integración que hagan posible una defensa común real.

Los vetos dificultan hoy la rapidez de decisión. Pero la respuesta puede ser la geometría variable. Así lo ha hecho Francia en su nueva doctrina nuclear. Francia retiene el control exclusivo francés sobre el uso del arma nuclear y no crea un paraguas nuclear europeo uniforme, pero si abre un marco flexible de cooperación diferenciada con aquellos países que lo deseen en torno a consultas, ejercicios y despliegues selectivos. Una especie de Europa nuclearizada a varias velocidades.

La integración debería comenzar por la base industrial: compras conjuntas, estándares comunes, escalado de producción de munición y repuestos. Varios países nórdicos —Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca— ya están realizando compras conjuntas de municiones de artillería, drones, sistemas de aeronaves no tripuladas y trabajan para desarrollar una base industrial integrada. ¡Avanza la revolución silenciosa de la cooperación nórdica! También en los últimos dos años se ha multiplicado por seis la producción de proyectiles de artillería y se ha reducido su precio, es decir, las economías de escala han generado también beneficios económicos.

Pero las dos grandes incógnitas para la construcción de una defensa europea integrada se sitúan en Alemania y en Francia. Porque ambas tienen la tentación de priorizar sus propias industrias nacionales de defensa más que de integrarlas en una gran industria europea, sobre todo en proyectos de gran envergadura como aviones de combate o sistemas de defensa aérea. Francia amplía su arsenal nuclear y apuesta por una disuasión avanzada (forward deterrence), pero para reforzar la industria francesa de misiles, submarinos y aviación. Por su parte, Alemania busca desarrollar sus propias tecnologías potenciando su base industrial. No habrá defensa europea con Alemania buscando ser una nueva «gran Prusia» y Francia persiguiendo un nuevo «gaullismo estratégico». Europa no podrá defenderse con una Alemania que se rearma para sí y una Francia que disuade para sí. Se necesita un marco común. La salida no es elegir entre Berlín o París, sino superarlos haciéndolos irrelevantes como polos exclusivos. Europa evitará la trampa si deja de elegir entre Prusia o gaullismo y empieza a estructurarse como una coalición funcional de potencias complementarias. Con geometría variable, con integración industrial obligatoria en sectores críticos como defensa aérea o con una arquitectura estratégica donde Francia y Alemania dejen de ser el centro. O, mejor dicho, donde Francia y/o Alemania puedan seguir siendo el centro de la producción industrial sobre la base de sus respectivas ventajas comparativas.

Finalmente, el metabolismo defensivo europeo necesitará de resiliencia para reducir dependencias excesivas que suponen vulnerabilidades defensivas. Capas críticas europeas como las infraestructuras esenciales, las comunicaciones seguras, la ciberdefensa o la logística militar.

La anatomía militar europea no está predestinada. No es el resultado inevitable de su historia, sino de sus decisiones. Europa puede seguir siendo un cuerpo fragmentado, dependiente, incapaz de proteger sus órganos vitales. O puede convertirse en un organismo completo, capaz de sostener su propia existencia en un mundo que ya no respeta la fragilidad ajena.

Comprender esta anatomía es el primer paso. El segundo es asumir que la paz no es el estado natural del cuerpo europeo: es su mayor logro. Y, como todos los logros, requiere esfuerzo, músculo y voluntad. Europa ha vivido mucho tiempo confiando en su espíritu. El siglo xxi exige que aprenda, por fin, a cuidar también su cuerpo.

En 1950 Jean Monnet lo dijo con una claridad que hoy vuelve a resonar: «La paz no se preserva sola. Necesita de medidas proporcionadas a los peligros que la amenazan».

5

CHINA-EUROPA, DOS LÍNEAS PARALELAS QUE SE SEPARAN

«Entre China y la Unión Europea no existen conflictos fundamentales de intereses ni contradicciones geopolíticas irresolubles». Esto decía el presidente chino Xi Jinping en la Cumbre China-Unión Europea del 24 de julio de 2025 ante el escepticismo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien replicaba que la relación había llegado a un punto de inflexión y que Bruselas necesita cambios concretos y no solo declaraciones de buena voluntad. Von der Leyen advirtió que la Unión Europea no puede continuar con la relación actual mientras persistan desequilibrios en el comercio, sobreproducción subsidiada china y barreras de acceso al mercado chino. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, insistía en la necesidad de reforzar la confianza y el respeto mutuo para gestionar las áreas de desacuerdo sin que la relación se deteriore aún más.

Apenas han pasado cincuenta años entre esta cumbre y el inicio de relaciones entre China y la Unión Europea. La táctica china sigue siendo la misma que en los años setenta, pero las estrategias de ambos difieren hoy profundamente. La brecha entre ambos se amplía. ¿Cómo hemos llegado aquí? La situación actual no se entiende sin detenernos así sea brevemente en el pasado. Y sin entender dos momentos fundamentales en la relación: 2001, año de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio y del inicio del despegue económico y comercial del país; y 2013, con la

llegada de Xi Jinping al poder con un liderazgo más asertivo y duro y la ambición de convertir a China en una potencia global.

Aunque el enfoque en este capítulo es económico y comercial, y no aborda de manera explícita la cuestión de Taiwán, es importante subrayar que, en la gestión económica de Xi, Taiwán no es un tema separado, sino un vector que define prioridades internas y externas. Para Xi, solo una China económicamente fuerte, tecnológicamente avanzada y geopolíticamente resiliente puede completar la reunificación, y por eso la cuestión taiwanesa constituye un eje transversal de toda su agenda económica.

Todo comenzó en la Guerra Fría. A mediados de los años setenta, el sistema internacional estaba dominado por la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS, y China buscaba una vía propia para proyectarse al exterior tras años de aislamiento y tensiones, especialmente con Moscú. En paralelo, la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) comenzaba a consolidarse como un actor internacional con identidad propia, más allá de un simple mercado común. Esta convergencia de intereses hizo posible un acercamiento que marcaría las décadas siguientes.

Y es que la relación entre China y Europa ha seguido una trayectoria marcada por una paradoja. Para Pekín, Europa constituye —y sigue siendo así— un instrumento esencial para evitar verse atrapada en la lógica rígida de un mundo bipolar. Ayer, esa lógica estaba dominada por la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS; hoy es la relación entre Estados Unidos y China la que amenaza con estructurar el orden global. Europa, en ambas épocas, aparece para China como un espacio donde respirar: un actor capaz de ampliar su margen de maniobra, diluir presiones y ofrecer canales alternativos de cooperación y legitimidad internacional.

Europa, sin embargo, nunca ha interpretado esa relación de la misma manera. Bruselas no ha visto a China como contrapeso de Washington, ni en los años setenta ni hoy. Su mirada se ha

desplazado de la cooperación económica a la preocupación estratégica, pasando por la competencia industrial y, por último, por la percepción de rivalidad sistémica. Esta visión se ha consolidado en torno a la fórmula que define oficialmente la postura de la Unión: China como «socio, competidor y rival sistémico», una fórmula establecida en 2019 y que estructura la relación actual.

Entre ambas perspectivas —la china y la europea— se abre una divergencia profunda que explica gran parte de las tensiones contemporáneas: China desea una Europa fuerte para China. Europa desea una Europa fuerte para sí misma. La relación se despliega, por tanto, en dos planos paralelos que rara vez se tocan.

En los años setenta, tras la ruptura sino-soviética y en plena hostilidad con Moscú, China percibía un riesgo existencial: quedar atrapada en medio de dos superpotencias con intereses contradictorios. La apertura y la normalización con Occidente, incluida Europa Occidental, respondían a la necesidad estratégica de diversificar apoyos, obtener tecnología y conectarse con un mundo capitalista dinámico que podía ayudarle a modernizarse.

Europa —y particularmente la CEE— aparecía como un espacio útil, no ideológico, complementario y relativamente autónomo frente a la rigidez bipolar. Se trataba de una Europa con mercado atractivo, con voluntad de exportar tecnología y, sobre todo, sin ambiciones de contención militar.

El 6 de mayo de 1975 el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de relaciones exteriores, el británico Christopher Soames, viajó a Pekín para rubricar el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la CEE. Era otra Europa: más pequeña, con solo nueve miembros y esencialmente volcada en cuestiones económicas, como refleja incluso su nombre, «Comunidad Económica Europea». Era también otra China, con una economía del tamaño de la mitad de Francia y un PIB parecido al de Afganistán. China apenas empezaba a abrirse al mundo, en un proceso que

acabaría siendo una transformación económica y social sin parangón.

La visita no surgió de la nada. Desde finales de 1974, la CEE había empezado a tantear un marco común para sus relaciones con China, enviando a Pekín un memorando en el que proponía negociar un acuerdo comercial conjunto. China respondió favorablemente y, durante las conversaciones de 1975, anunció oficialmente su intención de establecer relaciones diplomáticas y nombrar un embajador ante la Comunidad, algo que se concretó en septiembre de ese mismo año. Este paso reflejaba no solo el interés chino por fortalecer su presencia internacional, sino también la creciente percepción en Europa de que China era un actor con el que merecía la pena construir un diálogo propio, en paralelo con el diálogo que ya se había establecido entre China y Estados Unidos con la visita del presidente Nixon a Pekín en 1972. Las implicaciones de aquel primer encuentro fueron inmediatas. Ambas partes iniciaron un proceso de acercamiento económico que culminó en 1978 con la firma del primer Acuerdo Comercial entre China y la CEE y la apertura de canales de intercambio en sectores como la industria, la ciencia y la tecnología, claves para la estrategia china de modernización.

En el encuentro de 1975, el premier Zhou Enlai expresó su apoyo a una Europa fuerte y unida, considerándola un elemento estabilizador en un mundo dominado por la confrontación entre superpotencias. Esa postura se mantendría a lo largo de las décadas: China ha visto históricamente en la integración europea un contrapeso útil para evitar dependencias excesivas, una vía de escape a la bipolaridad, y un socio con el que compartir objetivos de desarrollo, apertura económica y cooperación multilateral. Y así Europa proporcionó maquinaria industrial, know-how técnico, inversiones y un acceso comercial clave. Y China ofreció un mercado que con el tiempo se fue profundizando y fue fuente de pingües beneficios. Para China, una Europa fuerte —económica y tecnológicamente— significaba una puerta de salida al cerco estratégico. Esta lógica persistió incluso

durante tensiones políticas como las sanciones tras la masacre de Tiananmén.

Aún más explícito fue Deng Xiaoping durante el viaje del presidente de la Comisión Europea Jacques Delors a China el 3 de julio de 1986. Reunidos en el Gran Palacio del Pueblo, Deng le transmitió un mensaje político muy claro sobre la visión china de Europa y las relaciones sino-europeas. China veía a Europa como socia en la búsqueda de la paz, no existían conflictos de interés entre China y los países europeos y una Europa fuerte y autónoma, con una política exterior independiente, era positiva para la estabilidad mundial. Décadas más tarde Delors nos contaba a su equipo cuánto le había marcado aquel viaje y la claridad de Deng.

China debe al Pequeño Timonel, el apodo de Deng Xiaoping, el inicio de la transformación económica del país. El 13 de diciembre de 1978, al clausurar la conferencia de trabajo preparatoria del Tercer Pleno del XI Comité Central, Deng Xiaoping pronunció el discurso «Emancipar la mente, buscar la verdad en los hechos, unirse y mirar hacia adelante», que funcionó como el anuncio fundacional de la política de reformas y apertura (gaige kaifang). Llamó a romper con el dogmatismo, desplazar la «lucha de clases» del centro de la agenda y orientar al Partido hacia la modernización económica y la apertura al exterior. Días después, el Pleno consagró ese giro como línea estratégica del Estado, inaugurando la etapa que transformaría la economía china y su inserción internacional. El objetivo de Deng era modernizar China «abriendo una ventana al mundo». Así, en 1986, China pide empezar la negociación para entrar en la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC era la manera de anclar las reformas económicas en un marco internacional y de protegerlas de las pulsiones proteccionistas internas. La OMC fue en realidad otra palanca más para la modernización de la economía china.

Mi llegada a la Comisión Europea coincidió con la fase final de las negociaciones para la entrada de China en la OMC. Quedaban por

resolver huesos duros de roer: acceso para las empresas europeas al mercado de servicios financieros, de telecomunicaciones, de tierras raras, pero sobre todo el papel de las empresas de Estado chinas y las reglas de protección de la propiedad intelectual. Pero había una gran voluntad de llegar a un acuerdo. Tuve ocasión de viajar a China en innumerables ocasiones acompañando al comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, con quien trabajaba. Era una persona muy respetada en China con acceso al presidente Jiang Zemin, quien había sucedido a Deng, y sobre todo a su premier, Zhu Rongji, con quien concluimos la negociación. Me impresionaba el enorme pragmatismo del liderazgo chino. Seguían al pie de la letra la máxima «no importa cuál es el color del gato, lo importante es que cace ratones». El objetivo era sacar a los chinos de la pobreza. Era importante evitar confrontaciones con Occidente para permitir un desarrollo interno. La diplomacia era por lo tanto contenida y marcada por la moderación.

La moderación fue puesta a prueba en 1999 con dos eventos que estuvieron a punto de hacer descarrilar el proceso de adhesión de China a la OMC: el viaje fallido de Zhu Rongji a Washington en abril y el bombardeo de la embajada china en Belgrado en mayo. Zhu llegó a Estados Unidos con una oferta de concesiones «sin precedentes» para cerrar un acuerdo clave, pero la Casa Blanca rehusó sellarlo —en parte por cálculo político interno y la idea de que aún podía arrancar más—, filtrando además detalles que dejaron a Zhu expuesto ante críticas nacionalistas en Pekín y forzaron una pausa en las conversaciones. Apenas unas semanas después, un B-2 estadounidense bombardeó por error la embajada china en Belgrado durante una campaña de la OTAN, matando a tres periodistas y desatando protestas masivas en toda China. Ambos incidentes dispararon el nacionalismo interno, que se volvió contra Zhu y endureció a la burocracia. Sin embargo, Zhu mantuvo un perfil bajo mientras Jiang Zemin reconstruía el apoyo interno para retomar las negociaciones. Una estrategia de retirada táctica, a la espera de que bajara la presión nacionalista para relanzar las negociaciones.

La última fase de las negociaciones fue muy dura. Europa, Estados Unidos y Japón presionaban para abrir el mercado chino y China acabó aceptando condiciones muy beneficiosas para sus socios comerciales. Lo cierto es que las negociaciones se concentraron en conseguir concesiones de acceso al mercado chino, dado su gran tamaño y expectativas de crecimiento, pero no en reglas para limitar las subvenciones a la industria china, lo que a la postre resultó ser un error estratégico. Europa, Estados Unidos y Japón estaban tan enfrascados en sus propias peleas, acusándose mutuamente de usar subvenciones a sus industrias nacionales de manera desleal, que se olvidaron de ajustar las tuercas chinas. Una miopía que a la postre ha resultado muy cara.

La entrada de China en la OMC el 11 de diciembre de 2001 fue una victoria para los pragmáticos liberales frente a nacionalistas, burócratas, autoridades locales y empresas de Estado que temían perder poder con las reformas económicas. Europa se convirtió en uno de los principales mercados para las manufacturas chinas y en un socio central para la transferencia de tecnología y capital.

Quiero detenerme en un matiz importante que a posteriori ha tenido gran influencia en la percepción ciudadana sobre la entrada de China en la OMC. En Estados Unidos, el argumento principal repetido por la Casa Blanca, el Congreso y numerosos activistas fue la democratización de China: la liberalización económica traería la democracia al país. El presidente Bill Clinton utilizó deliberadamente el argumento político-democratizador para vender la entrada de China en la OMC, en parte porque sabía que el argumento puramente comercial no bastaba para convencer ni al Congreso ni a sectores significativos de su propio partido, especialmente los demócratas cercanos a sindicatos y preocupados por el empleo industrial. En Europa, el argumento democratizador no fue el núcleo del apoyo a la entrada de China en la OMC. Europa sí esperaba que el marco jurídico internacional tuviera un efecto reformista, pero la retórica europea no hablaba de democratización, sino más bien de «Estado de derecho comercial», de predictibilidad y de alineamiento

con reglas internacionales. Esta diferencia es importante porque el endurecimiento de la postura estadounidense se ha justificado con una ausencia de democracia que nunca fue el objetivo.

La década siguiente está marcada por un boom económico, la explosión del comercio y las inversiones y un entorno político relativamente benigno. En el año 2000 China representaba alrededor del 3,5 % del comercio internacional, a la par con Italia. China abrió de forma inédita su mercado a bienes y servicios, redujo aranceles y amplió derechos de distribución e inversión para empresas extranjeras. El comercio bilateral se disparó, con China consolidándose como socio clave para la Unión Europea; Europa duplicó sus importaciones y triplicó sus exportaciones a China en esa década. Para 2010, China representaba el 10 % del comercio mundial, cerca del 12 % de la Unión Europea. Pero también comenzaron a aparecer desequilibrios y contenciosos que emergerían con fuerza a partir de 2010. En el plano político, la relación se mantuvo cooperativa pero asimétrica: se multiplicaron las cumbres Unión Europea-China y los marcos de diálogo, mientras persistía la brecha entre la velocidad del vínculo económico y la convergencia normativa. La Unión Europea suponía que la integración comercial llevaría a una alineación paulatina de China con el orden internacional basado en reglas, expectativa que se mantuvo hasta comienzos de la década siguiente, cuando los primeros conflictos comerciales y la consolidación del modelo chino pusieron de relieve las tensiones estructurales de la interdependencia. Para Europa fue la ilusión de una convergencia económica que no llegó.

Mi medidor particular del boom económico del país eran los anillos de circunvalación alrededor de Pekín. La ciudad que encontré en mi primer viaje a China en 1998 aún no tenía nada del brillo futurista de hoy. El trayecto hasta el centro discurría por la recién inaugurada Airport Expressway, una autopista amplia y sorprendentemente vacía que conectaba directamente con el Tercer Anillo, entonces la verdadera frontera de la ciudad moderna. A los lados se sucedían

campos, naves bajas y solares polvorientos, mientras en la carretera dominaban los Volkswagen Santana, los taxis por excelencia de aquellos años, junto a camiones ruidosos y algún sedán estatal mientras abundaban bicicletas y triciclos. Todo parecía a medio construir, a medio despertar, como si la ciudad se estuviera estirando hacia el futuro y yo tuviera la suerte de verla justo en ese instante, creciendo a ojos vista. Durante una visita a China a principios de 2007 el entonces ministro de Comercio Bo Xilai —quien después caería en desgracia y hoy purga cadena perpetua en el penal Qincheng— nos mostró con gran orgullo el sexto anillo. ¡Tres nuevos anillos en una década!

Durante ese periodo, a ojos de China, Europa seguía siendo un actor útil para evitar una dependencia excesiva del mercado estadounidense y para sostener un entorno internacional más multipolar. Esta visión china coincidía con la idea de que la Unión Europea podía desempeñar un papel de «tercer polo», equilibrando la influencia de Estados Unidos sin confrontarlo abiertamente. Para China, una Europa económicamente vibrante, institucionalmente cohesionada y más autónoma en política exterior aumentaba su propia capacidad de maniobra global.

A partir de 2010, mientras el mundo y en particular Europa y Estados Unidos digieren las consecuencias de la crisis financiera del 2008, China comenzó a dejar atrás su papel de fábrica del mundo y entró en una fase distinta de desarrollo: aquel fue el año en que superó a Japón y se convirtió en la segunda mayor economía del planeta, impulsada por un crecimiento superior al 10 % del PIB y una rápida expansión de su demanda interna. Al mismo tiempo, la industria china dio un salto cualitativo: pasó de centrarse en manufacturas baratas y de bajo valor añadido a liderar sectores de media y alta tecnología, apoyada en mejoras salariales, mayor sofisticación productiva y políticas orientadas a transformar su modelo económico. Ese mismo año superó a Estados Unidos como mayor fabricante del planeta. Ese punto de inflexión marcó el inicio de una China que ya no competía solo por precio: la subida salarial y

el agotamiento del dividendo demográfico obligaron al país a invertir en innovación, talento, escala e inversión exterior, dejando atrás la imagen reducida de mero taller del mundo. Se inicia la ejecución del 12.º Plan Quinquenal, que tenía como prioridad cambiar la estructura económica, reducir dependencia de las exportaciones y fomentar innovación, servicios y consumo interno. Se prepara la estrategia Made in China 2025 con la que China quiere volar hacia el futuro tecnológico e industrial. China acelera, y Europa duda.

Con la llegada al poder de Xi Jinping en 2013 la política exterior de China gira desde el perfil bajo tan característico de la era Deng —«oculta tu fuerza, espera tu tiempo»— hacia otra postura definida más asertiva: «ocupar el centro del escenario como gran potencia responsable». Busca una proyección global, ambiciosa y afirmativa del poder chino con una batería de acciones. En lo geoeconómico, con el lanzamiento y despliegue de la Belt and Road Initiative (BRI), que se convirtió en el emblema de una ambición por reconfigurar flujos de infraestructura, financiación y normas, también en Europa. A la par, Pekín intensificó su activismo en foros como BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, y reforzó su peso en instituciones multilaterales para moldear reglas y estándares a su medida. En lo estrictamente estratégico, amplió su huella marítima en el mar de China meridional, con construcción de islas e instalaciones militares, y elevó el tono de su diplomacia, incluida la llamada wolf-warrior. Todo ello plasmó el giro desde la prudencia a una ambición de liderazgo que combina competencia estructural con Estados Unidos, proyección hacia el sur plural y el uso intensivo de instrumentos económicos, normativos y de narrativas pro-China.

Pekín buscaba tres cosas de Europa: mantener la interdependencia económica, ganar margen político frente a Estados Unidos y, cuando fuera posible, fomentar una mayor «autonomía estratégica» europea para evitar una alineación automática con el pivote hacia Asia de Washington bajo la presidencia de Barack Obama. La táctica combinó vínculos bilaterales con grandes Estados miembros, el cortejo a los países de la Europa Central y Oriental, con la formación

de países 17+1, y el despliegue de la BRI para anclar intereses en infraestructuras y cadenas de valor.

¿Pero qué buscaba Europa? Basta con mirar la lista de participantes de alto nivel del primer Foro de la Franja y la Ruta en Pekín en mayo del 2017 —jefes de Estado o gobierno de Italia, España, Grecia, Polonia, Hungría o República Checa— para entender que China era el capital y la inversión que Europa misma era incapaz de generar con las políticas de austeridad posteriores a la crisis del 2008. Europa necesitaba preservar un comercio abierto para salir de la crisis a través de exportaciones y atraer inversiones para reducir déficits. Recuerdo el mensaje del primer ministro griego Alexis Tsipras en aquel foro celebrando la venta parcial del puerto del Pireo a la gran naviera estatal china Cosco y ofreciendo otras infraestructuras como la red eléctrica y activos empresariales logísticos y marítimos, incluidos en el programa griego de «privatizaciones obligadas». ¡Qué disonancia con el momento actual!

Mientras tanto, el auge de la industria china en sectores estratégicos —desde los paneles solares hasta las telecomunicaciones— generó tensiones económicas, las tácticas de presión económica (subsidios, sobrecapacidad, condicionamiento del acceso al mercado) tensaron la relación, y el avance chino en tecnologías críticas como 5G o la inteligencia artificial ponía de relieve dependencias que Bruselas no había anticipado.

Así, la relación entre China y Europa pasó de la interdependencia a una competencia cada vez más frontal, con efectos políticos. En el plano económico, el ascenso de China como potencia industrial y tecnológica erosionó la creencia europea en la convergencia automática por el comercio y tensó sectores claves como el acero, los bienes de equipo, las renovables o el 5G, empujando a la Unión a dotarse de una agenda de seguridad económica. En paralelo, Pekín promovió activamente la idea de una «autonomía estratégica» europea entendida como menor dependencia de Estados Unidos, como narrativa útil para ampliar su margen frente a Washington. En

Europa, eso se tradujo en más cautela con China, pero también en el deseo de no quedar atrapados en un choque de bloques. Ese doble movimiento —competencia industrial real y seducción política a través de la autonomía europea— desembocó en que Bruselas dejara de ver a China solo como oportunidad y pasara a conceptualizarla, en la estrategia adoptada en 2019, con tres lentes simultáneas: socio, competidor y rival sistémico.

La llegada de Donald Trump en enero de 2017 y su giro hacia la confrontación estratégica con China actuó como catalizador de la nueva postura europea, más estratégica y cauta con China. Y ello a pesar de la ofensiva de encanto desplegada por el presidente Xi anticipando la postura estadounidense bajo la administración Trump. En enero de 2017, justo al inicio del mandato de Donald Trump, Xi Jinping viajó a Suiza —primero al Foro Económico Mundial de Davos y después a la ONU en Ginebra— para marcar perfil: defendió el multilateralismo, la igualdad soberana y la no injerencia, y presentó la idea de una «comunidad de futuro compartido para la humanidad» como brújula de su diplomacia. Ante delegaciones reunidas en el Palacio de las Naciones, subrayó que los grandes retos solo pueden resolverse con diálogo, consulta y reglas compartidas, e insistió en que la soberanía y la dignidad de todos los países —grandes o pequeños— deben ser respetadas; incluso reclamó avanzar con el tiempo hacia el desarme nuclear completo. En un momento en que Washington cuestionaba acuerdos y foros, el mensaje fue inequívoco: China se mostraba como adalid del orden multilateral y del marco institucional de la ONU. Era una manera astuta de marcar posición sabiendo que el presidente Trump ya había mostrado su desdén por la cooperación internacional. Esa visita a Ginebra me dejó una simpática anécdota. En la cena que el secretario general de Naciones Unidas ofreció al presidente chino me tocó sentarme al lado de la primera dama Peng Liyuan, mujer cordial y con gran sentido del humor. Cuando supo que era española me contó que al presidente le encanta la paella española, que había probado durante su breve visita a España en 2010 como vicepresidente de China. Un día, ella, para darle gusto, cocinó una

en casa, pero al utilizar arroz glutinoso, el resultado fue una especie de argamasa. Le expliqué que la paella requería arroz de tipo grano medio y que había que cocinarlo en una paellera. Se reía al recordarlo con una risa contagiosa.

Xi acababa de llegar de Davos, donde mostró la otra mitad de la ecuación: una visión económica de apertura en defensa de la globalización y del libre comercio frente al proteccionismo naciente. Sostuvo que muchos de los males atribuidos a la globalización respondían, en realidad, a fallos de gobernanza o a conflictos, y que cerrar fronteras sería «como encerrarse en una habitación oscura», una metáfora con la que invitaba a mantener mercados abiertos, mejorar la regulación y repartir mejor los beneficios del crecimiento. El resultado fue un doble mensaje desde Suiza —multilateralismo político en Ginebra y apertura económica en Davos— que proyectó a China como actor «responsable» dispuesto a asumir un mayor liderazgo en la gobernanza global, justo cuando la Casa Blanca iniciaba un repliegue.

Pero Europa siguió adelante, aunque moduló su respuesta porque también percibió la agresividad de Trump hacia la propia Unión Europea con la imposición de aranceles, amenazas comerciales, cuestionamiento del multilateralismo y sobre todo cuestionamiento de la OTAN como garantía de seguridad colectiva. En otras palabras: Washington aceleró el «aterrizaje» europeo en la realidad de la competencia con China, pero Bruselas evitó un alineamiento automático para no quedar atrapada en un choque de bloques y para preservar su capacidad de decisión propia (lo que luego se conceptualizó como «autonomía estratégica»). La Unión abrazó una postura más «realista»: cooperar donde se pueda, exigir reciprocidad donde se deba y proteger lo crítico donde sea vital.

La estrategia europea de marzo de 2019 fue un punto de inflexión europeo que pilló por sorpresa a China. Pekín no aceptó esa etiqueta y, desde entonces, su narrativa oficial y paraoficial insiste en que la Unión Europea debería «superar» esa retórica, recuperar el foco en

cooperación, apertura y multilateralismo, y evitar «politizar» la relación. En el ecosistema mediático chino proliferaron tribunas pidiendo a Europa «abandonar» el lenguaje de «rival sistémico» por ser «obstáculo diplomático» y «fuente de desconfianza» en los diálogos Unión Europea-China.

En la década actual Europa despierta al riesgo. Comenzó con la pandemia del COVID-19 que actuó como un acelerador de tensiones y debates que ya estaban sobre la mesa antes de 2020. La crisis comenzó en Wuhan y en esos momentos iniciales las autoridades tuvieron que acudir a la generosidad de otros países para hacer frente a las necesidades domésticas. Pero pronto China puso la máquina de producir a funcionar y fuimos los demás quienes tuvimos que acudir al mercado chino. La pandemia evidenció dependencias extremas de insumos estratégicos —desde equipos de protección y respiradores hasta principios activos farmacéuticos y componentes electrónicos— concentrados en Asia y, en particular, en China. Esto obligó a replantear cadenas de suministro, reservas estratégicas y políticas de seguridad económica: en Europa, la pandemia «amplificó desafíos preexistentes» y expuso la sobredependencia de proveedores chinos, impulsando cribados de inversión extranjera, control de subvenciones y un giro a la resiliencia y al de-risking.

A la vez, la pandemia agudizó la competencia de narrativas: de un lado, democracias que, pese a la lentitud inicial, institucionalizaron mecanismos de transparencia, coordinación y corrección de errores. Del otro, autocracias como Rusia y China reivindicando eficacia y control social. Pekín trató de convertir esa narrativa en capital político mediante la «diplomacia de las mascarillas» y, más tarde, la de las vacunas, presentándose como proveedor indispensable y «líder responsable», mientras intensificaba una diplomacia más asertiva e incluso campañas de desinformación en Europa para moldear percepciones sobre su gestión de la pandemia, lo que deterioró la confianza y endureció la postura europea.

En el Sur plural, esa competencia se trasladó a la «diplomacia de las vacunas». Durante la primera mitad de 2021, China —y, en menor medida, Rusia— parecieron más hábiles en su cooperación con el Sur en materia de vacunas porque salieron antes a los mercados con acuerdos de suministro y de producción local, mientras Estados Unidos y buena parte de Europa priorizaban la vacunación de sus nacionales y sobre todo Europa impulsaba un esfuerzo de cooperación a través de mecanismos multilaterales como COVAX. Pekín combinó contratos con COVAX con transferencias tecnológicas y acuerdos de fill & finish en países como Brasil, Chile y Uzbekistán, una estrategia que le otorgó visibilidad y le permitió «localizar» capacidad en regiones con escasez de acceso a vacunas occidentales. Puede decirse que China «vendió mejor» su cooperación inicial —gracias a dosis disponibles y producción local—, mientras que la ejecución rusa fue más irregular; a la vez, a medida que aumentó la producción en Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea incrementaron sus aportes a COVAX, acortando la ventaja inicial de Pekín y Moscú. Pero para entonces en el Sur había ya calado la percepción de una China generosa frente a un Occidente egoísta.

Sin embargo, la batalla por el relato tuvo un desenlace inesperado. Mientras el mundo se abría y se retomaban eventos culturales y deportivos como el Mundial de fútbol de Catar, China seguía cerrada. La autocracia no era más eficiente que las democracias para gestionar crisis. China no podía abrir con seguridad sin antes proteger a sus mayores y reforzar la eficacia de sus vacunas ante cepas como la ómicron; pero además abrir demasiado pronto hubiese supuesto poner en cuestión el propio modelo chino de COVID cero que hasta 2022 era políticamente rentable pese a los costes crecientes. Cuando el equilibrio se rompió por el aumento de protestas, el duro impacto económico y el malestar social, el país abrió de golpe, pagando un peaje sanitario alto en las semanas siguientes, antes de normalizar gradualmente movilidad y actividad en 2023. Un año después, en uno de mis viajes a China, tuve ocasión de discutir de esta situación con ciudadanos chinos. Uno de

ellos me lo explicó de manera muy gráfica: «Señora González, los chinos hemos sido educados en la creencia de que amar al país era amar al Partido, y que amar al Partido era amar al país; ahora sabemos que no es cierto; si el Partido nos aporta bienestar y condiciones de vida adecuadas, seguiremos así; si el Partido falla, entonces el Partido se acabará». Es pragmatismo, y es también un recordatorio para los líderes de los límites que afronta el Partido Comunista chino.

La llegada a la presidencia de Joe Biden reactivó el acercamiento transatlántico —mejorando la coordinación en foros como el G7 y la OTAN, impulsando una agenda tecnológica y de seguridad económica—, pero también aumentó la presión sobre la Unión Europea para alinearse con Washington frente a China. En ese marco, Bruselas logró marcar perfil propio: en vez de un «desacoplamiento» amplio, la Unión consolidó la noción de de-risking, es decir, gestionar mejor los riesgos, reduciendo dependencias y vulnerabilidades, pero sin romper la interdependencia, que hoy vertebra su política. Lo hizo con más instrumentos defensivos, como el screening de las inversiones extranjeras, el control de subvenciones, la adopción de un mecanismo anticoerción y diversificando insumos estratégicos, preservando espacio para cooperar con Pekín en bienes públicos como el clima. Aunque el empuje estadounidense endureció el tono europeo, la brújula estratégica sigue siendo la que fijó la estrategia de 2019 de China como socio-competidor-rival sistémico y su actualización «económica-segura» en clave de gestión de riesgos.

En resumen, el COVID no creó los problemas. Aceleró los que ya existían. Dejó al descubierto dependencias críticas, elevó la batalla de relatos sobre la eficiencia de modelos políticos, trasladó la rivalidad a la diplomacia sanitaria y consolidó un reencuentro estratégico entre Europa y Estados Unidos que, sin romper la cooperación imprescindible con China en bienes públicos, sí transita hacia una relación más fría, defensiva y selectiva con Pekín.

Y en esto llegó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022. La relación entre China y Europa entró en una fase de fricción estructural, donde la alianza estratégica sino-rusa choca con la solidaridad europea con Kiev y con la defensa del orden internacional. Para la Unión, la invasión de febrero de 2022 convirtió a China en un actor ambivalente pero cada vez más problemático. A pesar de insistir en el respeto a la integridad territorial y la soberanía nacional, Pekín se negó a condenar la agresión. A pesar de declarar que no aporta material de guerra a Rusia, sí ofrece equipos y materiales de uso dual que permiten a Rusia seguir atacando a Ucrania. A pesar de reiterar su neutralidad en el conflicto, ofrece un apoyo implícito a Moscú. Cuando Europa solicita a China que pida a Moscú acabar con la agresión, China responde reiterando la importancia del diálogo y la negociación. Es decir, no alimenta las llamas, pero tampoco ayuda a extinguir las brasas.

Para Pekín, Moscú es hoy otra manera de ampliar su espacio de respiración en la rivalidad sinoestadounidense. Un socio que ayuda a contrapesar a Estados Unidos, pero también a mantener a Europa centrada en la guerra, lo que da a China más margen de maniobra en Asia y en el Sur. Desde 2022, la relación entre ambos se ha profundizado: China ha sostenido la economía de guerra rusa con compras de energía, comercio y un flujo constante de bienes de doble uso, evitando al mismo tiempo la ayuda militar directa a gran escala. Ese apoyo refuerza un orden alternativo menos dominado por Occidente y se asienta sobre una asimetría creciente —Rusia depende cada vez más de China en lo económico y financiero, incluido el uso del yuan— que Pekín explota calibrando su respaldo por debajo del umbral que activaría represalias occidentales. En suma, la alineación con Putin es geopolítica, ideológica y de bajo coste percibido, y no hay señales de que China contemple una ruptura con Moscú.

Pero el mayor golpe a la posición europea sobre Ucrania y a Ucrania misma desde 2022 ha venido del segundo mandato de Donald Trump. Su cambio de postura estratégica hacia Rusia y la reducción

del compromiso estadounidense con la seguridad europea han alterado el contexto en el que la Unión Europea había construido su política de apoyo a Kiev. Trump ha dejado claro que no considera prioritario sostener indefinidamente la ayuda militar a Ucrania, y que apuesta por una fórmula política en la que Washington abandona la presión sobre Moscú e incluso busca un entendimiento directo con Putin, dejando a los europeos ante el riesgo muy real de tener que sostener solos el esfuerzo militar y financiero. Pero también ante el riesgo muy real de un cierre en falso de la guerra en Ucrania que envalentone a Rusia para atacar a Europa en un futuro próximo. Rusia ha «recuperado legitimidad» con el regreso de Trump, y China sigue soplando sobre las brasas de la maquinaria bélica rusa, sin que Estados Unidos ejerza ya la presión coordinada que caracterizó los primeros años del conflicto.

Desde Bruselas, esta evolución se percibe como un punto de inflexión que expone la vulnerabilidad estructural de Europa: su estrategia para sostener a Ucrania se basaba en un marco transatlántico sólido. Al evaporarse parte de ese apoyo, Europa se queda sola, con un coste creciente para sostener la ayuda militar, para impedir que Rusia imponga una victoria en el frente y para gestionar a una China que consolida su respaldo a Moscú. El cambio estratégico de Washington bajo Trump supone el mayor revés exógeno para la posición europea sobre Ucrania desde 2022, porque altera el equilibrio de poder, debilita la disuasión frente al Kremlin y obliga a los europeos a afrontar un escenario para el que aún no tienen plena capacidad militar.

Al mismo tiempo y en el campo económico, Europa afronta hoy una doble pinza económica que tensiona su competitividad y su autonomía estratégica. Por un lado, los aranceles y medidas proteccionistas de Estados Unidos, que afectan a sectores clave y reflejan una estrategia industrial cada vez más orientada al America First. Por otro, la creciente presión de China, que inunda el mercado europeo con productos de alta tecnología, apoyados en economías de escala, subsidios y una acelerada sofisticación industrial que

desplaza a proveedores europeos en campos como los vehículos eléctricos, la maquinaria avanzada o los bienes intermedios. Se añade a esto que China está dejando de recibir inversión extranjera: en 2024 esta se contrajo hasta un nivel dieciséis veces inferior al de 2021. En realidad, China ya tiene su propio ecosistema de desarrollo tecnológico, en muchos campos hoy superior al europeo, como el de los vehículos eléctricos; en otros campos, como el farmacéutico o el aeroespacial, avanza a pasos agigantados. China es hoy exportadora de flujos de inversión. La combinación de un socio transatlántico que eleva barreras y un competidor sistémico que gana cuota con productos cada vez más avanzados coloca a Europa en una posición vulnerable, y la obliga a reforzar su política de de-risking, proteger sectores estratégicos y desplegar instrumentos de defensa comercial y tecnológica para evitar una erosión sostenida de su base industrial, pues es consciente del control que China ejerce en el acceso a materias primas necesarias para la industria europea, como veremos en capítulos siguientes.

En términos estratégicos es poco probable que China permita una derrota rusa, no solo por el interés geopolítico de debilitar a Occidente, sino porque el eje Pekín-Moscú es ya un pilar clave de su visión de un orden global alternativo. Dado el estado calamitoso de la economía rusa, su supervivencia dependerá cada vez más del apoyo que vaya obteniendo de China. A largo plazo eso significa una Rusia débil, con China a las puertas de Europa. Tampoco es probable que Estados Unidos apoye firmemente a Europa y a Ucrania, sino que prefiera congelar el conflicto en Ucrania para avanzar en la vía de la cooperación económica con Rusia. El negocio por encima de la disuasión. Pero asimismo es poco probable que Europa deje a Ucrania en la estacada, o acepte un cierre en falso del conflicto. Para Europa es una cuestión de supervivencia. Le va la vida en ello.

No vacilar ante Rusia, reducir dependencias estratégicas de Estados Unidos en materia de defensa y no caer en brazos de China. Esta es la cuadratura del círculo europeo. Como un funambulista en la cuerda floja, así debe navegar Europa el futuro.

¿Cómo ajusta hoy el funambulista europeo su estrategia hacia China?

Es importante entender quién es Xi Jinping y qué busca hoy en Europa. El libro de Joseph Torigian The Party's Interests Come First, centrado en la vida de Xi Zhongxun, ofrece claves importantes para entender el estilo político de su hijo, Xi Jinping. La biografía muestra cómo el padre vivió bajo una lógica en la que la lealtad absoluta al Partido era el principio rector de toda acción política, incluso a costa de sacrificios personales, un patrón que también caracteriza el liderazgo de Xi, quien ha reforzado la primacía del Partido en todos los ámbitos del Estado chino. El Partido está por encima del Estado. Y el liderazgo centralizado es clave para la estabilidad. Además, el libro subraya la politización de la historia dentro del Partido y las luchas por controlar el relato del pasado, algo que se refleja en la actual obsesión de Xi por gestionar la memoria histórica, la ideología y el discurso nacionalista. Al mismo tiempo, los traumas de la Revolución Cultural moldearon una personalidad endurecida y disciplinada, lo que ayuda a comprender la firmeza, la pureza ideológica y la cautela estratégica que caracterizan su gobierno.

En su posicionamiento hacia Europa, Xi usa un discurso suave, pero estrategia dura. El mensaje oficial insiste en que China y la Unión Europea deben ser socios, defiende la cooperación, el multilateralismo y la idea de que no existen contradicciones geopolíticas fundamentales entre ambas partes. Sin embargo, los encuentros diplomáticos recientes muestran un clima mucho más complejo: el ambiente es de creciente desconfianza, marcado por tensiones comerciales, discrepancias sobre la sobrecapacidad industrial china y la presión europea para reequilibrar una relación económica que considera desequilibrada. Europa es vista como un socio necesario, sobre todo para mantener un espacio estratégico con respecto a Estados Unidos, pero no como un igual. De hecho, en privado, China se queja de los continuos «lloriqueos europeos». Pekín busca evitar alineamientos europeos con Washington y mantener acceso al mercado europeo, pero sin aceptar cambios en

su modelo y sin poner presión sobre Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, lo que ampliaría el espacio para la relación sino-europea. Por ello, la relación evoluciona hacia una competencia gestionada, más que hacia una alianza. El resultado es una relación donde el discurso de cooperación convive con una estrategia de firmeza y cálculo geopolítico, reflejando la mezcla de pragmatismo y obsesión por el control que también caracteriza el legado familiar analizado en el libro.

Para China una Unión Europea fuerte sigue siendo una herramienta para evitar la trampa bipolar. Para Europa, una Unión fuerte es una condición para no caer en dependencias —incluyendo las dependencias con China—. No se trata de «separar» a Rusia de China, sino de elevar el coste y reducir la utilidad de esa alianza. Tampoco se trata de alinearse con China como contrapeso a Estados Unidos, situándose en un triángulo geopolítico sinoestadounidense. Se trata de preservar autonomía estratégica, proteger el modelo económico europeo y evitar dependencias que limiten la capacidad de decisión. Autonomía, pero no equidistancia, reconociendo la necesidad de coexistir con China, pero de manera selectiva y condicionada. El resultado es una relación marcada por expectativas que se cruzan sin coincidir. China interpreta la «autonomía estratégica» europea como una oportunidad; Europa la interpreta como un escudo. China quiere que Europa sea un pilar de un mundo multipolar. Europa quiere de China menos presión sobre su industria y más respeto a sus valores y a su seguridad. Las dos miradas avanzan en paralelo. De ahí la tesis de este capítulo: vías paralelas que no se tocan, y que con Xi Jinping se separan cada vez más.

El futuro de las relaciones entre China y la Unión Europea será difícil porque muchos de los obstáculos que las tensan son estructurales, no coyunturales. El grado de fricción en la relación dependerá de cómo gestione cada uno estas cuestiones y de cómo ambos gestionen lo común. En el caso chino, la economía ha entrado en fase de involución en la que el modelo económico, tras décadas de expansión, muestra señales de agotamiento estructural,

especialmente visibles en la combinación de sobreproducción industrial y debilidad del consumo interno. Las discusiones recientes entre Europa y China ilustran este fenómeno: Bruselas denuncia que la industria china funciona con una capacidad excedentaria crónica, impulsada por fuertes subsidios estatales, que produce más de lo que su mercado doméstico puede absorber y vuelca el excedente en el exterior a precios que desestabilizan la competencia internacional. Esta sobreproducción no es coyuntural, sino resultado de un modelo donde el Estado incentiva sectores enteros —vehículos eléctricos, baterías, acero, inteligencia artificial— sin lograr estimular un consumo interno acorde. La brecha entre producción y demanda doméstica actúa como un freno al reequilibrio económico y obliga a China a depender cada vez más de exportaciones para sostener su crecimiento, generando tensiones externas. Así, la involución no es solo económica, sino sistémica: refleja la dificultad de China para pasar de un modelo dirigido por inversión y manufactura a otro basado en la demanda interna y la innovación sostenible, atrapándola en una dinámica de más producción que prosperidad.

Y es que, a la singularidad política china, un Estado-partido que concentra el poder político, se une hoy también una singularidad económica, un modelo basado en inversión excesiva y consumo débil que se sostienen gracias a una compresión deliberada del poder político, económico y social de los hogares. Este modelo está entrando en crisis porque ese equilibrio ya no produce crecimiento sostenible. La inversión adicional rinde cada vez menos debido a la saturación inmobiliaria, la sobrecapacidad industrial y el endeudamiento de gobiernos locales, mientras que los hogares, debilitados por décadas de salarios contenidos y protección social insuficiente, no pueden asumir el papel de motor del consumo interno. Al mismo tiempo, las reformas necesarias para reequilibrar la economía —transferir renta a los hogares, ampliar el gasto social, reducir el peso del sector público— chocan con los límites políticos del sistema, que prioriza el control del Partido sobre la eficiencia económica. El resultado es un modelo atrapado entre sus propias necesidades y restricciones. El Partido intenta resolver este bloqueo

estructural —una economía que necesita transferir poder a los hogares y una política que no quiere hacerlo— recurriendo a tecnología, automatización y robótica como una vía para mantener el crecimiento sin alterar la arquitectura política. La lógica es clara: si el consumo interno no puede despegar y las reformas redistributivas son políticamente arriesgadas, entonces el crecimiento debe venir de ganancias de productividad, sustitución de trabajo humano y nuevas industrias estratégicas que no requieran empoderar económicamente a los hogares. El nuevo año chino de 2026 mostró la cara lúdica de esta nueva política con robots practicando kung-fu, pero el mensaje estaba claro: el futuro será un mundo dominado por los robots chinos.

China afronta su fase actual de desaceleración estructural entre varios posibles caminos. Un primer escenario consiste en profundizar su estrategia de «colonización silenciosa», de exportar excedentes y sostener su crecimiento hacia afuera, utilizando su enorme capacidad industrial para colocar productos a precios bajos en terceros mercados. En este caso China se enfrentará a un aumento de medidas de defensa comercial por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero también de otros mercados importantes como Japón, Brasil o la India. El segundo escenario apunta a una presión social creciente derivada del ajuste económico: el desempleo juvenil se mantiene en niveles históricamente elevados, llegando al 19 % en 2025, mientras el hundimiento del sector inmobiliario —con ventas, precios y nuevas construcciones en caída sostenida— continúa drenando la riqueza de los hogares y debilitando la confianza económica. A esto se suma el riesgo financiero asociado a las deudas de los vehículos de financiación locales. La acumulación simultánea de tensiones sociales, inmobiliarias y fiscales podría, en un escenario extremo, provocar episodios de inestabilidad más amplios. El tercer escenario contempla un choque creciente con Estados Unidos, especialmente en los frentes tecnológico y comercial. De estos escenarios, el más probable en el corto plazo es una combinación de expansión exportadora y gestión interna del riesgo, no un colapso ni un choque frontal inmediato. China seguirá

apoyándose en su sector manufacturero para compensar la debilidad de la demanda doméstica, mientras implementa medidas fragmentarias para estabilizar el inmobiliario, controlar la deuda local y sostener el empleo juvenil. Las tensiones con Estados Unidos persistirán, pero lo más verosímil es que se gestionen mediante episodios alternados de contención y presión, más que mediante una ruptura abierta. A medio-largo plazo, China avanzará hacia un modelo de crecimiento más lento y dependiente de las exportaciones, con reformas internas graduales y una rivalidad estratégica controlada con Estados Unidos que no impedirá, pero sí condicionará, su margen de maniobra económico.

En el caso europeo, la necesidad de mayor integración económica —en energía, en mercado interior, en mercado de capitales— y de avanzar hacia una unión de defensa son factores profundos que no dependen de decisiones puntuales, sino de una lógica interna. A esto se suma un elemento adicional clave: la dependencia mutua en sectores estratégicos altamente sensibles, desde tecnologías críticas hasta materiales esenciales para la transición energética. Esta interdependencia es asimétrica y genera vulnerabilidades que ambos tendrán que corregir, a menudo con medidas que el otro percibe como hostiles.

El otro obstáculo estructural —a menudo subestimado— es la divergencia de modelos políticos y económicos. Europa basa su estrategia en reglas, transparencia y limitaciones al poder estatal, mientras que China opera bajo una lógica donde el Partido fija prioridades nacionales que priman sobre la competencia o la apertura plena del mercado. Esto crea fricciones permanentes: la Unión demanda «competencia justa», mientras que China defiende su modelo de desarrollo y rechaza lo que considera «politización» del comercio. Finalmente, existe un factor geopolítico inevitable: la Unión Europea necesita coordinarse con Estados Unidos para garantizar su seguridad y su acceso a tecnología avanzada, mientras que China percibe esta alineación occidental como un cerco estratégico. Estos elementos —económicos, institucionales y

geopolíticos— hacen que, incluso en escenarios de cooperación, la relación tienda a ser cada vez más gestionada, más cautelosa y conflictiva.

En el futuro, la relación entre China y la Unión Europea podría entenderse mejor mediante un tríptico que sustituya las categorías tradicionales de socio, competidor y rival. El primer eje sería el de «interdependientes», porque, pese a las tensiones, ambas partes siguen profundamente vinculadas por cadenas de suministro, flujos comerciales y necesidades estratégicas mutuas. China depende del mercado europeo para absorber parte del excedente de su producción, mientras que Europa necesita componentes, minerales críticos y bienes manufacturados que aún dependen de la capacidad industrial china. Esta interdependencia no es electiva ni ideológica: es estructural y seguirá condicionando cualquier decisión política o económica. Europa deberá ser más capaz de condicionar el acceso a su mercado al respeto de un comercio más leal.

El segundo eje sería «asimétricos», porque China y la Unión operan bajo modelos sistémicos desacordes: uno basado en la dirección política del Partido y otro en reglas y competencia abierta, lo que genera fricciones permanentes sobre subsidios, acceso al mercado o seguridad tecnológica.

El tercero sería «competitivos-cooperativos», porque ambas potencias compiten por influencia global, estándares y recursos, pero a la vez se necesitan para gestionar retos transnacionales —clima, estabilidad financiera, salud global— que ningún actor puede resolver solo.

Este tríptico permite entender la relación no como una etiqueta fija, sino como una tensión estructural dinámica que combina dependencia, fricción y cooperación obligada en una relación inevitable pero compleja, tensa, llena de potencial y saturada de roces.

Este capítulo muestra que la soledad geopolítica de Europa proviene también de la disociación entre las expectativas que Europa tiene de China y las expectativas que China proyecta sobre Europa. La Europa que China quiere no es la que Europa puede ser. Y la China que Europa necesita no es la China que existe. Estamos condenados a entendernos, porque nos sigue uniendo la interdependencia generada por la globalización, pero lo haremos siguiendo vías paralelas y trataremos de evitar que cada vez se vayan separando más.

6

LA VENGANZA DE LA GLOBALIZACIÓN AMERICANA

La economía es hoy otro de los campos de batalla entre Europa y Estados Unidos. Fuimos constructores de un sistema abierto de comercio internacional basado en reglas; trabajamos codo con codo liderando la modernización de esas reglas. Nos peleábamos por defender nuestras industrias, pero siempre acabábamos por reconciliarnos. Pero el año 2008 supuso un punto de inflexión que abrió una grieta que hoy es casi infranqueable. Estados Unidos inventó la globalización y hoy es él mismo quien la repudia. Donald Trump, en el Foro de Davos de enero de 2026, insistía en «soberanía económica» y políticas proteccionistas frente al modelo globalista que trajo desindustrialización, fronteras abiertas y pérdida de control económico. Europa se queda sola.

Merece la pena entender cómo hemos llegado aquí.

En 1983, Theodore Levitt, el economista alemán editor de la Harvard Business Review, puso de moda el término «globalización». En su artículo «La globalización de los mercados», Levitt escribió: «Una fuerza poderosa impulsa al mundo hacia un punto en común convergente, y esa fuerza es la tecnología. Ha proletarizado la comunicación, el transporte y los viajes. Ha hecho que los lugares aislados y los pueblos empobrecidos estén ansiosos por los atractivos de la modernidad. Casi todo el mundo quiere todo lo que

ha oído, visto o experimentado a través de las nuevas tecnologías… La globalización de los mercados está cerca».

La interconexión de las economías no es nueva. Muchos historiadores señalan a España y al Galeón de Manila en 1565 como el inicio de una red comercial que conectaba Asia, Europa y América en un solo circuito. El siglo xix crea la primera economía globalmente integrada con el desarrollo del telégrafo, el ferrocarril y el barco de vapor. Y el siglo xx sienta las bases legales del comercio actual con el Acuerdo GATT y después la Organización Mundial del Comercio (OMC). Levitt no inventó la globalización, pero sí puso nombre a la fase de hiperconexión económica, financiera y comercial que comenzó en los años ochenta y que nos ha traído aquí. El epicentro de la hiperglobalización fue Estados Unidos.

En los años ochenta Ronald Reagan promovió políticas neoliberales, la liberalización del comercio y una agenda de desregulación. La Reaganomics, con su apuesta por el capitalismo de libre mercado y su confrontación ideológica con el bloque soviético, al debilitarlo, abrió el camino hacia un mundo más integrado económicamente, un pilar fundamental de la globalización contemporánea. Su aumento del gasto de defensa y, en particular, su programa de «Guerra de las Galaxias» sentaron las bases de la innovación tecnológica de las siguientes décadas en áreas como los satélites, los sensores o la energía.

Así se dirigía Ronald Reagan en una emisión radiofónica a los ciudadanos estadounidenses la víspera del Día de Acción de Gracias de 1988:

Nuestros socios comerciales pacíficos no son nuestros enemigos; son nuestros aliados. Debemos tener cuidado con los demagogos que están dispuestos a declarar una guerra comercial contra nuestros amigos, debilitando nuestra economía, nuestra seguridad nacional y

a todo el mundo libre, todo mientras ondean cínicamente la bandera estadounidense. La expansión de la economía internacional no es una invasión extranjera; es un triunfo estadounidense, por el que trabajamos arduamente y algo fundamental para nuestra visión de un mundo pacífico, próspero y libre. Cuanto más libre sea el flujo del comercio mundial, más fuertes serán las mareas hacia el progreso económico y la paz entre las naciones.

Pero si hay un presidente que encarna la hiperglobalización en Estados Unidos este es Bill Clinton. Su discurso en la Organización Mundial del Comercio en 1998 contiene los elementos fundamentales de su pensamiento:

«La globalización no es una opción política, sino un hecho. Pero todos nosotros hemos de elegir. Podemos esforzarnos por modelar esas poderosas fuerzas de transformación en beneficio de nuestro pueblo o refugiarnos tras los muros del proteccionismo y quedar rezagados en la economía mundial. En un momento en el que, por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de los pueblos del mundo tienen gobiernos que ellos mismos han elegido... en que el debate sobre si es mejor la libre empresa o el socialismo de Estado ha quedado saldado... en que los pueblos de todos los continentes tratan de unirse al sistema de libre mercado, quienes nos hemos beneficiado de ese sistema y hemos estado a la cabeza de este no podemos darle la espalda».

Bajo su presidencia, Estados Unidos apoyó la creación de la OMC, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) entre Estados Unidos, Canadá y México y negoció los términos de la entrada de China en la OMC.

Ambos presidentes representan una visión de la globalización como flujo imparable, fruto del laissez-faire, una especie de maremoto que

aplasta fronteras, sin el cual las iniciativas políticas nacionales se vuelven impotentes.

En las últimas décadas los avances tecnológicos han facilitado la aparición de mercados mundiales de productos y servicios estandarizados a una escala antes inimaginable. El desarrollo de políticas públicas a escala nacional, pero sobre todo a escala multilateral en la OMC, ha permitido reducir obstáculos al comercio, ofrecer predictibilidad y fomentar comercio e inversiones. Un entorno internacional benigno ha catalizado una integración económica. Entramos en la era de la interdependencia.

El resultado ha sido de una magnitud sin precedentes. La economía mundial es hoy diez veces mayor que la que conoció Levitt cuando escribió su artículo. Todos los países han aumentado el tamaño de sus economías, pero el peso relativo ha cambiado. En 1980 la economía china representaba el 2,7 % de la riqueza mundial y un ciudadano chino tenía un poder de compra similar al de un afgano. Hoy China representa el 19 % de la riqueza mundial y el PIB per cápita es similar al de México o Malasia.

Y la globalización no es solo el ascenso de China. Lo es también el de las clases medias, que se han cuadruplicado en este mismo periodo. O la esperanza de vida, que ha pasado de 64 años en 1980 a 73 años en la actualidad debido a la reducción de la mortalidad infantil y a los avances en medicina y en atención médica. O la escolarización. En 1980 alrededor del 70 % de los niños entre 5 y 19 años asistían a la escuela. Hoy lo hacen aproximadamente el 90 %. O la reducción de las desigualdades entre países en un proceso histórico de convergencia de ingresos.

La hiperglobalización coincidió con el fin de la Guerra Fría y generó la ilusión de una era de paz global donde la fuerza dominante sería la economía, la búsqueda de la eficiencia y la prosperidad compartida. Hay quienes calificaron este periodo como el «fin de la historia». Para quienes, como yo misma, trabajábamos en el corazón

de la economía internacional, más que una paz perpetua kantiana en la que la razón se impusiera a la naturaleza belicosa humana, veíamos el inicio de una reconfiguración global sobre la que había que incidir. En su discurso de investidura ante el Parlamento Europeo en septiembre de 1999, el comisario de Comercio designado, Pascal Lamy, enunció lo que iba a ser la política europea de este tiempo: encauzar la globalización:

La globalización no es un juego de suma cero en el que el beneficio de uno tenga que ser la pérdida del otro. Es más bien un proceso del que todos pueden beneficiarse si se controla y se gestiona y por lo tanto de interés para los ciudadanos europeos. Podemos y debemos conciliar la protección de la salud, el medio ambiente y la cultura con una dinámica de mercados abiertos y competitivos. De la misma manera, la apertura comercial, el desarrollo sostenible y los derechos humanos no son mutuamente incompatibles… No se trata de defender únicamente intereses económicos, sino de promover un cierto concepto de sociedad, incluyendo la protección del medio ambiente, de la salud o de la cultura, que refleje valores universales.

Esta es la versión europea de la globalización. Es también mi credo en materia económica, y en esta aventura acompañé a Pascal Lamy, uno de los europeos y europeístas más lúcidos de nuestro tiempo, buscando encauzar la globalización primero en Europa desde la Comisión Europea, y después desde la OMC. Por eso, donde algunos veían determinismo histórico, otros oponíamos activismo político, regulación, limitación, compromiso, consenso. Conviene recordarlo ahora que está tan de moda hablar de ingenuidad europea. No lo era. Era y es un proyecto político que ha tenido sus éxitos y también sus derrotas, pero que rechaza la inevitabilidad para obligarnos a responsabilizarnos de nuestras elecciones y acciones.

Como ya hemos visto, muchos han sido los éxitos en forma de progreso global. Pero ¿cuáles son las razones del desprestigio de la globalización? ¿Cómo explicar el auge de la geopolítica? ¿Por qué el principal arquitecto de la globalización —Estados Unidos— se ha convertido hoy en su principal detractor?

Todo o casi todo lo que ocurre hoy tiene su origen político en 2008, el año que inauguró el siglo xxi, el económico y también el geopolítico. El año en que comenzó a cambiar la globalización. El año en que empezó a cambiar el mundo en el que vivíamos los europeos.

Los ministros de comercio reunidos en Ginebra en julio de 2008 no sabían que su falta de entendimiento iba a poner los clavos en el ataúd de la ronda de negociación más ambiciosa jamás alcanzada por la OMC, que ya nunca se recuperó de ese golpe. Tras nueve días de intensas negociaciones, la negociadora estadounidense decidió rechazar la propuesta de compromiso sobre la mesa: «No es lo suficientemente ambiciosa». En realidad, la administración saliente de George W. Bush, bajo presión de miembros del Congreso americano, tenía escaso margen de maniobra para ofrecer concesiones agrícolas, el caballo de batalla de la negociación, mientras pedía a otros países, en particular China e India, la apertura de sus mercados a productos y servicios estadounidenses. Un acuerdo, aunque modesto, hubiese supuesto un gran paso adelante. Así se había construido el sistema comercial multilateral, en rondas de negociación que desde 1948 habían reducido gradualmente los obstáculos al comercio y tejido una red de acuerdos para evitar el proteccionismo y las prácticas comerciales desleales. Y lo que nadie imaginaba, en aquella calurosa semana junto al lago Lemán, era que apenas unos meses después todos ellos se enfrentarían al espectro de una crisis financiera como la de 1929 y al riesgo de un proteccionismo a gran escala. Por primera vez en la historia de la OMC, la batalla no era entre Estados Unidos y la Unión Europea o Japón. Los nuevos adversarios comerciales eran Estados Unidos y China. La OMC era el canario en la mina de una

rivalidad sistémica que comenzaba apenas siete años después de la entrada de China en la OMC en 2001.

El fracaso de la negociación impedía reformar las reglas de comercio internacional, cuya última puesta al día databa de 1995, cuando China era el 3 % del comercio mundial, el comercio entre países del sur representaba solo el 8 % del comercio mundial, no existía internet y el comercio internacional era tres veces menor. En 2008 China era el mayor exportador y segundo mayor importador del mundo. Pero las reglas del comercio internacional no se habían adaptado para disciplinar el modelo de capitalismo chino. La divergencia no haría sino agrandarse en la década siguiente.

Apenas unas semanas después, Putin invadía Georgia. Las relaciones entre Rusia y Georgia habían conocido altibajos, sobre todo después de la Revolución de las Rosas en 2003 y la dimisión de Eduard Shevardnadze que puso fin al último gobierno de la era soviética en Georgia. El detonante del ataque fue la Cumbre de la OTAN de abril de 2008. El nuevo gobierno prooccidental de Saakashvili había pedido el ingreso de Georgia en la Alianza Atlántica, como también lo había pedido el gobierno de Yuschenko en Ucrania. La respuesta de Putin no se hizo esperar, azuzó a los territorios separatistas de Abjasia y Osetia del Sur a agredir a Georgia, y a principios de agosto justificó su ataque a Georgia para proteger ambos territorios. Era la primera guerra de agresión en Europa en el siglo xxi y el retorno de la ambición imperialista rusa, la traducción de la visión de Putin de un mundo «multipolar» dividido en zonas de influencia, con Rusia como actor principal y no subordinado a Estados Unidos. Putin había desgranado esta visión un año antes en su famoso discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero de 2007. En ella acusaba a la OTAN de romper el pacto con la URSS en 1990 de no colocar ejércitos de la alianza fuera del territorio de la Alemania unificada.

Lo cierto es que el compromiso de la alianza en 1990 fue político, nunca se tradujo en un tratado entre ambas partes, y buscaba

tranquilizar a la Unión Soviética sobre lo pacífico de la reunificación de Alemania en un momento de gran turbulencia. Pero más importante aún es que la verdadera razón del nuevo posicionamiento de Putin no fue tanto la ampliación de la OTAN como la extensión de regímenes democráticos alrededor de Rusia, percibida como un verdadero riesgo para el régimen ruso. El peligro eran las llamadas «revoluciones de colores» que se desarrollaron alrededor del espacio postsoviético, lideradas por movimientos ciudadanos no violentos que protestaban contra la corrupción, el amaño de elecciones y el autoritarismo. Desde el levantamiento contra Milosevic en la República Federal de Yugoslavia en 2000, hasta la Revolución de las Rosas en Georgia en 2003, la Revolución Naranja en Ucrania que llevó al poder a Yuschenko en 2005 o la de los tulipanes ese mismo año en Kirguistán que acabó derrocando al presidente Askar Akayev. Por no hablar de la fracasada «revolución de los jeans» contra Lukashenko en Bielorrusia. En noviembre de 2014, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Putin fue explícito al referirse a las revoluciones de colores: «Para nosotros las revoluciones de colores del pasado fueron una lección y una advertencia. Los ciudadanos de las repúblicas en las que ocurrieron sufrieron interferencias, encubiertas y a menudo flagrantes, en sus vidas. Haremos todo lo posible para que nunca tengan lugar en Rusia». El problema no era la OTAN. El problema era la democracia, los derechos y libertades. A eso temía y teme Putin. Este es su enemigo, dentro de Rusia y también en lo que él considera su zona de influencia, como se vio en Crimea en 2014 y en Ucrania en 2022.

Y el mismo día en que Rusia invadía Georgia, el presidente chino Hu Jintao inauguraba los Juegos Olímpicos de Pekín, en la ceremonia más fastuosa nunca vista con coreografía del gran cineasta Zhang Yimou. El entonces primer ministro Putin, sentado en su palco, seguía la inauguración mientras recibía por teléfono información sobre las primeras víctimas rusas de la guerra. No fue del agrado de China que el conflicto en el Cáucaso estallase en lo que consideraba «su momento». Y menos aún tras los esfuerzos que China había tenido que desplegar para evitar el boicot en la inauguración de

numerosos líderes —tal fue el caso de la canciller alemana Merkel, el primer ministro británico Brown o el primer ministro canadiense Harper— frente a lo que consideraban violaciones de derechos humanos en el Tíbet. Ante Putin, George W. Bush o Nicolas Sarkozy, Hu Jintao tuvo que emplearse a fondo en un ejercicio de «ambigüedad estratégica». «Nadie necesita la guerra», dijo Hu Jintao, pidiendo «comedimiento, el cese de hostilidades y la negociación para alcanzar una solución aceptable por todas las partes».

El 28 de agosto se reunieron en Dusambé, Tayikistán, los seis países del Consejo de Seguridad de Shanghái: China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. A pesar de sus presiones, Rusia no logró imponer su voluntad en el comunicado conjunto, que se limitó a «expresar su honda preocupación por la situación en Osetia del Sur y a llamar a las partes a resolver los problemas de manera pacífica a través del diálogo». El vasto espacio de Asia Central también había sufrido la implosión de la Unión Soviética. En 1996 estos países —excepto Uzbekistán, que se unió en 2001— decidieron crear el grupo de los Cinco de Shanghái para resolver disputas territoriales y generar confianza entre vecinos en un momento de gran turbulencia política. En 2001, el grupo se institucionalizó y se transformó en el Consejo de Seguridad de Shanghái. En boca de los representantes chinos, era esta una manera para China de extender su influencia sobre Asia Central, creando una especie de «condominio» con el que había sido el actor principal en la región, Rusia, para impulsar una agenda conjunta en materia de seguridad, desarrollo económico y cooperación humanitaria, y luchar juntos contra tres grandes enemigos: el extremismo, el separatismo y el terrorismo. Pero en 2008 ya eran visibles importantes divergencias. China deseaba ampliar la agenda económica y comercial de la región a través de una zona de libre cambio y de la creación de un banco de desarrollo regional, lo cual era visto con recelo por Rusia, que temía la competitividad china. Por su parte, Rusia deseaba invitar a unirse al grupo a India, un país con quien tenía relaciones de amistad y que le ayudaría a equilibrar una relación en el

«condominio» que ya se antojaba desigual. En este convulso 2008 el Consejo de Seguridad de Shanghái empezaba a mostrar su perfil geopolítico.

Pero volvamos a China. Las Olimpiadas del verano de 2008 supusieron un punto de inflexión, simbolizaron el fin de la era de «esconder tu fuerza y esperar el momento oportuno» que el país había hecho suya desde la época de Deng Xiaoping. El líder chino artífice de la gran transformación del país a través del proceso de «apertura y reforma» desde finales de los años ochenta abogaba por una estrategia de sigilo. «Si trabajamos duro sin llamar la atención durante unos años, seremos capaces de tener más influencia internacional. Solo así nos convertiremos en un gran poder global», dijo en 1992. RIP en 2008. Pekín 2008 fue el escenario global donde China dejó de ocultar su ascenso para mostrarlo al mundo. Una China moderna, próspera y organizada, demostraba su capacidad para emprender eventos masivos. La modernización del país, simbolizada por el estadio llamado «el nido» o la piscina olímpica, proyectaba una imagen de una China que se levanta, que sale de las sombras. El medallero olímpico alimentó una confianza interna y un nuevo sentimiento nacionalista. Permaneció el pragmatismo, pero aquí cambió la política china.

El año 2008 fue en realidad el inicio de una reconfiguración de la gobernanza global que aún perdura. En los márgenes de la cumbre del G8 en Hokkaido, Japón, y con el ruido de fondo de la crisis financiera que se desataría unas semanas más tarde, tuvo lugar la primera cumbre informal de líderes de los BRIC: Brasil, Rusia, India y China. Faltaba Sudáfrica, que se uniría al grupo en 2010. No era la primera vez que estos países unían sus esfuerzos, puesto que los ministros de Asuntos Exteriores de estos países ya venían reuniéndose desde 2006 durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero la foto del encuentro en Japón y la agenda de discusión, con temas como la reforma del sistema financiero global, la estabilidad financiera, la seguridad energética o la lucha contra el proteccionismo comercial, indicaban el deseo de estos países

emergentes de convertirse en actores principales y no solo secundarios en la gobernanza internacional. Su puesta de largo en medio de una cumbre del G8 tenía algo de premonitorio.

Pero si por algo conocemos 2008 es por la crisis financiera global desatada por la quiebra el 15 de septiembre del banco estadounidense Lehman Brothers. Fue la más grave desde el crac financiero de 1929 y tuvo su origen en una insuficiente regulación prudencial del sistema financiero norteamericano. Los bajos tipos de interés, el excesivo apalancamiento de las instituciones financieras, la ingeniería financiera irresponsable y la venta de hipotecas abusivas a compradores con bajos ingresos acabaron por hacer estallar una burbuja inmobiliaria que arrastró al sistema bancario estadounidense y se extendió causando una crisis bancaria internacional. La crisis no se inició en Canadá, ni en Europa, ni en Japón, ni en China. Lo hizo en Estados Unidos, y la causa fue una globalización financiera sin reglas de juego. La primera gran crisis de la globalización americana fue la ausencia de suficientes pesos y contrapesos.

Con el precedente de la crisis de 1929, tres eran los peligros que había que evitar. En primer lugar, evitar que la crisis financiera se transformase en una catástrofe económica, y para ello era necesario insuflar confianza en el sistema financiero. En segundo lugar, evitar a toda costa medidas proteccionistas como las adoptadas en Estados Unidos con la Ley Smoot-Hawley. En 1930 los senadores Reed Smoot y Willis C. Hawley elevaron unilateralmente los aranceles estadounidenses a más de 20.000 productos importados para proteger la industria nacional. El resultado fue la imposición de represalias por parte de sus socios comerciales, lo que deprimió el comercio internacional, contrajo el crecimiento y aumentó el desempleo. En tercer lugar, había que intervenir rápidamente para restaurar el crédito comercial que financia el comercio internacional, que es una de las formas de crédito más seguras, pues las mercancías actúan como garantía colateral.

Pero ¿cómo hacerlo? Estaba claro que el G8 era necesario pero insuficiente dada la importancia sistémica de países emergentes como China, India, Brasil o Corea y cuya participación era esencial para estabilizar el sistema. Por otra parte, Naciones Unidas, siendo de gran legitimidad, no ofrecía el marco de rapidez y eficacia necesaria para afrontar una crisis que aumentaba su impacto a medida que pasaban los días. Y además no había tiempo para negociar la creación de un nuevo foro y decidir la participación. De ahí surgió la idea de establecer el G20 como foro principal para la gobernanza económica global, elevando a nivel de cumbre de líderes el grupo que había sido creado para responder a la crisis financiera asiática de 1999. La primera cumbre fue organizada a toda prisa y tuvo lugar los días 14-15 de noviembre de 2008 en Washington, presidida por George W. Bush en las últimas semanas de su mandato. El país cambiaba de ciclo político tras la victoria en las elecciones de 2008 del joven candidato demócrata Barack Obama, en un ticket con Joe Biden. Pero no se podía esperar a la toma de posesión en enero de 2009. Era urgente enviar un mensaje de unión y de confianza a los mercados. Y había que hacerlo desde Washington: el pirómano se convertía en bombero de un sistema financiero global en llamas. Bush adoptó una ley de emergencia de 700.000 millones de dólares de rescate masivo y directo del sector financiero y automotriz, usando fondos federales para inyectar liquidez y adquirir activos «tóxicos», sentando las bases para reformas futuras.

A pesar de estas medidas y de la coordinación de políticas monetarias por los bancos centrales del G20, los mercados financieros siguieron experimentando gran volatilidad y la recesión global se agravó. La práctica totalidad de países del G20 entraron en recesión en el último trimestre de 2008 y el primero de 2009. La riqueza de los hogares estadounidenses se desplomó, lo que contribuyó a una fuerte disminución del consumo y de la inversión empresarial. El daño fue colosal.

En febrero de 2009, el recién estrenado presidente Obama adoptó un paquete de estímulos económicos de 831.000 millones de dólares para preservar y generar empleo. La cumbre del G20 en Londres, bajo la batuta del primer ministro Gordon Brown, acordó una serie de medidas que lograron estabilizar la situación. Se sentaron las bases para una reforma de la arquitectura financiera global que evitase crisis futuras, se decidió inyectar fondos en la economía global a través de instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, se adoptaron medidas para luchar contra la evasión y los paraísos fiscales, los países se comprometieron a evitar medidas proteccionistas de alta intensidad y se adoptó un paquete de 250.000 millones de dólares para crédito comercial.

De las siete cumbres del G20 a las que asistí como sherpa del director general de la Organización Mundial del Comercio, esta es la que mejor demostró la solidaridad y la coordinación entre países, necesarias para salir de la crisis. Solo aquí vi al presidente estadounidense Barack Obama tomar del hombro al presidente chino Hu Jintao y retirarse a un rincón de la sala para encontrar un compromiso relativo a los paraísos fiscales. Solo aquí vi a Angela Merkel desplegar todo su poder de convicción para que la presidenta argentina Cristina Kirchner diese su apoyo al paquete final. Aquí también vi al presidente ruso Medvedev cooperar con el presidente de la Comisión Europea. Todos estaban en el mismo barco y el barco se hundía, así es que tocaba cerrar la vía por la que entraba agua. Todos lo hicieron.

Este momento de solidaridad no duró. Y la crisis dejó su huella también dentro de cada país. Merece la pena detenerse en el impacto de la crisis financiera sobre la ciudadanía estadounidense para entender por qué de aquellos polvos, estos lodos. La crisis generó desconfianza en el sistema financiero, la percepción de que el sistema estaba «amañado» a favor de las élites, un mayor escepticismo hacia el comercio y un sentimiento antichino a quien se comenzó a acusar del declive estadounidense. Todo ello sentó las bases para el auge del proteccionismo y las tensiones comerciales

posteriores, con el público buscando respuestas rápidas y a culpables, a menudo identificados con la globalización y con China. Se fortaleció el sentimiento de que la economía nacional debía ser protegida, impulsando demandas de empleos y una prioridad a la producción local. La crisis de 2008 actuó como catalizador, agudizando la ansiedad sobre la seguridad económica, fomentando un nacionalismo económico y redefiniendo la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, especialmente con China. Aquí se sembraron las semillas de la política de America First.

Pero de la crisis financiera de 2008 también sacó lecciones China. Conviene leer a Liu He, economista influyente y consejero del presidente Hu Jintao, para entenderlas. La primera es el gran descrédito del modelo americano de capitalismo de mercado. A ojos del liderazgo chino, la crisis de 2008 fue consecuencia de la falta de regulación, de la búsqueda ciega del máximo beneficio y de sobrevalorar el poder de los mercados para autocorregirse. La llamaron «crisis financiera occidental». La reacción china fue reevaluar su modelo económico. Pusieron en sordina la propiedad privada de los medios de producción con una mayor intervención del Estado en la economía, a modo de «capitalismo con características chinas», todo para evitar la trampa del país de renta media. En un momento de desaceleración del crecimiento global, la segunda lección fue cambiar el foco de concentrarse en exportar productos de bajo valor añadido, a invertir en capacidades industriales nacionales, en mejorar el desarrollo tecnológico y en mejorar las infraestructuras para explotar mejor el mercado interno chino. La crisis también dejó una tercera lección en clave geopolítica: mirar el largo plazo, priorizar poner la casa china en orden y evitar enredarse en conflictos internacionales para poder alcanzar un ascenso pacífico en el mundo. Luces largas.

Y así en 2010 China ya había identificado siete industrias estratégicas emergentes —tecnologías verdes, biotecnología, nueva generación de IT, nuevas energías, nuevos materiales, vehículos de nuevas energías, producción de equipamientos de alta gama— que

constituirían el 8 % del PIB chino en 2015 y el 15 % en 2020. En 2015 promulgó la estrategia de Made in China 2025 emulando al plan alemán «Industria 4.0», con el objetivo de convertirse en el líder mundial en producción de alta tecnología —en robótica, IA, industria aeroespacial— y alcanzar la autosuficiencia tecnológica. Una política industrial de Estado, también con características chinas.

¿Y Europa?

La crisis financiera originada en Estados Unidos se extendió inmediatamente al sector financiero europeo dada la interconexión de las economías. Los bancos cerraron líneas de crédito, lo que deprimió el crecimiento de la economía europea y aumentó el desempleo. La economía pareció estabilizarse en 2009 tras la adopción de un plan de recuperación europeo y la inyección de ingentes fondos públicos para apoyar al sector bancario, pero pronto la crisis financiera se convirtió en una crisis de deuda soberana que puso bajo enorme presión a la zona euro. Los riesgos bancarios y los soberanos se entrelazaron, creando un círculo vicioso que obligó a la Unión Europea a tomar medidas a corto plazo, tales como paquetes para rescatar bancos y medidas de apoyo a países más vulnerables por su grado de endeudamiento, como Italia, España o Grecia, mientras se introducían reformas en un marco regulatorio claramente insuficiente. La crisis expuso un doble problema en Europa: una divergencia macroeconómica entre países del norte y del sur que hacía más vulnerable la zona euro ante shocks externos, y, por otra parte, una gobernanza de la zona euro incompleta e imperfecta. En vez de entender que, en una zona con una única moneda, un solo banco central y criterios comunes de déficit y de deuda, sin soluciones comunes se hunden todos, se prefirió jugar a dividir la Unión entre países virtuosos —el norte— y pecadores —el sur— y a imponer a los países del sur condiciones de ajuste y de austeridad que causaron enorme dolor social y que a la postre redujeron el potencial de crecimiento de toda la Unión.

Uno de los puntos álgidos de la crisis tuvo lugar en otoño de 2011 durante la cumbre del G20 en Cannes (Francia). La reunión estuvo dominada por la situación en Grecia. El Paquete de Ajuste Económico adoptado el año anterior y acompañado de grandes medidas de austeridad, que había sacado a la calle a millones de ciudadanos griegos en un acto de protesta sin precedentes, no había sido suficiente. La economía griega seguía en caída libre y la situación ponía en duda la viabilidad del euro. La Troika, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, recomendó un segundo paquete de rescate, pero con condiciones de ajuste aún más draconianas que las anteriores. El primer ministro griego, Papandreou, anunció que sometería el paquete de rescate a un referéndum nacional, lo cual causó una gran confusión. Todo estalló en la cumbre del G20, donde el tándem Sarkozy-Merkel presionó a Papandreou a aceptar el paquete sin someterlo a referéndum, dado el riesgo para el euro, e insinuando que de lo contrario este debería dimitir. Cuatro días después, Papandreou dimitió y dio paso a un gobierno tecnócrata del parlamentario Lucas Papademos al frente de un gobierno interino de unidad nacional.

Un mes antes, el 6 de octubre de 2011, la canciller alemana Angela Merkel reunía a los cinco jefes de organismos internacionales — Banco Mundial, FMI, OMC, OCDE y Organización Internacional del Trabajo— a quienes convocaba anualmente para discutir de cuestiones estratégicas para avanzar en la gobernanza internacional. La cita consistía en una reunión de trabajo con la canciller y su equipo de gobierno, seguida de una conferencia de prensa y de una cena ya solo con ella y los cinco líderes internacionales. La cena de ese octubre también giró alrededor del asunto griego. Durante los postres, uno de los participantes preguntó a Merkel por qué la Unión Europea no era capaz de resolver el problema de la deuda griega y dejaba que arrastrase a Alemania y a la propia Unión. Su respuesta explica bien la década perdida de Europa: Alemania bien podría rescatar a Grecia, pero la CDU alemana perdería las elecciones. Y así se impuso un periodo de austeridad para los países del sur de Europa que lastró la salida de la crisis para la totalidad de Europa.

Una salida que se apoyó en reformas estructurales, inversión extranjera y también comercio internacional, y en particular el del sector del turismo. Durante este periodo, Europa también invirtió menos que Estados Unidos en capacidad productiva, sobre todo en el sector tecnológico; la brecha de inversión fue notable en Alemania, Francia e Italia. Todo esto explica el porqué de la brecha de productividad de Europa con respecto a la economía americana.

Pero la gestión de las crisis europeas fue también la mecha que prendió movimientos populistas y euroescépticos que irrumpieron en los espacios nacionales europeos. Desde los indignados del 15M en España, que desembocaría en Podemos, al movimiento 5 Estrellas italiano, a Alternativa para Alemania (AFD), que nació como respuesta euroescéptica de académicos y economistas alemanes a los rescates financieros de la eurozona, al Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), que capitalizó el euroescepticismo poscrisis para marcar una agenda que acabaría en el referéndum sobre el Brexit, o a Debout la République en Francia, nacido de una escisión soberanista y euroescéptica del partido conservador UMP. Las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 supusieron un terremoto político: los partidos euroescépticos ganaron 57 escaños sobre el resultado de 2009 y sobrepasaron la barrera psicológica de un quinto de eurodiputados, insuficiente para bloquear proyectos legislativos por sí mismos, pero rompiendo el dominio tradicional del bipartidismo de los grupos socialista y popular europeo.

Un apunte final sobre 2008. Cuando apenas quedaban tres días para finalizar el año, Israel invadía la Franja de Gaza como respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hamás, en lo que se conoce como la primera guerra de Gaza. Las fuerzas armadas israelíes lanzaron su ofensiva aérea contra objetivos militares, lugares donde podían esconderse armas o militantes de Hamás o comisarías de policía. Pero también dispararon de manera indiscriminada sobre zonas densamente pobladas como Khan Yunis o Rafah. El 3 de enero fuerzas israelíes entraban en Gaza mientras Hamás atacaba con

cohetes objetivos civiles en el sur de Israel. Tras cerca de 1.400 víctimas civiles palestinas, 13 israelíes y más de 46.000 viviendas destruidas en Gaza, ambas partes alcanzaron un alto el fuego el 18 de enero de 2009.

El año 2008 ofrece muchas de las claves que explican cómo hemos llegado hasta aquí. Durante ese año se precipitaron movimientos iniciados en la década anterior pero que tuvieron ese año un punto de inflexión con gran impacto para Europa. Fue el comienzo del fin del sueño de una Rusia democrática y liberal con voz propia en Europa y con proyección global. La Rusia de Putin comenzó a deslizarse hacia la autocracia, rescatando su ambición imperialista y azuzando fuerzas iliberales en los países de su entorno. Ese 2008 fue el aviso.

Fue el fin de la discreción china y el inicio de su proyección global, centrada en un poderío económico y tecnológico, construido sobre un capitalismo con características chinas, con una presencia del Estado en la economía necesitada de nuevas disciplinas internacionales para garantizar un fair play. Este poderío estaría también construido sobre el liderazgo chino en la extracción y refinado de tierras raras, un grupo de elementos químicos con propiedades únicas cruciales para la fabricación de tecnología —en móviles, coches eléctricos o láseres, y en la transición energética—. En un episodio que pasó casi desapercibido, en 2008 China introdujo restricciones a la exportación y aumentó las tasas a la exportación de estos minerales, lo que se tradujo en un aumento significativo de precios. Si bien China justificó la medida por la necesidad de ordenar este sector de la producción altamente contaminante, quedaba de manifiesto el poder estratégico de este sector.

Fue el inicio del fin del enamoramiento americano con la globalización. Mientras la desigualdad entre países se reducía, la legitimidad de la globalización también se veía erosionada por el aumento de las desigualdades en el interior de los países, sobre todo en Estados Unidos. El porcentaje del total de renta del 1 % de la

población con mayores ingresos aumentó en Norteamérica de alrededor del 15 % en 1990 hasta el 21 % en 2022, frente al 12 % en Francia o el 10 % en España. Estas cifras muestran que las desigualdades no son inevitables, ni tampoco irresolubles. Dependen de las políticas públicas que se apliquen tanto a nivel nacional como a nivel global, como por ejemplo la fiscalidad internacional o el alivio de deuda. Pero en ausencia de tales políticas públicas, la globalización —y en particular el comercio y China— se ha convertido en la cabeza de turco de todo lo que no funciona en los países, y en particular en Estados Unidos. De 2008 Estados Unidos salió más fuerte económica y tecnológicamente, pero más débil en términos de cohesión social, lo que a la postre abriría la puerta a Donald Trump.

En Europa fue el comienzo de una década perdida. Cierto es que mejoramos la gobernanza económica y financiera. Pero es cierto también que la gestión de la doble crisis financiera y de deuda soberana necesitó de ingentes recursos y de atención política, que en último término lastraron la recuperación económica del continente, infligieron duros costes sociales y laborales, detrajeron inversiones en capacidad productiva tecnológica y cambiaron el paisaje político en los países y en el Parlamento Europeo. Se hizo más difícil el lento camino hacia la construcción de consensos europeos.

2008 supuso el inicio del cuestionamiento del liderazgo euroatlántico de gobernanza global. Los grandes países emergentes reclaman más poder para decidir las reglas de juego internacionales. Aún no son capaces de articular una alternativa a las reglas existentes, no son capaces de encontrar puntos de encuentro entre ellos, como en la OMC, donde sus intereses divergen significativamente, excepto para cuestionar que sea Occidente quien lleve la voz cantante. Ahí ya se han fraguado una serie de asociaciones de conveniencia —que no alianzas estratégicas— que pedirán paso y espacios de poder.

Visto con ojos de hoy, 2008 nos recuerda dolorosamente la incapacidad o el abandono de Occidente de contribuir a una solución al conflicto entre Israel y Palestina.

En ese 2008, inicio del siglo xxi, las cartas con las que Europa jugaba ya marcaban un camino: la economía y el comercio global de los que Europa se beneficiaba dada su integración con la economía mundial, no tenían reglas de juego a la altura de la creciente interdependencia, y construir esa gobernanza iba a requerir alianzas de geometría variable que englobasen también —en especial— a países en desarrollo. La fragmentación de los mercados europeos y unas políticas bisoñas en materia de inversión en capacidad productiva, sobre todo en el sector tecnológico, lastraban la competitividad europea. La reaparición de la competencia entre grandes potencias, la fragmentación del orden mundial y la importancia de recursos naturales extremadamente concentrados en algunas geografías alumbraban ya a finales de este 2008 la nueva era de la geopolítica en la que la cooperación dejaba paso a la competencia.

En un diálogo en la televisión de Luxemburgo entre el expresidente de la Comisión Europea Jacques Delors y el titular del puesto en 2008, Jean-Claude Juncker, Delors expresó: «La construcción europea siempre se enfrenta a un mismo dilema: ¿más Europa política o más Europa económica? ¿Qué lugar ocupan la competición que estimula, la cooperación que refuerza y la solidaridad que une?».

Hoy sabemos que necesitamos una alquimia particular de estos tres ingredientes en una Europa que solo puede ser más económica si es más política. Y que ambas son cruciales para que Europa pueda enfrentarse a un mundo donde la geopolítica y la economía se cruzan en un híbrido llamado geoeconomía.

7

BIENVENIDOS A LA ERA DE LA GEOECONOMÍA

¡Es la geoeconomía, estúpido! Si James Carville, el famoso consultor político estadounidense, conocido por inventar el eslogan de campaña que dio a Bill Clinton la presidencia en 1992, tuviese que aconsejar al candidato demócrata a las presidenciales de 2028, este sería el lema. Porque hoy la economía se ha convertido en arma de guerra. El poder económico se despliega para lograr objetivos estratégicos y la competición en forma de «el ganador se lo lleva todo». Asistimos a la weaponización de la economía y del comercio.

Los liberales siempre han creído que el comercio maximiza el bienestar y promueve la cooperación. El doux commerce de Montesquieu. Desde esta óptica liberal, la humanidad decide aumentar la producción y comerciar, lo cual fomenta la paz y ayuda a la expansión de la democracia. Es decir, el comercio es un juego de suma positiva que puede generar beneficios para todos sus participantes.

Los realistas o mercantilistas, en cambio, consideran que la economía es secundaria con respecto a la política. Es uno de tantos instrumentos en manos de un Estado. Que las relaciones comerciales y la cooperación en este campo son temporales, que son acuerdos oportunistas que se pueden romper, aunque estén enmarcados en tratados o mecanismos de gobernanza. Y que la expansión del comercio y la distribución de sus beneficios siempre aumentan los riesgos de conflicto.

Ambos bandos han ido alternándose en la historia, pero desde el fin de la Guerra Fría parecía que los liberales iban a ganar definitivamente esta batalla. La Unión Europea se sentía extremadamente cómoda en este mundo ya que ella misma era el mejor ejemplo de paz a través de la gestión de la interdependencia, de integración técnica y económica gradual que generaba una solidaridad de hecho entre sus miembros. Sería la economía la que en último término conseguiría impulsar una mayor integración política.

Desde 2008 y sobre todo con la creciente competencia entre grandes potencias, con Estados Unidos y China a la cabeza, el auge de enfoques nacionalistas y la crisis del liberalismo multilateral han propulsado a los mercantilistas y han devuelto la preeminencia a la geoeconomía. Su líder es Donald Trump con America First. Asistimos a la derrota, probablemente temporal, de los liberales.

El 2 de abril de 2025, el «Día de la Liberación» según el presidente Trump, Estados Unidos dejaba atrás setenta y ocho años de reducción de aranceles al comercio internacional. Con una firma renunciaba a respetar los principios del comercio internacional que él mismo había propuesto. Como buen mercantilista, se saltaba los acuerdos internacionales que había firmado invocando una situación de «emergencia nacional». Disparaba a bocajarro con armamento viejo, con aranceles.

¡Qué contraste con otro 2 de abril, el del 1917, fecha en la que el Congreso norteamericano votó a favor de participar en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados! O con el 2 de abril de 1948, fecha del inicio del Plan Marshall, la iniciativa estadounidense para ayudar a una Europa Occidental devastada por la Segunda Guerra Mundial.

El de 2025 fue el 2 de abril de la ignominia. Aranceles más altos a muchos de los países más pobres del mundo, como Lesoto o Mali, violando el trato más favorable a los países más pobres. Sin

aranceles para los violadores de la legalidad internacional, como Rusia, Bielorrusia o Corea del Norte. Y sobre todo ensañamiento y discriminación con y entre aliados como la Unión Europea, Japón, Corea, Canadá o México.

Si el 1 de abril las mercancías importadas en Estados Unidos pagaban alrededor de un 2,5 % de media, tras las medidas anunciadas con gran pompa en el jardín de rosas de la Casa Blanca la media de los aranceles se situaba en alrededor del 20 %. Según Trump:

Durante décadas Estados Unidos ha sido saqueado, despojado, atracado, violado por naciones vecinas o lejanas, por amigos y por enemigos... Los trabajadores estadounidenses han visto con angustia cómo líderes extranjeros nos robaban nuestros empleos, cómo estafadores extranjeros saqueaban nuestras fábricas, cómo carroñeros extranjeros nos robaban el sueño americano. El Día de la Liberación será para siempre recordado como el día en que renació la industria americana, recuperamos nuestro destino y comenzamos a volver a enriquecer a Estados Unidos.

De inmediato recordé las palabras usadas por el líder libio Muamar Gadafi en la cumbre del G8 en julio de 2009 en L'Aquila, invitado por Silvio Berlusconi, hito en el acercamiento de Libia a Occidente tras años de aislamiento. El tercer día de la cumbre, en un desayuno de una hora de duración de miembros del G8 con líderes africanos invitados para discutir sobre seguridad alimentaria, un Berlusconi obsequioso pidió a Gadafi abrir la reunión con unas breves palabras. La intervención duró cuarenta minutos y comenzó con un alegato del líder libio contra Occidente:

En el principio, África era un paraíso, pero luego llegaron los colonizadores occidentales y saquearon nuestros pueblos, nos despojaron de nuestras riquezas, nos atracaron, violaron a nuestras mujeres y quemaron nuestros bosques (...) Pero ahora África se levanta orgullosa y unida (…) y resistirá acciones hostiles de naciones como Suiza, que debería ser borrada del mapa.

Las mismas palabras. La misma retórica.

Apenas unos meses antes Suiza había arrestado al hijo del líder libio Hannibal Gadafi y a su nuera acusados de agresión por sus empleadas, una tunecina y una marroquí, durante su estancia en un hotel de Ginebra. Los líderes africanos, habituados a estos exabruptos de Gadafi, pero conscientes de que ya no habría tiempo para discutir, ponían caras de circunstancias. Angela Merkel, visiblemente molesta, miraba a Sarkozy, quien se agitaba en su silla, se levantó de la mesa y se marchó a una esquina de la sala a servirse un café. No había lugar para reír las gracias. Mientras Sarkozy y Berlusconi llevaban la voz cantante en la rehabilitación del líder libio con ampulosas visitas de Estado, uno por intereses económicos ligados a la financiación de su campaña electoral, el otro por razones energéticas y para controlar la llegada de migrantes a Italia, Merkel siempre se mostró cauta con respecto a Gadafi, limitándose a reunirse con el líder en eventos internacionales. Una vez más, Europa dividida.

Pero volvamos a 2025. ¿Qué es un arancel? Para el presidente Trump es un arma de guerra, una penalización que los países terceros tienen que pagar para acceder al mercado estadounidense. Con un 20% Estados Unidos iba a recaudar mucho más y podría así reducir el ingente déficit fiscal; el arancel llevaría a una disminución de importaciones, con lo cual se reduciría el déficit comercial; además, esta penalización obligaría a quien quisiera acceder al mercado estadounidense a tener que producir en el país,

contribuyendo así a la reindustrialización. Más aún, los aranceles podían utilizarse para presionar a países terceros y obtener ventajas no comerciales: que Europa relajase la regulación que aplica al sector tecnológico; que Brasil indultase al expresidente Bolsonaro condenado por la justicia brasileña por golpista; hacerse con Groenlandia o con el canal de Panamá. Un negocio redondo.

En realidad, el arancel es un impuesto que «alguien» acaba pagando; en este caso, alrededor de un 45 % lo paga el consumidor estadounidense, otro 45 % las empresas estadounidenses que importan los productos en el país, mientras que los exportadores de países terceros pagan únicamente alrededor de un 10 %. ¡Un mal negocio!

Lo cierto es que el bombástico anuncio de Trump tenía una realidad más matizada. Dejaba fuera de la aplicación de las medidas productos como el acero y el aluminio, la energía, semiconductores, productos farmacéuticos y una larga lista más que iban a recibir un tratamiento específico. Tras la caída de los mercados provocada por el anuncio de las medidas, Trump se vio obligado a imponer una pausa de noventa días para dar espacio a la negociación de acuerdos bilaterales en los cuales se modularan las tarifas en interés de Estados Unidos. Entretanto, fue añadiendo excepciones para productos que estaban causando inflación en Estados Unidos como café, zumo de naranja o carne o para excluir productos importantes para el sector empresarial estadounidense, que se lanzó en tromba a pedir excepciones. Y con las excepciones, el nivel de protección arancelario de Estados Unidos estaría entre el 8 y el 11 %. No olvidemos que el 50 % de las importaciones estadounidenses son componentes o insumos usados para fabricar bienes finales. ¡Los aranceles son como dispararse en el propio pie!

En una infame reunión a finales de julio del 2025 en Turnberry, un campo de golf propiedad de Donald Trump en Escocia, la presidenta de la Comisión Europea anunció un acuerdo sobre aranceles con Trump, malo en lo económico, dada la desigualdad de las

condiciones. Europa eliminaría sus aranceles para Estados Unidos y se comprometía a comprar energía y armamento estadounidense, mientras que este mantenía un arancel del 15 % sobre las importaciones europeas. No podía quitarme de la cabeza tantos momentos anteriores de «guerra comercial» entre Europa y Estados Unidos en los que nunca habíamos cedido a las presiones del otro lado del Atlántico en temas tan complejos como la batalla entre Airbus-Boeing, el acero, la carne hormonada o los transgénicos. Siempre habíamos defendido los intereses europeos, obligando a los norteamericanos a negociar amenazándoles con sanciones o imponiendo sanciones comerciales cuando fue necesario. Pero en 2025 nos arrodillamos. Francamente, las consecuencias económicas eran asumibles por Europa. Lo doloroso fue la derrota geopolítica europea. Una foto de la presidenta de la Comisión Europea y del comisario de Comercio con los pulgares en alto sonrientes junto a Trump legitimaba una visión de las relaciones internacionales basadas en la ley del más fuerte. En un mundo de depredadores, si uno es débil, no le queda más remedio que aceptar lo que le impongan. Pero la Unión Europea no es débil. La dura lección para los europeos es que no podrán ser una potencia comercial sin una Europa geopolítica, sin la capacidad para defenderse. La gran diferencia con momentos pasados reside en la guerra rusa contra Ucrania, y la incapacidad europea para defenderse sin Estados Unidos. Si no quiere ser vasalla, a Europa solo le queda una salida: avanzar cuanto antes hacia su autonomía estratégica construyendo la Europa de la defensa.

Qué diferente fue la negociación con China. A cada medida de Estados Unidos, China respondía con otra equivalente. Cuando Trump quiso adoptar medidas más restrictivas sobre el acceso de China a tecnología estadounidense, China hizo lo propio amenazando con limitar el acceso de Estados Unidos a tierras raras, esos minerales esenciales para la fabricación tecnológica. Y como en cada conflicto comercial entre ambos países, China dejó de comprar soja estadounidense, asestando un duro golpe a los agricultores del Medio Oeste, que exportan alrededor de la mitad de su producción

al gigante asiático. El resultado fue un armisticio en el que ambos aceptaron suspender las medidas contra el otro temporalmente. Y a Trump no le quedó otro remedio que anunciar un paquete de medidas de apoyo a los agricultores que habían perdido su acceso al mercado chino. Más gasto público. ¡Más déficit!

Hubo quien definió esta táctica trumpiana como «escalar para desescalar». Creo que sería más ajustado decir que ambos se toparon con la dura realidad de la interdependencia, de la cual solo se puede salir construyendo «autonomía estratégica» que, en ambos casos, tierras raras y semiconductores, llevará su tiempo.

El 7 de agosto de 2025 el representante estadounidense de Comercio, Jamieson Greer, anunciaba a bombo y platillo en un artículo de opinión en The New York Times que Estados Unidos había cambiado el orden comercial mundial. Que con su habilidad, en apenas 130 días Trump había conseguido cambiar el sistema construido en ochenta años. Pero ¿ha cambiado realmente el orden comercial global?

Merece la pena recordar lo que decía el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en una alocución sobre la democracia en 1940: «Pueden hablar de un nuevo orden en el mundo, pero lo que tienen en mente no es más que un resurgimiento de la más antigua y peor tiranía. En ello no hay nada nuevo, y no es orden».

Ciertamente, con sus políticas Trump ha sacado a Estados Unidos de las reglas multilaterales de comercio. Ya no las respeta y esto no es algo menor porque representa el 13 % del comercio mundial y por el efecto emulación que su desobediencia puede causar en otros. Pero también es cierto que el resto de los países no parece querer entrar en una carrera proteccionista global. Si esto sigue así, con una protección estadounidense real de alrededor del 10 %, el sistema comercial internacional se ajustará a un «nuevo normal» en Estados Unidos, como si se tratara de un aumento del coste laboral o del precio del petróleo, es decir, un nuevo coste que asumir y es

asumible. Por el contrario, en el flanco interno, y a pesar de las promesas de bajar los precios con las que Trump hizo campaña, los consumidores estadounidenses verán aumentar la inflación. Ya lo han visto. Por otro lado, es poco probable que un arancel proteccionista de esta magnitud sea capaz de atraer grandes inversiones a Estados Unidos, sobre todo dado lo errático de las políticas domésticas. Una volatilidad que aumentó tras la decisión del Tribunal Supremo de declarar ilegales los aranceles impuestos por la administración estadounidense por razones de emergencia nacional. La administración lo hizo para no tener que pedir permiso al Congreso, usando una vieja legislación de 1977 que autoriza al presidente a regular el comercio internacional y bloquear transacciones tras declarar una emergencia nacional relacionada con una amenaza externa y que solo había sido invocada una vez, en 1979, cuando Estados Unidos bloqueó los activos iraníes tras la crisis de los rehenes. Tras la anulación, el presidente volvió a la carga usando otra legislación nacional más limitada, para mostrar que no daba su brazo a torcer. El resultado ha sido un aumento de la inseguridad jurídica que a la postre limitará la actividad económica e inversora en el país.

Ahora bien, la clave del futuro del comercio internacional no está en la actitud de Estados Unidos, que representa el 13 % de las importaciones del mundo, sino en lo que haga el 87 % restante, entre ellos la Unión Europea y China, a quienes corresponderá garantizar el nuevo equilibrio comercial global. ¿Serán capaces de hacerlo? Por ahora, la Unión Europea avanza en la negociación de acuerdos bilaterales con regiones como Mercosur, o países como India, Australia, Emiratos o Indonesia, mostrando así la vía del acuerdo para la reducción de obstáculos comerciales, más que la imposición de condiciones asimétricas de comercio. Por su parte, China se debate entre una retórica de apoyo a las reglas del comercio internacional mientras exporta sus sobrecapacidades industriales. Pero en lo que todos los países están hoy de acuerdo es en entender que el comercio es eficiencia, pero también es seguridad. Y por eso hoy se impone la geoeconomía, que significa

seguridad nacional. Y es que la salud de la economía, el acceso a tecnología y a recursos o la resiliencia de las cadenas de suministro son tan vitales para la defensa de un país como su ejército.

Un ejemplo que ilustra bien la vuelta de la geoeconomía es el del vehículo eléctrico europeo en su relación con China. Durante 2024, junto con un grupo de colegas del think tank Instituto Jacques Delors y a petición de los fabricantes de coches europeos, trabajamos en la elaboración de una estrategia para la industria automotriz europea, que se encuentra en una encrucijada. El sector afronta tres desafíos simultáneos: descarbonizar para combatir el cambio climático, mantener la competitividad global en un mercado muy agresivo, donde China, que perdió la carrera por el vehículo con motor de combustión, ha decidido apostarlo todo al eléctrico, y salvaguardar la seguridad económica en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas. La pregunta era cómo abordar de manera integral un trilema de objetivos contrapuestos: descarbonización, competitividad y seguridad económica. Fueron más de setenta horas de reuniones, visitas y escucha que nos permitieron penetrar en el corazón de una economía europea que emplea directamente a 1,4 millones de personas y genera trece millones de empleos indirectos, con implicaciones que trascienden a la propia industria en términos de I+D o de desarrollo regional. La respuesta insistía en la necesidad de abordar la cuestión de forma integral, con políticas comerciales e industriales, europeas e internacionales más coordinadas. Por un lado, a pesar de la importancia de la transición al vehículo eléctrico para reducir emisiones y cumplir con el objetivo de neutralidad climática europea para 2050, los consumidores tienen dudas: los coches eléctricos son más caros y la infraestructura de recarga aún es deficiente. Por otro lado, la competitividad requiere abordar costes de producción del vehículo eléctrico, carencias en la innovación y cumplimiento del abultado marco reglamentario europeo. Y, además, las tensiones geopolíticas suponen una amenaza creciente: los aranceles estadounidenses gravan las exportaciones europeas y generan desviaciones de comercio de China hacia el continente, a lo cual se añaden las vulnerabilidades de

la dependencia de China para materias primas críticas y baterías, amén de la competencia desleal creada por las generosas subvenciones estatales. A partir de 2019, a medida que tomó forma la agenda verde europea, la eficiencia económica tuvo que ajustarse a un nuevo imperativo de sostenibilidad. Ahora, eficiencia y sostenibilidad han de equilibrarse con seguridad económica. No se puede elegir.

En nombre de una mayor seguridad nacional crecen las restricciones a las inversiones y a las exportaciones, sobre todo en el sector tecnológico o en el de las materias primas, especialmente entre China y Estados Unidos. Se multiplican los controles sobre bienes de doble uso. Se busca repatriar cadenas de valor a través de incentivos fiscales o de aranceles. Se imponen sanciones sobre transacciones financieras, sobre sectores económicos como la energía o sobre individuos, sobre todo en el caso de Rusia tras la invasión de Ucrania.

El consejero de seguridad nacional de Joe Biden llamó a esta estrategia «valla alta y campo pequeño». Se buscaba definir una serie de sectores, limitados, pero de gran interés estratégico, que quedarían fuera del juego de las ventajas comparativas y de las reglas de comercio internacional. Así, Estados Unidos levantó una cerca alrededor de la tecnología y los chips más sofisticados, buscando ralentizar el acceso de China a estos insumos extremadamente importantes para la industria de la defensa. Por supuesto, China no tardó en replicarlo con restricciones similares a Estados Unidos.

La seguridad nacional ha sido el argumento utilizado por el presidente Trump para aumentar exponencialmente medidas comerciales unilaterales, a veces escudándose en la necesidad de protegerse de prácticas predatorias, otras veces del tráfico de fentanilo, o de la llegada de migrantes. Otras simplemente para proteger a sectores económicos como el del acero, el aluminio, las

lavadoras, los muebles y un largo etcétera, deslizándose hacia el proteccionismo más clásico.

Tras nueve meses de frenética actividad, en noviembre de 2025 la administración Trump publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, veintisiete páginas donde se describe el plan para «fortalecer el poder y preeminencia estadounidenses y hacer que el país sea aún más grande de lo que jamás ha sido». Declara la seguridad económica como «esencial para la seguridad nacional» y le dedica un epígrafe. Los objetivos serán acabar con los desequilibrios comerciales, asegurar acceso a materias críticas, repatriar producción industrial a su territorio, impulsar la industria de la defensa, restaurar el dominio de la energía fósil y nuclear y mantener la primacía de las finanzas globales.

Si el arma económica del año 2025 fue el «arancel», la Estrategia de Seguridad Nacional nos ofrece claves sobre los nuevos espacios de la pugna económica internacional, los nuevos arietes para la consecución de objetivos geopolíticos y así prevalecer en una rivalidad internacional cada vez más aguda.

En las páginas siguientes voy a examinar tres de estos nuevos espacios en los que ya se están desplegando los ejércitos de la geoeconomía: el aéreo, con la ofensiva por la ocupación del espacio; el submarino, con la carrera por explotar los fondos marinos, y el ciberespacio de las finanzas globales, donde convergen tecnología y dinero. Ya no hablamos solo de nodos comerciales, sino de espacios de poder donde confluyen comercio, tecnología y soberanía. En estos espacios la lógica de mercado deja paso a la lógica de la seguridad nacional. Y es aquí donde se extiende también la pugna entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. Y es también aquí donde el Estados Unidos de Donald Trump deja a Europa sola y donde esta debe decidir cómo construir su autonomía estratégica.

Comencemos por el espacio.

En 2008, y tras tres intentos fallidos, SpaceX hizo historia al convertirse en la primera empresa privada en poner un cohete —el Falcon— en órbita terrestre con éxito. Elon Musk ha explicado en numerosas ocasiones que, de haber fallado la empresa, se habría quedado sin fondos para continuar. Pero este golpe de suerte supuso un contrato con la NASA de 1.600 millones de dólares. Así comenzó la «Carrera Espacial 2.0».

La carrera original, entre 1957 y 1975, fue parte de la pugna ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y la dirigieron los Estados. La segunda carrera tiene a la empresa privada como participante principal y los objetivos comerciales como su gran motor. Ya no es solo un espacio de exploración científica, hoy es también un mercado para el turismo, la minería de asteroides y las megaconstelaciones como Starlink. Y más aún, quizás en un futuro no muy lejano el lugar donde proliferarán los centros de datos para la IA. El CEO de Google, Sundar Pichai, ya ha anunciado el «Proyecto Suncatcher», que en español vendría a ser algo así como «atrapasol», consistente en poner en órbita centros de datos impulsados por energía solar para procesar modelos de IA como Gemini. Aprovechando la energía solar constante y el enfriamiento natural del espacio, se reduciría el impacto ambiental y los costes energéticos en la Tierra. El ex-CEO de Google, Eric Schmidt, ha adquirido la empresa de cohetes Relativity Space con el objetivo de construir infraestructura para apoyar estas iniciativas.

Pero volvamos al presente: el campo de batalla geopolítico es ya hoy la órbita terrestre baja («LEO») entre 160 y dos mil kilómetros sobre la superficie terrestre, espacio muy preciado tanto en el ámbito comercial como en el militar por su proximidad y menor latencia en las comunicaciones y su precisión sobre posicionamiento y labores de inteligencia. Quien domine la infraestructura LEO controla el flujo de información mundial y la capacidad de conectar zonas remotas o en conflicto. LEO es ahora también un dominio operacional militar. Las potencias buscan capacidades para rastrear misiles y vigilar movimientos enemigos en tiempo real con alta resolución. Dado que

el número de órbitas no es infinito, existe una carrera por «llegar el primero» y desplegar miles de satélites para bloquear o dificultar el acceso a competidores.

Estados Unidos, líder actual, ha lanzado una carrera a la ocupación de LEO, sobre todo usando empresas privadas. La principal es SpaceX, del magnate Elon Musk, con más de seis mil satélites activos. Pero están también Blue Origin, de Jeff Bezos, o el Proyecto Kuiper, de Amazon.

Mientras, el gran desafiante, China, acelera el despliegue de miles de satélites —se estima que alrededor de trece mil— para sus megaconstelaciones.

¿Y Europa? Ha pasado de ser observador a competir también en este espacio, aunque lejos tras los dos favoritos. La fusión de la francesa Eutelsat con la británica One Web ha creado el brazo comercial europeo más fuerte en LEO. Operan más de seiscientos satélites que ya ofrecen internet de alta velocidad y baja latencia. Pero la gran apuesta europea es IRIS (infraestructura de resiliencia, interconectividad y seguridad por satélite), el tercer gran programa espacial de la Unión tras el sistema de navegación Galileo y el programa de observación terrestre Copernicus. Una especie de Starlink europeo que operará en la LEO pero también en órbita terrestre media para optimizar cobertura y latencia y que utilizará tecnologías disruptivas para garantizar comunicaciones ultraseguras. Su principal objetivo es que Europa no dependa de redes extranjeras para servicios críticos de defensa o infraestructuras estratégicas.

Se puede decir que IRIS nació en otoño de 2022, cuando Elon Musk decidió apagar el Starlink en Ucrania. Tras la invasión rusa, las infraestructuras de telecomunicaciones de Ucrania quedaron devastadas. Starlink aceptó desplegar terminales y ofrecer conexión de alta velocidad que permitió al ejército de Ucrania mantener el mando, usar drones y coordinar ataques de artillería en tiempo real. El momento de mayor tensión se generó cuando Elon Musk se negó

a aceptar la petición de Zelenski de activar Starlink sobre Crimea durante un ataque con drones a la flota rusa, con el argumento de que no quería provocar una escalada nuclear por parte de Rusia. A partir de ahí comenzó a limitar el uso de Starlink para operaciones ofensivas de largo alcance sobre territorio ruso.

Recuerdo una conversación con el consejero de Seguridad Nacional del presidente Biden, Jake Sullivan, apenas unos meses antes, en Washington. A mi perplejidad por el hecho de que una infraestructura crítica pudiera estar en manos privadas con intereses propios, ajena a cualquier control democrático, su respuesta lacónica fue: «No decide Elon Musk; decide el Departamento de Defensa». ¡Pero es que en marzo de 2025 Elon Musk era el Departamento de Defensa! Un solo empresario, desde California, tuvo capacidad de frenar una operación militar de un país soberano aliado de Europa. Esto encendió las alarmas en Bruselas: ¿y si mañana Musk o cualquier otra empresa decide apagar servicios vitales para la seguridad europea? La autonomía estratégica también pasa por el ciberespacio y el espacio exterior.

La experiencia supuso un despertar europeo ante la vulnerabilidad de poner tanto poder en manos de una empresa privada extranjera. ¿Dónde quedaba la tan cacareada autonomía estratégica europea? La guerra en Ucrania también demostró que el acceso a internet satelital de baja latencia es un activo militar y de seguridad nacional esencial, y no solo comercial. Además, quedaba patente la necesidad de una supervisión democrática de la infraestructura de comunicaciones crítica, más allá de Silicon Valley. Se espera que los primeros servicios de IRIS comiencen a operar entre 2027 y 2030.

Entretanto, los riesgos crecen. China se ha quejado ante la ONU de la creciente saturación del espacio por parte de empresas estadounidenses, mientras la comunidad internacional debate sobre qué hacer con la basura espacial que amenaza con inutilizar la órbita LEO para todos los actores si no se controla. En enero de 2026, la Estación Espacial Internacional tuvo que realizar una maniobra de

emergencia para evitar un fragmento de basura de un satélite inactivo. Este incidente obligó a los astronautas a refugiarse en sus naves de escape durante cuarenta y cinco minutos, con riesgo para su integridad. La Agencia Espacial Europea está poniendo en marcha misiones de limpieza como la ClearSpace 1, para capturar escombros de gran tamaño. Pero si los países implicados no impulsan una cooperación internacional más estrecha para tratar la basura espacial, la amenaza es el llamado síndrome de Kessler, una reacción en cadena donde las colisiones generan más basura que, a su vez, causa más colisiones. ¿Y si una de estas colisiones nos dejase sin conexión a internet, sin información meteorológica o sin GPS? En el espacio, ¿quién es responsable de qué?

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas de 1967, en plena Guerra Fría, establece que el espacio es «patrimonio de toda la humanidad y debe utilizarse para fines pacíficos». Ningún país puede reclamar soberanía sobre el espacio, su uso es pacífico y desmilitarizado, todos los Estados disfrutan de libertad de explorar y los gobiernos son responsables de las actividades nacionales, ya sean de organismos gubernamentales o de entidades privadas. Pero este tratado, diseñado para Estados y no para empresas privadas, que son las que ahora dominan la órbita baja, se muestra incapaz de responder al aumento de basura espacial, a la saturación por megaconstelaciones, a la interferencia astronómica, a la proliferación de armas convencionales y a la responsabilidad y supervisión de los actores comerciales.

En 2020 y fuera de la ONU, un grupo de países amigos liderados por Estados Unidos concluyó los Acuerdos Artemis, una serie de principios para guiar la exploración civil del espacio profundo —la Luna, Marte y asteroides—. Bajo la administración Trump, Estados Unidos, a pesar de permanecer dentro de estos acuerdos, los está interpretando de manera extensiva para permitir la militarización defensiva —con el despliegue de reactores nucleares en la superficie de la Luna y en órbita para finales de esta década—, la extracción y uso de recursos como agua o minerales lunares, pretendiendo que

esto no es «apropiación»; y la explotación comercial: la misión para llegar a la Luna ya no será de la NASA sino de Elon Musk.

China, miembro del Tratado del Espacio, critica a Estados Unidos por su política de militarización del espacio, pero mientras tanto lidera una iniciativa alternativa a Artemis, la Estación Internacional de Investigación Lunar, un proyecto con Rusia y otros países como Pakistán y Egipto para investigaciones científicas, pero con el objetivo de establecer una infraestructura que permita una presencia humana sostenida en la Luna.

Por su parte, Europa sigue una «tercera vía». La Agencia Espacial Europea es socio tecnológico crítico de la NASA, pero siempre poniendo énfasis en la legalidad internacional y defendiendo que cualquier norma sobre minería lunar sea establecida en la ONU. En 2026, Europa ha acelerado el desarrollo del cohete Ariane 6 y proyectos de aterrizadores propios para asegurarse poder llegar a la Luna de forma independiente si la postura de Estados Unidos cambiara bruscamente.

Y mientras el espacio se puebla de megaconstelaciones y el hombre se prepara para establecer una presencia permanente en la Luna, la rivalidad geopolítica se extiende a las profundidades marinas.

«¡Ah! ¡Viva usted, señor, en el seno de los mares, viva en ellos! Solamente ahí está la independencia. ¡Ahí no reconozco dueño ni señor! ¡Ahí yo soy libre!», decía el capitán Nemo en la famosa novela de Julio Verne Veinte mil leguas de viaje submarino.

El fondo marino es oscuro, profundo, frío, desconocido. Pero es también una de las arterias de la economía moderna. El 99 % de los datos circulan a través de cables sumergidos a gran profundidad; lo hacen también alrededor de diez mil millones de dólares en transacciones financieras; por estos fondos circulan también los cables y tuberías por los que nos llega electricidad, gas, petróleo y pronto hidrógeno. La mayor concentración de estos cables se sitúa

en el mar del Norte y el mar Báltico, una red tan tupida como difícil de proteger. Sobre todo de ataques rusos, que en estas últimas décadas han construido capacidades en forma de submarinos, minisubmarinos y drones submarinos para atacar desde el lecho marino infraestructuras críticas europeas.

En diciembre de 2024, el petrolero ruso Eagle S, que transportaba petróleo ruso y que se estima formaba parte de la flota en la sombra de Rusia para evadir sanciones comerciales, fue investigado tras dañar cables submarinos que conectan Finlandia con Estonia al arrastrar su ancla por el fondo marino, en un episodio recurrente de «guerra híbrida». Apenas unas semanas antes, un carguero chino, el Yi Peng 3, que transportaba fertilizante ruso, fue acusado de cortar el cable entre Lituania y Suecia tras echar el ancla y arrastrarlo también por el lecho marino. No se encontraron pruebas que lo inculparan directamente. Y es que esta estrategia de sabotaje es efectiva, porque se puede negar y es difícil probar su autoría. La OTAN ha decidido aumentar la vigilancia con una nueva misión llamada «Centinela del Báltico».

Pero la gran batalla por ser dueños y señores de los fondos marinos se libra en el Pacífico sobre espacios que la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos definen como «patrimonio común de la humanidad»; ninguna nación puede reclamar su soberanía sobre estos espacios, y el objeto de deseo no es otro que minerales como cobre, cobalto, níquel o tierras raras.

La Zona Clarión-Clipperton (CCZ) es una vasta área del fondo marino en el océano Pacífico central, entre la isla de Clarión, perteneciente a México, y al sur la isla de Clipperton, perteneciente a Francia. Una zona que abarca un espacio mayor que Australia. Allí, a cinco mil metros bajo la superficie, se encuentran ingentes reservas de nódulos polimetálicos, acumulaciones de minerales, del tamaño de una pelota de tenis, ricos en cobalto, níquel y manganeso, lo que la convierte en un punto de interés clave para la futura minería de

aguas profundas. Se estima que hay más manganeso, cobalto y níquel en la CCZ que en todos los depósitos terrestres identificados. Pero la CCZ es también uno de los lugares de mayor interés para científicos y ambientalistas dada la diversidad de su fauna marina, mucho más rica que en otras zonas abisales.

La totalidad de la CCZ está más allá de la jurisdicción nacional, por lo que su exploración y futura explotación están gobernadas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Esta autoridad, con sede en Jamaica, ha autorizado unos veinte contratos de exploración en la CCZ, pero ninguno sobre su explotación, que está pendiente de la adopción de un Código Minero que se negocia desde 2014 y sobre el que los países miembros mantienen importantes diferencias en cuestiones como la protección medioambiental, las condiciones sobre reparto de beneficios o sobre medidas para garantizar su cumplimiento.

China posee la mayor parte de las licencias de exploración de esta zona y de otros fondos marinos como la zona del Pacífico occidental, entre las islas Marianas del Norte y la isla Wake, o en el océano Índico. Rusia también está muy implicada en esta exploración, sobre todo en la dorsal mesoatlántica, así como en el Ártico y a lo largo de la Ruta del Mar del Norte. Pekín extiende silenciosamente su control sobre estos espacios a través del mapeo detallado de los fondos marinos con robots para aguas profundas, satélites auxiliares y plataformas mineras operadas en remoto. Y entretanto, dificulta el avance de las negociaciones sobre explotación de los fondos, pues obligaría a una mayor transparencia sobre sus actividades. A ello se añade una clara agresividad en la interpretación de las reglas del derecho del mar, que a menudo chocan con los intereses de países como Filipinas, Japón o Vietnam.

En 2025, China firmó acuerdos de colaboración sobre investigación y exploración de fondos marinos con tres países del Pacífico: las islas Cook, Tonga y Kiribati. El acuerdo con las islas Cook causó consternación en Nueva Zelanda, que acusó al país de firmar con

China sin consulta previa. Y es que las islas Cook son un territorio autónomo en libre asociación con Nueva Zelanda, cuyo pasaporte ostentan sus ciudadanos, y que es quien provee de apoyo presupuestario y garantiza la defensa de su territorio. El primer ministro de las islas Cook acusó a Nueva Zelanda de injerencia, y esta decidió suspender su ayuda al país. En suma, el acuerdo con China destapó la caja de los truenos de la geopolítica, más aún si se tiene en cuenta que por la zona pasan los cables submarinos que conectan Nueva Zelanda y Australia con Estados Unidos. China aprovecha para mostrar músculo en el Pacífico.

Todo esto ha alarmado a Estados Unidos, que no es parte de la Convención sobre el Derecho del Mar y únicamente posee estatus de observador, sin capacidad de decisión en la Autoridad, y que ve cómo China usa su membresía para influir significativamente, pues es un importante financiador del organismo. Su respuesta no se ha hecho esperar. Una orden ejecutiva del presidente Trump de abril de 2025, que pasó bastante desapercibida, abre la exploración y la explotación de esos fondos más allá de su jurisdicción nacional, saltándose las reglas internacionales. Considera que mantener el liderazgo en ciencia y tecnología relativa a fondos marinos y a sus recursos minerales es un asunto clave de seguridad nacional. Varias empresas mineras se han lanzado a conseguir las oportunas licencias, mientras grupos medioambientales, así como China y la Unión Europea, se han apresurado a criticar la medida, a la que acusan de generar una espiral geopolítica descendente. La directora ejecutiva de la Autoridad, al referirse a la orden ejecutiva, declaró: «Cualquier medida unilateral no solo supone un serio riesgo para la convención y décadas de cooperación internacional; también constituye un peligroso precedente capaz de desestabilizar el sistema de gobernanza de los océanos».

Este asunto fue objeto de ásperas discusiones en la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Océanos de Niza en junio de 2025, copatrocinada por Francia y Costa Rica. La conferencia buscaba que un gran número de países ratificasen el «Acuerdo Internacional

sobre la Biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional», firmado en 2003 y que busca proteger la vida marina en alta mar y también en los fondos marinos, cubriendo cuestiones como áreas marinas protegidas o evaluaciones medioambientales e incorporando el principio de precaución. En la práctica, este acuerdo actúa como freno indirecto y herramienta de presión contra la explotación comercial de los fondos marinos. El acuerdo entró en vigor en enero de 2026, China lo ha ratificado, como también lo ha hecho la Unión Europea. Estados Unidos, que firmó el acuerdo en 2023, aún no lo ha ratificado. Los copresidentes de la conferencia también buscaron la adopción de una moratoria formal a la minería en fondos marinos. A pesar de que un gran número de países e instituciones financieras expresaron su apoyo a una moratoria formal, no se logró el consenso necesario para incluirla en el texto final. Estados Unidos estuvo representado a bajo nivel por una delegación de dos observadores de nivel técnico que apenas participaron en las discusiones. Por el contrario, China estuvo representada por una amplia delegación, con el vicepresidente Han Zheng a la cabeza. China fue muy crítica con la postura estadounidense, pero no apoyó la adopción de una moratoria, decantándose por buscar finalizar las negociaciones sobre un Código Minero con la Autoridad de Fondos Marinos. Por su parte, el representante presidencial ruso sobre el clima se opuso a una moratoria e insistió en la necesidad de equilibrar conservación de recursos y extracción.

La batalla geopolítica por los fondos marinos repite un patrón conocido: Estados Unidos renuncia a las reglas internacionales que considera ataduras que le impiden luchar con todas las armas posibles contra China (unilateralismo); China y Europa apoyan una gobernanza multilateral, pero difieren en su objetivo: para Europa se trata de definir una protección internacional para lo que considera bienes públicos globales (multilateralismo); China busca convertirse en el actor central de un nuevo orden multilateral usando al máximo su presencia en organismos multilaterales como palanca para elaborar e interpretar las normas internacionales de la manera más favorable posible a sus intereses (nueva hegemonía); Rusia busca

estar dentro del sistema para asegurarse el mínimo posible de limitaciones (spoiler: saboteador).

En los fondos marinos están depositados los cables donde convergen tecnología y dinero: el ciberespacio financiero de la rivalidad geopolítica.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial el dólar destronó a la libra esterlina como moneda global. En los Acuerdos de Bretton Woods de 1944 los aliados establecieron un sistema monetario en el que el dólar sería la moneda de reserva principal, vinculando otras monedas con un tipo de cambio fijo con el dólar, que a su vez era convertible en oro a un precio fijo. Durante la posguerra, con la devastación de Europa, la fortaleza económica de Estados Unidos le permitió consolidar la supremacía del dólar. En 1971 el presidente Nixon rompió el vínculo con el oro, pero el dólar ha mantenido su dominio gracias a varios factores: la estabilidad de la economía y del sistema judicial, mercados financieros profundos y líquidos, la adopción generalizada del dólar en el comercio internacional, sobre todo en materias primas, el inglés como lingua franca y el poderío de las multinacionales estadounidenses. Hemos vivido un largo periodo de King Dollar asentado sobre la estabilidad y la confianza. El presidente francés Valéry Giscard d'Estaing se refería a él como «privilegio exorbitante»: «La emisión de moneda de reserva mundial permite a Estados Unidos financiarse a bajo coste, tener déficits comerciales y presupuestarios sin gran debilidad; es decir, otros países subvencionan su estilo de vida y gastos».

Pero el horizonte futuro está menos claro. A medio plazo el mundo seguirá dolarizado porque no hay alternativa. A largo plazo la preeminencia del dólar se enfrenta a riesgos estructurales y coyunturales que han intensificado el debate sobre la desdolarización en medio de tensiones geopolíticas y económicas.

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el dólar se ha visto lastrado por la percepción de falta de disciplina económica. El

déficit acumulado ha llevado la deuda nacional a niveles récord, la prima de riesgo ha aumentado, con lo cual la financiación de la deuda se ha encarecido, gasto público y endeudamiento han dificultado la tarea de la Reserva Federal de controlar la inflación, y la confianza de los inversores en la estabilidad del dólar se ha visto erosionada por el constante cuestionamiento de la independencia de la Fed. A pesar de las proclamas de Trump sobre el dólar—«somos la moneda de referencia, siempre lo seremos»—, su propia política macroeconómica lo pone en entredicho.

Además, las finanzas internacionales se han convertido también en un nuevo espacio de confrontación geopolítica. Las sanciones sobre Rusia, la decisión de congelar sus reservas en bancos del G7 y la expulsión del país del sistema de mensajería de pagos internacionales SWIFT han llevado a este país, pero también a otros, a plantearse alternativas que garanticen mayor soberanía financiera.

La multiplicación de medidas unilaterales de la administración Trump ha llevado asimismo a muchos bancos centrales a diversificar sus reservas a otras monedas y sobre todo al oro, que ha alcanzado niveles no vistos en veinticinco años. Desde el 2000, el dólar ha perdido trece puntos en las reservas extranjeras globales, pasando del 71 % al 57 %. Pero las alternativas aún quedan lejos: 20 % de las reservas en euros y un pequeño 2 % en renminbi, la moneda china, que es difícil que se convierta en alternativa dada su no convertibilidad. En el caso del euro, para ser más atractivo, la Unión Europea necesitaría integrar sus mercados de capitales europeos y emitir deuda conjunta. La escala y liquidez ayudaría a la internacionalización del euro. He aquí uno de los elementos claves para una autonomía estratégica europea. Cuando nos preguntamos sobre si la Unión tiene armas con las que defenderse, la respuesta es un rotundo sí, hay una y muy potente: mercados de capitales integrados. Y mientras se avanza en este frente, que es eminentemente político, el Banco Central Europeo decidió en febrero de 2026 ampliar de forma estructural y global sus líneas de liquidez en euros haciéndolas accesibles a prácticamente todos los bancos

centrales del mundo siempre que no estén afectados por sanciones, riesgos de blanqueo o financiación del terrorismo. Un paso modesto pero muy importante para reforzar el papel global del euro.

El otro frente donde se perciben claros avances es el de los sistemas de pagos. Los BRICS ya han lanzado el BRICS Pay, un sistema de pagos digitales diseñado para conectar sus bancos sin pasar por el sistema SWIFT, al que consideran bajo control de Occidente, sobre todo después de la expulsión de los bancos rusos del sistema tras la invasión de Ucrania. Pero quizás el más interesante sea el creado por los bancos centrales de China, Emiratos, Hong Kong y Tailandia —el mBridge, que permite liquidar transacciones entre los países participantes en monedas locales sin pasar por el dólar ni su infraestructura financiera—. Esta es la apuesta china. Así quiere, poco a poco, construir un sistema de pagos impenetrable para Occidente y sus sanciones. China no puede crear una alternativa al sistema monetario mundial porque para ello debería aceptar la convertibilidad de su moneda, con lo que ello supondría de libertad de movimiento de capitales, algo inasumible para el país. Pero sí puede, y ya lo está haciendo, crear un sistema de pagos al margen del dólar.

Entretanto, vemos cómo aumenta también el volumen de comercio y de pagos globales en renminbi, operaciones comerciales o financieras que se realizan utilizando la moneda oficial de China, sobre todo en intercambios comerciales entre este país con otros del sur. El RMB se acerca a la posición de cuarta moneda más negociada en mercados de divisas, hoy ocupada por la libra esterlina, tras el dólar, el euro y el yen.

Pero la mayor disrupción del espacio financiero vendrá de la mano de la tecnología. La tecnología de registro distribuido —blockchain — y la tokenización, es decir, convertir los derechos de propiedad de un activo físico o financiero en un token digital dentro de una red de blockchain, ofrecen rapidez, liquidez y seguridad, mientras permiten «desintermediar» a las instituciones financieras tradicionales. Un

grupo de países, como los participantes en mBridge, pueden intercambiar activos tokenizados sin pasar por el sistema internacional de pagos, creando un «muro financiero». Así, la balcanización del sistema financiero internacional está servida. Un país sancionado puede tokenizar sus materias primas y usarlas como medio de pago para importar bienes. En 2024 Rusia aprobó leyes que permiten el uso de activos tokenizados para pagos internacionales. A inicios de 2026 el país ya había consolidado un mercado de activos tokenizados de más de 1.500 millones de dólares mensuales en emisiones de bancos como Sberbank. Tras años de sanciones, se estima que alrededor del 80 % de los ingresos petroleros de Venezuela se mueven a través de estos activos digitales.

La respuesta estratégica estadounidense se centra en impulsar los stablecoins, activos digitales generalmente emitidos por empresas privadas cuyo valor está «anclado» a una moneda, en este caso el dólar, o a una materia prima. Con la Ley Genius de 2025, Estados Unidos se garantiza un triple beneficio: en primer lugar, mantiene el dominio global del dólar. Hoy, alrededor del 98 % de los stablecoins están anclados en el dólar y los países que lideran su adopción en el mundo, India, Indonesia y Nigeria, buscan en los stablecoins soluciones a la inflación, a la depreciación de la moneda local o a los altos costes de las remesas. En segundo lugar, financia la deuda federal. Los stablecoins tienen que estar respaldados por reservas de activos financieros seguros, principalmente bonos del Tesoro. En tercer lugar, posiciona a Estados Unidos como centro de innovación financiera y de regulación.

La Unión Europea fue la primera en adoptar una legislación sobre stablecoins con su regulación MiCA, pero su enfoque es menos entusiasta. Mientras Estados Unidos ve en estos activos una herramienta para proyectar el poder del dólar, Europa ve en ellos un riesgo para la estabilidad del euro. Si una moneda digital privada se volviera dominante, el Banco Central Europeo perdería su capacidad de influir en la economía a través de la política monetaria. En vez de

delegar gran parte de la digitalización a empresas privadas como Tether o Circle, Europa está apostando por su propia moneda digital, el euro digital del Banco Central Europeo, cuyo lanzamiento se espera para 2027. En palabras de Christine Lagarde, «el euro digital es una herramienta de soberanía».

China ha prohibido las stablecoins privadas, aunque usa a Hong Kong, que posee su propio marco financiero, como laboratorio sobre monedas privadas sin desestabilizar la economía continental; pero es ya líder global en despliegue de una moneda digital emitida por el Banco Popular de China, el yuan digital. Desde 2020 ha avanzado su uso en China, que a la vez lo usa para participar en mBridge para pagos transfronterizos sin pasar por la infraestructura financiera controlada por Occidente.

En el uso de las finanzas como arma geopolítica, Estados Unidos apuesta por proyectar poder a través del dólar privado, beneficiándose del efecto de inercia y de su red masiva; China lo hace desde el control centralizado y la construcción de un sistema alternativo centrado en mBridge; mientras que Europa busca una autonomía cautelosa centrada en estándares y en ética frente a la volatilidad de los stablecoins estadounidenses y la vigilancia china. No parece que vaya a haber un vencedor absoluto, sino más bien un sistema financiero más fragmentado y multipolar donde el éxito de cada bloque dependerá de cómo resuelvan sus vulnerabilidades internas: para Estados Unidos el déficit fiscal descontrolado, ya que si quiebra la confianza en su capacidad de pago ni siquiera la mejor tecnología le salvará. Para China, el control, la falta de libertad de movimiento de capitales y la vigilancia extrema desincentivarán a muchos inversores globales; para Europa, su mayor riesgo es la irrelevancia geopolítica: seguirá siendo un gran mercado de consumo, pero con una moneda de segundo nivel.

He querido describir estos tres nuevos teatros de la batalla geoeconómica —el espacio, los fondos marinos y las finanzas—, para dar al lector una idea de la complejidad de la rivalidad actual y de

los retos a los que se enfrenta Europa. En primer lugar, los tres espacios nos dan una idea de lo profundo de la alianza estratégica entre Europa y Estados Unidos y por lo tanto la urgencia para una Europa, ahora sola, de repensar dependencias y vulnerabilidades con respecto a su antiguo aliado. En segundo lugar, queda claro que Europa tiene cartas en su mano para construir una mayor autonomía estratégica y que hacerlo dependerá en gran medida de su voluntad política, sabiendo que la ruptura del vínculo transatlántico es profunda y que la nostalgia no servirá como arma disuasoria ni frente a Estados Unidos ni frente a China. En tercer lugar, el derecho internacional construido a través de las últimas décadas es una protección frente a prácticas predatorias, y Europa puede —probablemente debe— trabajar con otros países que buscan también una «tercera vía». Lucidez, determinación para avanzar y alianzas amplias si Europa no quiere verse relegada a ser un actor secundario.

Pero donde se juega su futuro, y también su presente, es en el Ártico, esa mancha blanca en el mapa que ha centrado el interés mundial. ¿Qué contiene el Ártico que es tan valioso? A ello dedicaré el próximo capítulo.

8

EL ÁRTICO ES EL NUEVO PACÍFICO, BERING ES EL NUEVO MALACA

Hubo un tiempo en el que el Ártico solo interesaba a exploradores aguerridos que construyeron la leyenda de la conquista del Polo Norte: Amundsen, Nansen, Hudson y unos pocos más. Hoy su épica deja paso a la descarnada gramática de la geopolítica, cuya tríada —comercio, recursos y seguridad nacional— se da cita en esta región. El Pacífico ha dominado una gran parte de la geopolítica de las últimas décadas, pero está siendo destronado por el Ártico, que pasa de ser una región helada y aislada a ser un escenario clave de la competencia geopolítica y económica del siglo xxi.

A diferencia de la Antártida, que es un continente, el Ártico es un océano helado rodeado de tierra firme donde convergen Rusia, Norteamérica y Europa y por donde asoma la nariz China. La gobernanza de la región se desarrolla en el «Consejo del Ártico», cuyos miembros son Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Rusia. China, y otros países como España y Francia, son observadores permanentes.

El aumento de la temperatura ambiental y del agua acelera el deshielo de glaciares y reduce la banquisa, la capa de hielo flotante que se forma en la superficie del océano por la congelación del agua marina. El cambio climático abre nuevas rutas marítimas y hace más accesibles caladeros, hidrocarburos y recursos minerales estratégicos. El Ártico juega también un papel importante como

espacio de disuasión y defensa, permitiendo el despliegue rápido de fuerzas y de misiles balísticos intercontinentales.

Se estima que para mediados de este siglo el deshielo habilitará tres nuevos corredores del Pacífico al Atlántico por la llamada ruta del Norte: el paso del noroeste, a través del archipiélago ártico de Canadá, el paso transpolar, en línea recta entre el Atlántico y el mar de Bering pasando por el polo norte geográfico, y el tercero, el paso del noreste, bordeando la costa rusa desde el estrecho de Bering hasta el mar de Barents. La nueva ruta reducirá la distancia para conectar los grandes puertos del Pacífico y el Atlántico, entre 5.000-6.000 km, y un poco más de dos semanas de viaje, con increíbles beneficios para las navieras. La danesa Maersk, la china Cosco y la rusa Rosatomflot ya la han navegado de manera experimental. De momento escasean las infraestructuras y las condiciones meteorológicas son extremas. Pero ya ha comenzado una de las mayores reconfiguraciones de la logística global. Afectará de manera directa a los corredores consolidados a través de los canales de Suez y Panamá, ofrecerá una vía de escape a los embotellamientos o las zonas de conflicto como el estrecho de Malaca o el mar Rojo y desplazará los hubs logísticos afianzados en lugares como Singapur o Malasia. El siglo xx fue el del estrecho de Malaca, el siglo xxi será el del estrecho de Bering.

La reconfiguración logística generada por la ruta del Norte tendrá ganadores y perdedores. No pretendo hacer un análisis detallado ni preciso del impacto de la apertura de la ruta del Ártico, dado que mucho dependerá del avance del cambio climático, de la construcción de infraestructuras que llevarán su tiempo y de la geopolítica. Pero sí identificar posibles escenarios.

Comencemos por los ganadores. Claramente Rusia y sobre todo China, con su Ruta de la Seda Polar, una prolongación en esta región de su «Iniciativa de la Franja y la Ruta». En 2018, China la detalló en su Libro blanco sobre la Política para el Ártico, en el que se presenta como «Estado cuasiártico», señalando así su deseo de

tener voz propia en esta región. La mayor parte de las inversiones chinas se están desarrollando en territorio ruso. Ambos países han tenido sus más y sus menos; por ejemplo, Rusia era muy reticente a reconocer a China como observador permanente del Consejo Ártico, temiendo la alargada sombra china en un espacio considerado vital por Rusia. Pero desde la invasión de Crimea y sobre todo desde 2022, Rusia necesita de China para sortear las sanciones occidentales y, aunque las diferencias persisten, ambas se afanan por mostrar una «amistad sin límites». Líneas férreas, puertos, oleoductos y gasoductos, proyectos mineros, cables submarinos, el abanico es amplio, aunque también se cuentan por docenas los proyectos abandonados por faraónicos o por presiones políticas. China tiene asimismo puesto su ojo en los países nórdicos, aunque la presión de Estados Unidos y las preocupaciones locales de proteger su seguridad nacional han llevado a cancelar muchos de estos proyectos. En 2011, el constructor chino Huang Nubo ofreció comprar una larga sección en Grimsstadir a Fjollum, en la inhóspita zona del noreste de Islandia, con fines de desarrollo turístico. Tras un animado debate local entre partidarios del desarrollo económico de la región y defensores de la seguridad del Ártico, el gobierno rechazó la propuesta. En 2014, el mismo empresario quiso comprar la última propiedad privada en venta en Svalbard —el estratégico archipiélago noruego que es puerta de entrada al Ártico y desde el que se controla el paso de submarinos nucleares rusos estacionados en la península de Kola—, pero fue rechazada por el gobierno noruego.

China tenía también puesto el ojo sobre Groenlandia, pero a día de hoy la mayor parte de los proyectos —construcción de aeropuertos, licencia de exploración offshore de gas y petróleo, minería— han sido abortados. La presencia china en el Ártico canadiense y en Alaska es testimonial. Así pues, China avanza, pero casi exclusivamente con y en Rusia. Una mezcla de dificultades relativas a la viabilidad económica de los proyectos, preocupaciones medioambientales y la resistencia geopolítica de Europa y Canadá limitan su presencia.

A su vez, Rusia ha anunciado un ambicioso plan de 300.000 millones de dólares para desarrollar la ruta del Norte. Aumentará la flota de rompehielos nucleares, únicos en el mundo capaces de abrirse paso rompiendo masas de hielo de hasta dos metros de espesor; desarrollará infraestructuras portuarias para transbordar mercancías a ferrocarriles que conectarán con Europa, y construirá infraestructuras para el monitoreo satelital y digital del tráfico marítimo; así como el establecimiento de una línea regular de portacontenedores entre Rosatom y la naviera china NewNew Shipping para conectar Ningbo con San Petersburgo en 2026. En definitiva, Rusia sola, o acompañada de China, quiere reducir su dependencia del canal de Suez controlando el acceso a los 35 billones de dólares en recursos naturales que alberga el Ártico.

¿Y los perdedores? Para Egipto, los derechos de peaje del canal de Suez suponen alrededor de un 10 % de los recursos necesarios para financiar el gasto gubernamental. Sin contar con impuestos indirectos e ingresos por actividades auxiliares. El canal es también crucial para su estabilidad macroeconómica, pues proporciona las divisas necesarias para pagar deuda externa y financiar la importación de alimentos. En el caso de Panamá, los dividendos y aportes del canal suponen más del 20 % de los ingresos del país y un 6-8 % del PIB. Yemen, Yibuti y Arabia Saudí verían una disminución de su importancia estratégica si las grandes potencias transitan por el norte.

Y en la lista de perdedores también aparecen los puertos europeos del sur de Europa, de España, Francia, Italia y Grecia, en beneficio de los del norte de Europa como Róterdam, Hamburgo o Gdansk. Y no sería menos negativo para las aspiraciones de puertos como Tánger Med en Marruecos. En España supondría menor tráfico para Barcelona, Valencia y Algeciras. Este último merece atención especial: es un puerto situado a desviación cero y en un punto estratégico en el estrecho de Gibraltar, de confluencia de las rutas este-oeste (Asia-Europa) y norte-sur (África-Europa). Una gran parte de su actividad —como la de Tánger Med— consiste en el

transbordo de mercancías de la ruta asiática para su redistribución, que se vería afectada por la reducción en tiempo, y por tanto de precio, de la ruta del Norte. Ahora bien, no todo es reducción de tiempo. Las navieras buscan también fiabilidad y predictibilidad, algo que la ruta Norte aún no ofrece. El precio será importante, pero tendrá asimismo que competir con la calidad. Sería prudente para España seguir invirtiendo en eficiencia, en infraestructuras que mejoren la conexión con Europa, en descarbonización, y sobre todo en prestar más atención al continente africano, buscando ser su conector con los mercados europeos.

También habrá perdedores en Asia. Lo serán los países cuyo modelo económico depende del paso obligado por los estrechos del sur. Si una parte significativa de la carga entre el noreste de Asia —Japón, China, Corea del Sur— y Europa se desvía por el norte, los barcos dejarán de pasar por Singapur, afectando a su modelo de negocio como puerta de enlace. Este país, que tiene fama de anticiparse a los cambios, ya ha iniciado importantes inversiones en tecnología de descarbonización marítima para retener a las navieras, buscando ofrecer servicios que la ruta Norte aún no ofrece. También se verán afectadas Malasia e Indonesia, que controlan las riberas del estrecho de Malaca y el de la Sonda, que perderán capacidad de negociación ya que su control sobre estos «cuellos de botella» serán menos críticos para el comercio internacional. Tailandia y Vietnam son también casos interesantes. Si la logística del norte de China se vuelve más eficiente que la del sudeste asiático, las empresas podrían preferir ubicar sus centros de fabricación en el norte de China para aprovechar la rapidez de la ruta de la Seda Polar.

¿Y Estados Unidos? ¿Qué alberga el Ártico que tanto interesa a Donald Trump, hasta el punto de amenazar con tomar Groenlandia?

La historia nos da claves importantes para entender cómo hemos llegado aquí. Merece la pena echar la vista atrás.

Estados Unidos es un país ártico desde 1867, cuando el secretario de Estado del presidente Lincoln, William H. Seward, compró Alaska al Imperio ruso por 7,2 millones de dólares. Seward, un expansionista pacífico, buscaba comercio, materias primas, bases navales y también una posición estratégica que ayudaría al país a «extender una mano amiga a Asia». La compra —denominada «locura de Seward» por lo inútil que parecía a muchos en aquella época la adquisición— fue rápida porque Rusia, potencia amiga que había apoyado a la Unión en la guerra civil estadounidense, necesitaba financiación. Y con ella Estados Unidos evitó que el Reino Unido ampliase sus territorios en lo que hoy conocemos como Canadá, anexionándose Alaska. En 1935 el general Billy Mitchell, en su testimonio ante el Congreso, declaraba: «Alaska es el lugar más estratégico del mundo». El territorio está singularmente cerca de las grandes capitales del hemisferio norte, una plataforma perfecta de proyección de poder militar. Desde ahí se controla el paso por el estrecho de Bering, clave para la navegación en el Ártico.

Envalentonado tras la compra de Alaska, Seward quiso también adquirir Islandia y Groenlandia a Dinamarca. En su informe al Congreso explicaba que, con Alaska al oeste y Groenlandia e Islandia al este, a Canadá no le quedaría más remedio que pasar a ser parte de Estados Unidos. Pero el Congreso rechazó la propuesta de comprar «otra tierra helada». Estados Unidos volvió a interesarse por adquirir Groenlandia tras la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente para hacerse con recursos pesqueros. Pero prefirió hacerse con las Indias Occidentales danesas —hoy llamadas islas Vírgenes— que eran vitales para controlar el canal de Panamá; a cambio, reconoció la soberanía danesa sobre la totalidad de Groenlandia.

Durante la Segunda Guerra Mundial y tras la invasión de Dinamarca por Hitler, Estados Unidos temió que Alemania pidiera también anexionarse Groenlandia e Islandia, y para impedirlo aceptó la oferta del embajador danés en Washington, Henrik Kauffmann, de establecer bases en Groenlandia para defenderla de los alemanes

mientras durase la guerra. Para Estados Unidos, que la Alemania nazi se hiciera con la colonia danesa de Groenlandia suponía traspasar la línea roja de la doctrina Monroe.

Esta doctrina de 1823, que debe su nombre al quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, proclamaba la oposición a cualquier intervención en el continente americano de una potencia ajena a la región. Era la manera de proteger a los pueblos americanos de injerencias extranjeras, léase europeas, sobre todo del Imperio español, que acababa de perder gran parte de sus posesiones americanas. Una especie de solidaridad panamericana de rechazo a la colonización europea. El presidente Roosevelt adoptó en 1904 un corolario a esta doctrina que permitiría a Estados Unidos intervenir en los asuntos de otros países del continente para evitar que otros lo pudieran hacer. El panamericanismo se transforma así en una especie de imperialismo estadounidense. Y así llegaron las tropas norteamericanas a Groenlandia, para impedir una posible ocupación alemana.

Tras el fin de la guerra, Dinamarca y Estados Unidos se convirtieron en aliados en la OTAN y las bases en un elemento de unión entre ellos. Un acuerdo de 1951 permite a Estados Unidos establecer nuevas bases o áreas de defensa que la OTAN crea necesarias, es decir, le permite ampliar su presencia de manera casi ilimitada. Inicialmente, la presencia estadounidense se extendía por más de cincuenta lugares, con unas diez mil personas entre estaciones meteorológicas, radares, puertos, aeropuertos, bases de submarinos, observatorios espaciales, etc. Tras el fin de la Guerra Fría el interés por Groenlandia decayó y muchas de las bases fueron abandonadas. Hoy, la base militar de Pituffik, en el noroeste, es la única operativa con unos cientos de personas.

El interés por la isla revivió durante el primer mandato de Donald Trump. La idea de adquirir Groenlandia se la sopló Ronald Lauder, el heredero de la cosmética Estée Lauder, quien ha invertido en varios proyectos en la isla, incluida una empresa embotelladora de agua.

También se ha interesado por Groenlandia la start-up californiana de exploración minera asistida por IA, Kobold Metals, apoyada por varios empresarios de la tecnología como Jeff Bezos o Marc Andreessen. Groenlandia no ha escapado a la fiebre por las materias primas, a pesar de que ningún proyecto de minería ha resultado exitoso hasta ahora: los mayores depósitos de minerales están en el círculo polar ártico, con lo cual su extracción es enormemente costosa. En 2019, durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos abrió un consulado en Nuuk, la capital de Groenlandia, enfocando sus esfuerzos en convencer a la población local de aceptar ser parte de Estados Unidos.

Groenlandia es hoy un territorio autónomo de Dinamarca, como lo son las islas Feroe, y sus ciudadanos lo son del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, ciudadanos de la Unión Europea. Tras una etapa compleja de subordinación a la metrópoli, la isla ha ido ganando mayores cotas de autonomía, excepto en cuestiones relativas a política exterior y defensa, así como una dotación económica anual que corresponde a Dinamarca. Con la entrada de Dinamarca en la Unión en 1973, Groenlandia pasó también a ser parte de la Unión Europea, pero decidió salirse en 1985 por desacuerdo con la política pesquera europea y la prohibición de comercio con pieles de foca. Hoy, esa libertad ganada por Groenlandia es también una gran fragilidad geopolítica; ser miembro de pleno derecho de la Unión hoy daría a la isla un mayor grado de protección, una barrera más frente a un presidente estadounidense depredador.

Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, su ambición por hacerse con la isla se ha convertido en una crisis de la OTAN, para gran regocijo de Rusia. Trump ha insistido en hacerse con Groenlandia dada su importancia para la seguridad nacional del país.

El 21 de enero del 2026, mientras escuchaba a Donald Trump pronunciar su discurso ante una audiencia expectante en el Foro Económico de Davos, no dejaba de preguntarme cómo habíamos llegado aquí: «Groenlandia es parte de Norteamérica; es parte del

hemisferio norte; es parte de nuestro territorio y solo Estados Unidos puede defender este gran territorio», insistía un Trump visiblemente cansado en una diatriba que no parecía terminar nunca. «No voy a usar la fuerza. Quiero comprar este territorio. No será una amenaza para la OTAN. Los europeos no ayudarán si la OTAN necesita intervenir. Nunca hemos pedido nada a nuestros aliados, ahora quiero el título de propiedad. Los miembros de la OTAN podrán decidir: si aceptan, se lo agradeceré; si lo rechazan, no lo olvidaremos».

Los participantes intercambiábamos miradas de perplejidad, mitad aliviados porque Estados Unidos no iba a tomar Groenlandia por la fuerza, mitad incrédulos por el tono mafioso.

Y es que Trump había calentado el ambiente en los días anteriores a su llegada a Davos. Tras el envío de apenas unas decenas de soldados de países de la OTAN a Groenlandia en señal de solidaridad con Dinamarca, Trump había anunciado aranceles sobre el comercio de estos países en señal de represalia. El gesto cayó como un jarro de agua fría sobre Europa. Sonaron con fuerza las palabras de la primera ministra danesa Mette Frederiksen: «Si un aliado toma por la fuerza el territorio de otro aliado, la OTAN habrá muerto».

La administración Trump había traspasado una línea roja. Habíamos vivido conflictos comerciales y políticos en el pasado, guerras Airbus-Boeing, la división tras la invasión de Iraq, o antes aún el conflicto del canal de Suez, pero nunca habíamos asistido a la amenaza de violar la integridad territorial de uno de sus aliados en la OTAN. Nunca. Y esto mientras Rusia invade Ucrania, infringe la soberanía y la integridad territorial de otro país europeo. Rusia al este, Estados Unidos al oeste. Y menos aún cuando todos los aliados de la OTAN comparten la importancia del Ártico para la seguridad de la alianza y han mostrado su disponibilidad para aumentar inversiones y protección de la región. Ante la gravedad de la situación, Europa se vio obligada a renunciar a la estrategia de apaciguamiento que tan pocos resultados le había dado, y a mostrar firmeza, incluyendo la

amenaza de usar el instrumento anticoerción, una especie de bazuca que permitiría a la Unión tomar medidas de represalia y que inicialmente estaba pensado para defendernos de China. Y es que o Europa mostraba firmeza o se convertía en vasallo de Estados Unidos. No son posibles las medias tintas.

Los mercados financieros también ayudaron a Europa. En una de las reuniones a puerta cerrada de Davos tuve ocasión de conversar con varios gestores de fondos de pensiones europeos, grandes tenedores de deuda pública estadounidense, que anunciaron que se retirarían del mercado americano. Los fondos eran relativamente modestos, pero el gesto no lo era; los mercados se vieron obligados a poner precio al riesgo de fractura de la OTAN, encareciendo la deuda estadounidense. El secretario americano del Tesoro tuvo que emplearse a fondo para restablecer la confianza de los mercados minimizando su importancia. Pero el mal ya estaba hecho. La irracionalidad geopolítica del presidente estadounidense se topó con la tozuda realidad de la interdependencia económica transatlántica y así se vio obligado a claudicar, al menos temporalmente.

Las ambiciones personales del presidente se han topado con la falta de interés, cuando no hostilidad, a cualquier aventura militar por parte del movimiento MAGA. Y es que Groenlandia no va de seguridad nacional, ni de materias primas, va de pasar a la historia. De dejar un legado histórico. De convertirse en el presidente estadounidense que un siglo después de McKinley, bien conocido por España por haber ganado la guerra por Cuba, Puerto Rico y Filipinas, extiende el territorio de Estados Unidos. Allí donde su profesión de constructor inmobiliario converge con sus ambiciones personales. Una nueva estrella en la bandera del país, el símbolo nacional más importante. Un presidente fortalecido antes de su próxima cita con Xi Jinping, otro líder que también quiere pasar a la historia superando a Mao, al héroe nacional que falleció sin reunificar Taiwán. Para Xi la reunificación es parte de su narrativa de restaurar la grandeza nacional. Pasar a la historia significa culminar un proyecto que el Partido Comunista chino presenta como histórico e

inevitable. Un legado ideológico y nacionalista. Como de eso va también Putin y su deseo de emular a Pedro el Grande en Ucrania. Putin ha construido su discurso sobre la idea de restaurar la influencia rusa y corregir lo que considera «errores históricos». La invasión se enmarca en una visión del legado imperial y de reescritura del pasado. Es un legado basado en la fuerza y el control territorial. La idea de «pasar a la historia» funciona como motor psicológico y político.

Pero la historia no avanza sola. Se escribe sobre los recursos que permiten ejercer poder. Hoy esos recursos son los Big 6: litio, cobalto, cobre, grafito, níquel y tierras raras, seis minerales esenciales que no son solo materias primas, son la infraestructura invisible del poder del siglo xxi. Controlarlos equivale a controlar la capacidad de producir, innovar y sobre todo de defenderse. Por eso se han vuelto esenciales para la economía y la política internacional. Son esenciales porque son insustituibles en tecnologías clave y, por lo tanto, quien las tenga puede controlar industrias enteras, desde vehículos eléctricos a energías renovables, pasando por defensa; tienen cadenas de suministro muy concentradas, lo que convierte el acceso en un factor de poder; definen la competitividad y generan dependencias que hoy, en la era de la geoeconomía, suponen una gran vulnerabilidad.

Hemos hablado de estos minerales en capítulos anteriores, pero es necesario entender su importancia geopolítica. Los depósitos de estos minerales se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del planeta. Pero su extracción lo está en un puñado de países, mientras que su refinado está fuertemente concentrado en China. Y lo está porque China decidió dominarlo a través de una estrategia coherente, paciente y acumulativa que combina política industrial, diplomacia de recursos y control tecnológico. No es un dominio accidental sino el resultado de decisiones tomadas durante décadas para situarse en el centro de las cadenas de valor que sostienen la economía moderna. Recuerdo bien este capítulo de las negociaciones para la entrada de China en la OMC el año 2000. Los

miembros del equipo negociador europeo nos reuníamos en el jardín de la residencia del embajador de la Unión Europea en China con la radio puesta para evitar ser escuchados por las autoridades chinas mientras discutíamos la mejor estrategia para obtener concesiones en materia de tierras raras. Tras ásperas negociaciones, el entonces comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, obtuvo de su homólogo chino Shi Guangsheng el compromiso de eliminar todas las restricciones aplicadas por China al comercio de estas materias, facilitando así el acuerdo final para la entrada de China en la OMC, que tuvo lugar en diciembre de 2001.

China empezó por identificar los minerales críticos como un sector estratégico cuando otros países aún los consideraban actividades secundarias o demasiado contaminantes. El Estado chino impulsó inversiones masivas en minería, refinado y procesamiento ofreciendo créditos baratos, infraestructuras y protección política. Esta apuesta temprana permitió desarrollar capacidades industriales que hoy son difíciles de replicar porque el refinado requiere procesos químicos complejos, mano de obra especializada y una escala que solo se alcanza tras años de acumulación.

El país también asumió los costes ambientales que nosotros preferíamos evitar. El refinado genera residuos tóxicos y requiere grandes cantidades de energía. Mientras nosotros extendíamos las regulaciones medioambientales —con buen criterio— y externalizábamos estas actividades, China las integró en su territorio, aceptando el impacto ambiental a cambio de consolidar una ventaja industrial decisiva. Esta tolerancia regulatoria redujo costes y atrajo a empresas que buscaban cadenas de suministro más baratas y estables.

A la dimensión interna se añadió una diplomacia de recursos muy activa, firmando acuerdos con países ricos en minerales como la República Democrática del Congo, Indonesia, Australia o Chile, lo que le aseguró un flujo constante de materias primas hacia sus

refinerías, reforzando su posición mundial como centro de procesamiento.

El resultado es una integración vertical casi completa: China refina, pero produce también componentes intermedios, baterías, imanes, paneles solares y una parte creciente de la electrónica global. Controlar el refinado le permite controlar el ritmo, precio y disponibilidad de los materiales que alimentan estas industrias. Controlar la manufactura le permite transformar esos materiales en alto valor añadido. Esta combinación convierte su dominio en estructural, no coyuntural. Una forma de poder geopolítico que condiciona la soberanía de otros países y redefine las relaciones internacionales.

No es la primera vez que esto ocurre en la historia. Similar fue el dominio británico del carbón en el siglo xix cuando este mineral era la base de la Revolución Industrial, alimentaba fábricas, barcos y siderurgia. El Reino Unido controlaba la extracción, la tecnología, la maquinaria y la capacidad de transporte. Así lideró la Primera Revolución Industrial. Pero con el petróleo y la electricidad, el carbón dejó de ser estratégico y otros países desarrollaron tecnologías y capacidades superiores y la ventaja inicial británica quedó obsoleta.

Lo mismo ocurrió con Estados Unidos y el petróleo en el siglo xx, cuando este se convirtió en recurso clave para la industria, el transporte y la guerra. Estados Unidos dominó la extracción, el refinado, la ingeniería y las empresas que estructuraban el mercado global. Pero ese dominio terminó porque surgieron otros productores con más reservas, porque estos se organizaron políticamente y porque el sistema energético mundial se diversificó.

La historia nos muestra que el poder basado en un recurso es siempre temporal: dura mientras ese recurso siga siendo central y mientras nadie más pueda producirlo en condiciones mejores. Y cuanto más se instrumentaliza este poder, más ahínco ponen los afectados en erosionarlo. Si esto es así, cabe preguntarse cuánto

durará el dominio chino de los Big 6 y sobre todo, qué factores pueden erosionar o acabar con su dominio. Esta es una pregunta esencial para el futuro de la industria europea y su competitividad.

Lo cierto es que la Unión Europea ha empezado ya a diversificar para crear cadenas de valor alternativas, algunas con países como Australia, Canadá o Estados Unidos, pero también con acuerdos bilaterales sobre materias primas con países en África y en América Latina. Otro de los vectores para reducir la dependencia es el desarrollo de nuevas tecnologías de baterías, que usen menos litio, cobalto o tierras raras, así como de materiales o diseños alternativos. La economía circular y la innovación en reciclaje ayudarán a la Unión Europea a recuperar minerales de baterías usadas, reduciendo la necesidad de refinado primario chino. También pueden afectarlo cambios internos en China, como regulaciones ambientales más estrictas, costes energéticos más altos o restricciones a la exportación, y asimismo pueden encarecer su producción y abrir espacio a competidores. No es de sorprender que voces chinas como la del economista de la Universidad de Tsinghua Li Daokui o el politólogo Chu Shulong hayan advertido sobre las vulnerabilidades de una especialización excesiva si cambia la tecnología; y que usar recursos estratégicos como instrumento de presión puede acelerar la creación de cadenas de suministro alternativas.

Como muestra el caso de las materias primas, cada una a su manera, el poder real no se construye reaccionando a las urgencias del presente, sino anticipando las necesidades del futuro. En el Ártico, los Estados que llevan décadas invirtiendo en presencia militar, infraestructuras, investigación científica y rutas marinas no lo hacen porque el hielo lo permite hoy, sino porque lo permitirá dentro de veinte o treinta años. Esta apuesta prolongada revela que la ventaja decisiva pertenece a quienes piensan en horizontes largos, no a quienes improvisan. La competencia por las materias primas sigue la misma lógica. Su dominio actual no es fruto de una maniobra puntual sino de décadas de inversión. La clave fue mirar

más lejos que los demás. Y del mismo modo, quienes buscan reducir su dependencia hoy deben adoptar esa misma mirada a largo plazo. El poder del siglo xxi pertenece a quienes planifican con décadas de antelación, no a quienes reaccionan cuando la competencia ya está decidida. Nos toca actuar ahora mirando al largo plazo. Quizá para esto estará sirviendo Trump, para alumbrar un nuevo proyecto europeo para esta nueva época de confusión, tanto en lo material como en lo virtual, como veremos en el próximo capítulo dedicado a los algoritmos y la inteligencia artificial.

9

ALGORITMOS CONTRA LA DEMOCRACIA

Despertamos cada mañana en un continente que durante décadas creyó vivir bajo el paraguas protector de un Occidente cohesionado. En un proyecto político y moral que, si bien imperfecto, se sostenía sobre la confianza mutua y la promesa de una libertad compartida. Pero esa idea se ha desvanecido. Hoy el continente descubre que sus riesgos no provienen solo de un enemigo externo reconocible, sino también de un entramado invisible de algoritmos diseñados lejos de sus fronteras, en manos de una potencia que ya no actúa como aliada, sino como vigilante y coercitiva.

En esta nueva era digital, el corazón del sistema democrático europeo está expuesto a lógicas que no controla y a plataformas cuya arquitectura responde más a intereses comerciales y geoestratégicos estadounidenses que a los valores fundacionales de Europa. Los europeos votan, opinan y se indignan dentro de un ecosistema que no les pertenece, un universo informativo regido por modelos opacos capaces de amplificar fracturas internas, moldear percepciones colectivas y erosionar la confianza pública con una eficiencia que los viejos regímenes de propaganda solo podrían haber soñado.

Mientras la Unión Europea se aferra a su retórica de soberanía y autonomía estratégica, la realidad es más cruda: su conversación pública, su identidad política y su capacidad de decisión están siendo externalizadas. En este teatro global de datos, la democracia europea se convierte en un experimento ajeno, observada y

gestionada desde centros de poder que no rinden cuentas a ningún parlamento europeo.

Así comienza la historia de la recesión democrática del continente: no con tanques cruzando fronteras, ni con golpes de Estado, sino con líneas de código escritas al otro lado del Atlántico. Líneas que deciden qué voces se amplifican, cuáles se silencian y cómo se reconfigura el imaginario político de cientos de millones de ciudadanos. Europa no solo está sola. Está sola y necesita proteger su democracia con herramientas para una guerra que nunca eligió, pero que necesita ganar sin comprender del todo cómo empezó.

Si dejamos de creer en los mitos de la democracia, esta se derrumba. Aquiles era invencible hasta que alguien encontró su punto débil, su talón. Hoy el talón de Aquiles de la democracia son los algoritmos. No causan el malestar social, pero sí son el acelerador de partículas que lo convierten en estructural. No es un asalto frontal a la democracia, es una externalización silenciosa de su funcionamiento. Es la polarización que anuncia el fin del bien común. Los algoritmos tienen dueños que sueñan con un mundo de abundancia sin límites. Son las Big Tech, hoy aliadas con la administración estadounidense. No forman un matrimonio, sino una criatura siamesa nacida de un interés mutuo: un cuerpo político y otro algorítmico, unidos por la columna vertebral del poder global. Uno vigila, el otro predice; uno presiona, el otro persuade. Y mientras Europa contempla esta criatura híbrida desde la distancia, descubre que está sola en un continente cuya democracia necesita proteger para poder seguir siendo Europa.

En 1787, Thomas Jefferson, quien llegaría a ser presidente de Estados Unidos, dijo que «si tuviera que elegir si debemos tener un gobierno sin periódicos o un periódico sin gobierno, elegiría lo segundo». Era una defensa a ultranza de la libertad de prensa, un cuarto poder esencial para proteger a los ciudadanos de la tiranía y el abuso de gobernantes. Para Jefferson la prensa debía servir para que el ciudadano conociera la verdad y formara su propio juicio. Si

estuviese vivo, probablemente gritaría: ¡son los algoritmos, estúpido! Elegiría algoritmos neutrales sin propaganda, porque una democracia sin soberanía algorítmica es una democracia imperfecta. Pero ¿puede un algoritmo ser neutral?

El gran matiz moderno es que, mientras los periódicos de Jefferson buscaban informar, los algoritmos actuales buscan enganchar al usuario. El desafío ya no es la falta de información, sino la manipulación de nuestra atención.

La televisión es «chicle para nuestros ojos», decía el catedrático de comunicación audiovisual Román Gubern en un artículo de opinión en El País en 2005. Hoy el poder de los algoritmos es petróleo para nuestro cerebro.

La genealogía de la tecnología ha sido motor de cambio antropológico. La imprenta de tipos móviles de Gutenberg hizo posible la Reforma protestante y una mayor libertad religiosa. El lector como sujeto activo y reflexivo. Los periódicos trajeron la libertad de prensa a finales del siglo xviii, clave para las revoluciones liberales y las democracias constitucionales. El ciudadano como actor político informado. Después llegaron el cine y la radio, los medios de masas, el hombre masa de Ortega y Gasset. El espectador como sujeto pasivo en busca de confort. Ahora llega un nuevo desarrollo tecnológico, los algoritmos y las redes sociales, pero esta vez vienen para provocar un retroceso de nuestras democracias, y no solo de ellas, también en nuestra forma de entender el mundo. El usuario se convierte en producto adictivo que al provocar liberaciones masivas y rápidas de dopamina ofrece gratificación instantánea. Una ludopatía algorítmica infinita y al alcance de (casi) todos, basta con tener un smartphone y conexión a internet.

En este estado de retroceso democrático, la razón deja paso a la sensación. Si la televisión era la caja tonta que no alimentaba, el ecosistema digital actual obra de forma más agresiva. Es el fin de la jerarquía de la verdad. La imprenta exigía una estructura lógica con

un argumento y una conclusión. El nuevo entorno digital privilegia el impacto emocional, y cuando la emoción domina sin el contrapeso de la razón el debate político se convierte en un vacío donde los hechos dejan de importar frente a cómo sentimos la realidad.

Si Ortega hablaba del «hombre masa» que se siente como todos y no le importa, hoy hablamos del «hombre segmentado». Ya no somos una masa unida frente a un televisor, sino individuos aislados en realidades paralelas concebidas por algoritmos, en burbujas de resonancia diseñadas a su medida por algoritmos, que confirman sus prejuicios. El otro ya no es un conciudadano con otra perspectiva, es un enemigo. Es la deshumanización del oponente político.

Lo vimos en España durante la catástrofe de la DANA en Valencia en octubre de 2024. Este trágico momento, que debería haber sido un momento de cohesión social, mostró cómo el hombre fragmentado utilizaba la tragedia para deshumanizar al conciudadano que estaba en el otro bando político. En lugar de una respuesta unificada, el entorno digital fragmentó la realidad en dos narrativas emocionales e irreconciliables. En redes sociales se vio a ciudadanos de un signo político culpar a las víctimas de su propia desgracia por haber votado a determinado partido o, por el contrario, a ciudadanos celebrando el acoso a autoridades basándose en su ideología. El vecino que sufre deja de ser un «conciudadano con problemas» para convertirse en un «adversario que merece lo que le pasa» o un «peón» para atacar al rival.

Aristóteles escribió que la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, sino una forma de organización orientada al bien común y no al interés particular de un grupo. Parte importante de esta organización es el ágora pública, donde ciudadanos con distintos puntos de vista debaten sobre los mismos problemas. Pero el hombre segmentado vive en una realidad fragmentada: no solo tiene puntos de vista distintos, es que maneja hechos distintos. Cuando no podemos ponernos de acuerdo sobre qué es verdad y qué es mentira, porque cada uno percibe una verdad diferente, el

diálogo se vuelve imposible. Sin hechos compartidos la deliberación muere.

En enero de 2017, tras la ceremonia inaugural de la presidencia de Donald Trump, su portavoz Sean Spicer afirmó que la participación en la investidura había sido «la mayor audiencia que jamás haya presenciado una toma de posesión». Las cifras habían sido visiblemente inferiores a las de Barack Obama en 2009. Pero interpelada sobre esta falsedad por Chuck Todd, presentador del popular programa de la cadena NBC Meet the Press, la entonces consejera presidencial Kellyanne Conway las defendió diciendo: «Vamos, no seas tan dramático, Chuck; Sean Spicer, nuestro secretario de prensa, dio hechos alternativos a eso». Chuck Todd replicó de inmediato: «Mire, los hechos alternativos no son hechos, son falsedades». Cuando Conway lanza un «hecho alternativo», el algoritmo lo entrega directamente a usuarios que ya están predispuestos a creerle, creando una burbuja donde esa falsedad es la única realidad visible. Este momento se considera un hito en la «posverdad», donde al hombre segmentado se le habla con «sus propios hechos».

Contra estos «hechos alternativos» ya había alertado Hannah Arendt en su libro Verdad y política (1967). Arendt argumentaba que los hechos son tercos y no dependen del consentimiento de nadie. Los hechos son el límite de la política. Si el poder puede fabricar sus «propios hechos» entonces la política deja de ser un debate entre ciudadanos y se convierte en dominación o propaganda. Es el totalitarismo. El peligro no es que la gente crea una mentira específica, sino que, tras ser bombardeada con mentiras y verdades a partes iguales, pierda la capacidad de distinguir lo real de lo falso. Hoy el scroll infinito ha convertido nuestra atención en un recurso agotable, impidiendo la profundidad para entender un mundo complejo. Estudios longitudinales de Gloria Mark muestran que el tiempo medio antes de cambiar de tarea en pantalla se sitúa actualmente en torno a cuarenta y siete segundos. Arendt explicaba que el mundo es solo humano porque lo compartimos con otros. Si

cada uno tiene sus hechos, ya no vivimos en el mismo mundo. Ya no podemos ser ciudadanos.

Este concepto lo recogió Barack Obama en una famosa entrevista en The New Yorker en 2016: «Si no tenemos un suelo común de hechos compartidos, si no podemos distinguir entre lo que es verdad y no lo es, entonces por definición el marketplace de las ideas no funciona. La democracia no funciona». El suelo común de hechos compartidos es la infraestructura invisible pero obligatoria de cualquier democracia.

Pero mientras Arendt y Obama ven la pérdida del suelo común como un retroceso democrático, el mundo MAGA (Make America Great Again) lo ve como una liberación de la hegemonía cultural de las élites.

El vicepresidente J. D. Vance es probablemente el más articulado del movimiento en este aspecto. Su crítica al «suelo común» no es un ataque a la verdad científica, sino una impugnación a la autoridad de los «árbitros» que deciden qué es un hecho. Según Vance, el suelo común de Obama o de los medios tradicionales es en realidad un «consenso forzado por las élites» para marginar las preocupaciones de la clase trabajadora. Instituciones como The New York Times, las universidades de la Ivy League o las agencias de inteligencia han dejado de ser neutrales; están sesgadas ideológicamente hacia el progresismo y por lo tanto el suelo mismo está «amañado». En varias entrevistas ha señalado que cuando el establishment pide «hechos compartidos» lo que en realidad pide es sumisión a su narrativa. Para él, el escepticismo no es desinformación, sino una respuesta racional a instituciones que han fallado, como en la gestión de la crisis del COVID-19 o sobre la guerra de Irak. Vance usa una retórica que divide a la sociedad entre «expertos» —que viven en burbujas y dictan la verdad— y la «gente real». Sostiene que los «hechos compartidos» se usan a menudo para silenciar el debate político. Si algo se etiqueta como «hecho científico», se extrae de la plaza pública y ya no se puede discutir. Su segmento de

la población, su «hombre segmentado», tiene derecho a desconfiar del suelo que le ofrecen desde Washington o desde las élites. En un mundo donde las élites controlan la información, la lealtad al líder (Trump) y a la propia comunidad es más fiable que los datos oficiales. Si el «suelo común» te ha fallado económicamente, y sufres de desindustrialización y socialmente has caído en la crisis de opioides, ¿por qué deberías aceptar sus «hechos»? Para Vance la verdad es secundaria respecto a la protección de los intereses de su base electoral contra lo que él llama «el régimen».

En realidad, Vance es un ejemplo del «hombre segmentado» que ha decidido que el «chicle para los ojos» de los medios tradicionales es veneno. Al rechazar a Arendt, Vance propone un mundo de realidades en conflicto. Arendt diría que esto es el fin de la política porque no hay nada sobre lo que ponerse de acuerdo. Vance dice que el acuerdo era una ilusión que solo beneficiaba a unos pocos.

Vance no ha inventado los hechos alternativos, sino que ha validado intelectualmente la desconfianza que permite que estos hechos prosperen. Actúa como puente definitivo hacia el «retroceso democrático». Pasamos así de la desconfianza de las instituciones democráticas a la desconfianza de los hechos. Ha logrado que su base electoral perciba los «hechos» no como verdades universales, sino como «opiniones de gente con títulos universitarios» (¡aunque él también los tiene!). Al atacar a los expertos, a la epistemología, quita al científico o al periodista su autoridad. Si el experto ya no es de fiar, la emoción, la teoría de la conspiración o el dato segmentado, es decir, el hecho alternativo, llena el vacío. Para el votante ese hecho alternativo no es una mentira, es una «verdad de clase». Y como decía Arendt, cuando se pierde el suelo común, la gente cree en aquello que refuerza su identidad. Vance usa los hechos alternativos para cohesionar a su tribu. Si un experto dice que la economía crece, pero Vance dice que las élites te están robando, el seguidor de Vance elige el hecho que valida su sentimiento. Los medios de comunicación tradicionales se convierten en una armadura ideológica. La voluntad del pueblo está por encima

de los hechos. Si la mayoría o, mejor dicho, su mayoría cree algo, ese algo se convierte en la base de la acción política, sea cierto o no. La política ya no es una discusión sobre cómo resolver problemas reales, sino una batalla sobre qué es real. Si el cambio climático, los resultados electorales o la eficacia de las vacunas son «hechos alternativos», la democracia se bloquea. No se puede legislar sobre un suelo que se mueve constantemente.

Los algoritmos son los aceleradores de partículas de hechos alternativos. El algoritmo de las redes sociales está diseñado para la retención, no para la verdad. Si un usuario muestra interés en las críticas de Vance a los «expertos», el algoritmo dejará de mostrarle datos científicos o hechos contrastados porque eso genera fricción y hace que el usuario abandone la app. El algoritmo crea una muralla digital que protege los hechos alternativos de refutación. El usuario vive en una realidad donde Vance siempre tiene razón. Y no necesita convencer a todo el país, basta con hacer micro-targeting, fragmentar el mensaje para que cada grupo reciba el hecho alternativo que más resuene con su dolor personal, manteniéndole pegado a la pantalla y emocionalmente movilizado. Cuando el algoritmo muestra a un usuario miles de comentarios que apoyan la visión de Vance, el cerebro humano asume que «esta es la verdad».

La metáfora del acelerador de partículas explica por qué hoy una mentira o un matiz ideológico puede destruir la convivencia de un país en cuestión de horas, porque la tecnología le ha dado una velocidad y una energía que la verdad factual, siempre más lenta y aburrida, no puede alcanzar.

Un ejemplo estremecedor de acelerador de partículas de los hechos alternativos es el de los bulos sobre los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, durante la campaña electoral norteamericana en septiembre de 2024.

Todo comenzó con una publicación anónima en un grupo local de Facebook que afirmaba, sin prueba alguna, que los inmigrantes

haitianos estaban «robando y comiéndose a las mascotas, perros y gatos, de los vecinos». Era una partícula, un hecho alternativo diseñado para disparar el miedo más primario. El algoritmo detectó que este contenido generaba una indignación masiva y en cuestión de horas saltó de Facebook a X (antes Twitter) y a TikTok, amplificado por cuentas de gran alcance. El acelerador. La imagen del «extraño» que se come tu mascota es tan visual y visceral que el algoritmo la priorizó sobre cualquier desmentido oficial de la policía o el alcalde de Springfield, quienes confirmaron que no había denuncias ni pruebas de tales hechos. Aquí es donde entra el papel de J.D. Vance dando validación política. A pesar de que su propio equipo fue advertido por las autoridades locales de que el rumor era falso, Vance lo publicó en sus redes sociales, argumentando que sus electores «sentían» que su ciudad estaba cambiando y que él debía darles voz. Llegó a decir en una entrevista en la CNN que «si tengo que crear historias para que los medios presten atención al sufrimiento del pueblo estadounidense, lo haré». Esto es la deshumanización del conciudadano en estado puro: se utiliza una falsedad para señalar a un colectivo entero como una amenaza física. ¿El impacto? La destrucción de la convivencia. La velocidad y la energía tuvieron consecuencias violentas y reales en el mundo físico. Se evacuaron escuelas, hospitales y ayuntamientos debido a amenazas de grupos extremistas. Los ciudadanos haitianos, muchos de ellos legales y trabajadores, tuvieron miedo de salir de sus casas o llevar a sus hijos al colegio. Los vecinos dejaron de compartir una misma realidad, un mismo suelo. Unos veían una crisis humanitaria y de convivencia; otros, convencidos por el algoritmo y Vance, veían una «invasión de salvajes». De alguna forma, se estaba ya abonando el terreno para la estrategia que emprenderían una vez en el poder a través de la agencia ICE.

Ya no importa si algo es verdad. Importa si genera la energía suficiente para movilizar a una «tribu». Cuando la mentira es total, no es que creas la mentira, es que pierdes el sentido de la realidad. En Springfield el «suelo común de hechos compartidos» se hundió bajo el peso de un bulo que corrió más rápido que la verdad porque

el algoritmo y la estrategia política de Vance le dieron las alas necesarias.

Los algoritmos operan también como aceleradores de partículas del malestar ciudadano, toman emociones sociales latentes —precariedad económica, ansiedad ecológica, miedo a la migración, inseguridad cultural e identitaria— y las multiplican mediante dinámicas de repetición, predicción y exposición continua. Los sistemas de recomendación ya no solo reflejan nuestros temores, sino que los intensifican al encerrarnos en bucles de contenido cada vez más cargado emocionalmente. El malestar se convierte en estructural. En un entorno donde los algoritmos priorizan el contenido que genera reacciones fuertes, las narrativas populistas prosperan porque explotan los sentimientos de agravio, injusticia o abandono. La desinformación se esparce más rápido, hasta seis veces más, en momentos de malestar social porque los algoritmos amplifican lo más emocionalmente disruptivo.

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk en 2025 se convirtió en un punto de inflexión para entender el funcionamiento de los algoritmos como aceleradores del malestar social. El 10 de septiembre de 2025, Charlie Kirk —fundador de Turning Point USA, una organización dedicada a la difusión de ideas conservadoras en institutos y universidades estadounidenses— fue asesinado mientras pronunciaba un discurso en la Universidad del Valle de Utah en Orem. Este evento, ya de por sí traumático dentro de ciertos sectores conservadores, ocurrió en un país que venía de años de polarización, teorías conspirativas y desconfianza institucional. Ese malestar previo se volvió la partícula inicial que luego los algoritmos amplificarían. Tras su muerte comenzaron a circular múltiples mensajes en redes sociales que atribuían al propio Kirk declaraciones que nunca hizo, fabricaban frases o manipulaban extractos para ajustarlos a narrativas ideológicas de sus seguidores o detractores. Estos contenidos se viralizaron rápidamente porque se insertaban en un clima emocional intenso. Los algoritmos, al detectar un aumento abrupto de interacción (búsquedas, comentarios, publicaciones),

amplificaron aún más estos contenidos falsos. Además de atribuciones falsas, también se difundieron mensajes políticos que distorsionaban la reacción social y partidaria ante el asesinato. Por ejemplo, una publicación viral afirmaba falsamente que «ni un solo republicano condenó» un ataque político previo en Minnesota, usando el contexto del caso Kirk para reforzar esa acusación. Sin embargo, FactCheck.org verificó que numerosos republicanos —incluyendo Donald Trump— sí condenaron el ataque, demostrando que la afirmación era falsa. Como ocurre con la desinformación emocional, el algoritmo impulsó estos contenidos porque generaban indignación, debates polarizados y alto tiempo de pantalla. Este tipo de contenido funciona extremadamente bien en plataformas algorítmicas porque alimenta tribalismos y reafirma prejuicios. La combinación «evento traumático + rumor político + emoción intensa» activa la amplificación automática. Además, los algoritmos no solo amplificaron rumorología humana, sino que generaron desinformación por sí mismos. Según la cadena de televisión CBS News, sistemas como Grok, el buscador basado en IA Perplexity, y los resúmenes algorítmicos de Google produjeron información falsa sobre lo ocurrido tras la muerte de Kirk. Estos errores no ocurrieron por intervención humana directa, sino porque los modelos detectaron un pico de interés y rellenaron vacíos informativos con inferencias erróneas, que luego fueron consumidas como si fueran datos reales.

En resumen, el acelerador de partículas usa un evento real que genera emoción, la emoción genera tráfico, el tráfico provoca que los algoritmos aumenten la velocidad de difusión, y esa aceleración produce desinformación adicional que entra nuevamente en el sistema. El malestar deja de ser un residuo y se convierte en modelo de negocios.

Es interesante el caso de los jóvenes y TikTok. El Digital News Report del Reuters Institute señala que el 44 % de los jóvenes de 18 a 24 años en el promedio global declara que las redes sociales y las plataformas de vídeo (como TikTok) son su fuente principal de

noticias, por encima de medios tradicionales como la televisión o webs de periódicos. Auge de influencers como nuevos líderes de opinión, no sujetos a las normas de ética periodística. Declive del modelo de negocio de los medios de comunicación tradicionales.

Un estudio reciente de New Media and Society muestra que la plataforma crea cámaras de eco políticas altamente aisladas, en especial entre los usuarios conservadores, que rara vez se exponen a voces discrepantes. Esta estructura algorítmica amplifica el descontento juvenil al reforzar emociones intensas y fomentar la producción de contenido cada vez más polarizado, motivado por el sistema de recompensas de likes y comentarios que impulsa a los usuarios más radicalizados a seguir publicando. Paralelamente, en Europa y en Estados Unidos, la extrema derecha ha aprendido a aprovechar esta lógica emocional: líderes como los analizados en campañas del Parlamento Europeo utilizan TikTok para mezclar narrativas de crisis con emociones aspiracionales —soltura, estilo, éxito personal—, logrando un enorme engagement juvenil mediante estrategias que reproducen y exageran mensajes antiélite, antimigración y nacionalistas.

Dentro de ese mismo ecosistema algorítmico prosperan también las masculinidades reaccionarias, alimentadas por el llamado algorithmic pipeline. Este fenómeno, documentado en plataformas como TikTok y YouTube, muestra cómo los jóvenes varones llegan a contenidos extremistas a través de rutas aparentemente inocentes: vídeos de motivación, autoayuda o humor sobre relaciones se convierten progresivamente en puertas de entrada hacia discursos sexistas, ultraconservadores o abiertamente ideológicos. El algoritmo acelera este recorrido porque prioriza lo que genera mayor reacción emocional —indignación, ansiedad, resentimiento— y lo transforma en una ruta de radicalización incremental. Este mismo circuito

convierte el malestar masculino en un modelo de negocio: influencers como Andrew Tate o creadores de contenido político venden cursos, membresías o ideologías empaquetadas como soluciones a la crisis identitaria juvenil, monetizando la insatisfacción personal que el propio sistema algorítmico contribuye a intensificar.

Y es que la ira, el miedo y la identidad enganchan mejor. Por eso el político más eficaz no es el más competente, sino el más viral. El algoritmo no crea el populismo, pero lo selecciona, lo pule y lo premia. Igual que el cine y la radio vehiculaban la voluntad en el nacimiento de la sociedad de masas de los años veinte y treinta del siglo xx. Pero entonces los servicios de radiodifusión fueron considerados servicio público, y el espectro radioeléctrico un bien perteneciente al Estado y afectado al uso general y fue regulado por los poderes públicos. Hoy, por las autopistas de la información cualquiera puede abrir su canal.

¿Pero es realmente tan nueva la manipulación política a través de algoritmos y redes sociales? ¿No la vimos ya durante la época fascista de entreguerras o durante la propaganda en la Guerra Fría? Lo nuevo no es la manipulación política, sino su forma. Y esta forma hoy determina que el retroceso democrático sea más difícil de detectar, más rápido y difícil de regular, porque opera a través de infraestructuras privadas globales que moldean la esfera pública sin supervisión democrática. La globalización digital permite una manipulación ultralocalizada.

La manipulación ya no requiere grandes estructuras estatales o mediáticas de radio, televisión o prensa; los algoritmos automatizan y amplifican el proceso en tiempo real. Cambia de manera significativa la escala —global, ya que cualquiera desde cualquier punto puede interferir en el espacio político de otro— y la velocidad. Cambia también la capacidad para fragmentar. Ya no existe «un debate público», sino miles de microesferas paralelas, y tantas

propagandas como ciudadanos individuales a quienes se puede llegar de manera personalizada basándose en datos de comportamiento, preferencias, emociones y conexiones sociales. En el siglo xx, la propaganda era visible, identificable y reconocida como tal. El ciudadano sabía que un mensaje procedía de un gobierno, un partido o un medio concreto. Hoy, la lógica algorítmica es invisible, el usuario no sabe por qué ve lo que ve ni quién decide qué prioriza su feed. La influencia es inconsciente, distribuida y basada en modelos de predicción conductual. La polarización deja de ser un fenómeno lineal y se convierte en un proceso autorreforzado por algoritmos, continuo y adaptativo. Ya no se trata de hacer cambiar de opinión, sino de influir, alterar o degradar la cognición —percepciones, emociones, memoria, atención, razonamiento— aprovechando la hiperconectividad digital. Es la guerra cognitiva. En el pasado, la manipulación provenía sobre todo del Estado —censura oficial, monopolios públicos de medios, propaganda gubernamental—. Hoy, la ejercen empresas privadas tecnológicas cuyos algoritmos son opacos y no están sometidos a controles democráticos. Estas plataformas operan como auténticos «poderes privados» que influyen en la libertad de información y pluralismo al margen del Estado. El retroceso democrático se produce sin intervención estatal, mediante actores privados que controlan el flujo de información global. Por eso hay que exigirles responsabilidad.

El declive de la democracia es visible en Estados Unidos. Una concentración de poder sin precedentes en manos del presidente, que gobierna por decreto, a espaldas del Congreso. Récord de demandas judiciales contra la administración. Aumento exponencial de fuerzas paramilitares que acumulan violaciones de derechos y libertades. Presiones sobre universidades, despachos de abogados, think tanks y oponentes políticos por el hecho de serlo. La sociedad estadounidense está profundamente dividida y los algoritmos aceleran, intensifican y multiplican esa división. Según la Liga Antidifamación estadounidense, entre 2021 y 2024 hubo 61 asesinatos motivados políticamente, todos cometidos por

extremistas de derecha. Los algoritmos no inventaron la violencia política, pero la amplificaron y la normalizaron.

Pero es en la Unión Europea donde la erosión democrática provocada por los algoritmos y las redes sociales tiene un impacto particularmente grave, más que en los Estados nacionales, debido a la especial fragilidad de su legitimidad institucional. Agrava un problema estructural: la Unión Europea, al ser una entidad supranacional y más distante del ciudadano, necesita un esfuerzo mayor para sostener su legitimidad, por lo que el efecto corrosivo de la desinformación y los algoritmos opacos incide con más fuerza sobre la percepción pública que en los Estados nacionales, cuyos sistemas institucionales están más arraigados y cuentan con vínculos identitarios y comunicativos más sólidos con sus ciudadanos.

No es de sorprender que la Unión Europea se haya convertido en un objetivo específico de campañas de desinformación y manipulación digital, incluidas aquellas impulsadas por actores extranjeros, principalmente Rusia, pero también China, que buscan debilitar su cohesión y credibilidad. Este fenómeno se amplifica por la arquitectura algorítmica de las plataformas, que priorizan contenidos polarizadores y virales, socavando la confianza en instituciones ya percibidas como complejas y lejanas.

Desde febrero de 2022 Rusia desplegó la operación «Doppelgänger» como una estrategia de desinformación internacional tras su invasión de Ucrania. Esta campaña utilizó copias falsas (copycat) de medios europeos reconocidos —como Die Welt, Le Point, La Stampa o Polskie Radio— para difundir narrativas antioccidentales y anti Unión Europea, incluyendo mensajes para erosionar la confianza en la Unión, atacar a políticos europeos y debilitar el apoyo a Ucrania. Estas noticias falsas eran amplificadas en redes sociales para incrementar su alcance. Su repetición y asombrosa similitud con los sitios reales inducían a los ciudadanos al error.

A comienzos de 2025, uno de los magnates de las redes sociales, Mark Zuckerberg, CEO de Meta y propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, adoptó un tono marcadamente confrontativo hacia la Unión Europea tras anunciar un giro profundo en las políticas de moderación de contenido en Meta. En un comunicado que generó gran controversia, Zuckerberg afirmó que Europa estaba «institucionalizando la censura», en referencia directa a la implementación de la Digital Services Act (DSA), la normativa europea diseñada para reforzar la transparencia algorítmica, frenar la desinformación y aumentar la responsabilidad de las grandes plataformas digitales. Esta declaración coincidió con la decisión de Meta de retirar mecanismos clave de moderación y fact-checking, al menos en Estados Unidos, y de trasladar parte de sus equipos de moderación a Texas, una señal que muchos interpretaron como un intento de presionar a las autoridades europeas y consolidar una posición más laxa frente a la regulación.

Su anuncio no fue un caso aislado; las Big Tech y la administración estadounidense habían engrasado la máquina de atacar a Europa. El 15 de febrero de 2025, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance acusó abiertamente a Europa —y en particular a la Unión Europea— de practicar censura y de alejarse de sus propios valores democráticos. El mayor peligro para Europa no provenía de Rusia ni de China, sino de «una amenaza interna», que definió como la supuesta tendencia europea a anular elecciones, restringir la libertad de expresión y silenciar voces populistas u opositoras. Citó específicamente el caso de la anulación de las elecciones en Rumanía, sosteniendo que esto demostraba un retroceso democrático. También denunció que las leyes europeas contra la desinformación se estaban usando para limitar el debate público. Vance fue todavía más directo al acusar a varios gobiernos europeos de censurar a sus propios ciudadanos, mencionando ejemplos como restricciones a contenidos en redes sociales o acciones policiales y judiciales contra determinados tipos de expresión. Señaló que, a su juicio, algunos líderes europeos estaban «huyendo de sus propios votantes» y que, si Europa

abandonaba sus valores de libertad de expresión, Estados Unidos reconsideraría su apoyo. Fue un ataque frontal a la legitimidad democrática de la Unión, con el propósito doble de debilitar su legitimidad como proyecto político y de apoyar a las fuerzas de extrema derecha en los países miembros. División europea, división dentro de cada Estado miembro. Divide et impera.

El ataque combinado es letal. La retirada de salvaguardas a escala global por parte de una plataforma influyente incrementa la vulnerabilidad del ecosistema digital europeo frente a la desinformación y la manipulación, precisamente en un momento en que la Unión ha identificado estas amenazas como uno de los mayores desafíos para la integridad democrática. Pero, además, las declaraciones de que la Unión Europea utiliza la regulación tecnológica como un mecanismo de censura debilitan la legitimidad de los esfuerzos reglamentarios europeos, dando munición a actores que buscan obstaculizar su aplicación. En realidad, no es solo un choque regulatorio, sino un conflicto de modelos de gobernanza digital y en último término de modelos de sociedad, con implicaciones profundas para la resiliencia democrática europea. Se pretende ridiculizar a Europa, como con el famoso meme del tapón de la botella, enfatizando que Europa es una potencia reguladora. Pero es necesario regular. Por eso atacan tanto las regulaciones de la soberanía digital que la Unión Europea ha llevado a cabo en este ámbito.

En las últimas dos décadas, las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses han adquirido un nivel de poder que desborda con creces la lógica empresarial tradicional. Ya no son solo compañías que ofrecen productos o servicios, sino infraestructuras esenciales de la vida social, cultural, económica y comunicativa. Su capacidad para mediar prácticamente todas las interacciones digitales les otorga un rol que antes pertenecía únicamente a los Estados: fijan normas de participación, controlan los espacios donde circula la información y determinan qué comportamientos son aceptables. En

la práctica, actúan como poderes soberanos que gobiernan territorios no geográficos, sino informacionales.

Estas plataformas regulan el discurso público mediante algoritmos y políticas internas que definen qué se ve, qué se oculta y qué se sanciona. Aunque lo presenten como decisiones técnicas, sus sistemas de moderación funcionan como formas de regulación normativa: establecen límites, jerarquías y consecuencias. El alcance de estas decisiones es inmenso, pues millones de personas dependen de estas plataformas para informarse, expresarse o interactuar. En muchos casos, la influencia de estas reglas supera la de las legislaciones nacionales, ya que operan de forma global y casi instantánea.

Además, las Big Tech deciden la visibilidad: sus algoritmos de recomendación, filtrado y priorización moldean la atención colectiva. No solo seleccionan qué contenidos consideran «relevantes», sino que crean los incentivos que determinan cómo se produce la información y cómo se comportan los usuarios. Quien controla la distribución de la atención controla, en gran medida, el ecosistema cultural. Esto convierte a estas empresas en árbitros de relevancia, capaces de alterar tendencias, amplificar voces o generar silencios masivos.

Y el modelo de negocio basado en datos y predicción confiere a estas compañías un poder estructural sin precedentes. Pueden establecer los incentivos que rigen la economía de la visibilidad —likes, métricas, recompensas, penalizaciones— y esa arquitectura de incentivos influye tanto en creadores como en audiencias. En este sentido, ya no solo proveen un servicio: configuran las reglas del juego de todo un entorno social digital. Esto es lo que ha llevado a muchos analistas a afirmar que las Big Tech no funcionan simplemente como corporaciones, sino como auténticos poderes soberanos privados que moldean el ágora contemporánea.

Las Big Tech han mostrado históricamente una fuerte afinidad por las teorías de la abundancia, en especial aquellas que proyectan un futuro donde el crecimiento tecnológico garantiza recursos, información y oportunidades casi ilimitadas. Esta visión encaja con su ADN cultural: empresas surgidas de la mentalidad californiana del think big, convencidas de que la innovación exponencial puede resolver problemas estructurales de la humanidad. La promesa de la abundancia —energía barata, información accesible para todos, automatización que libera tiempo humano— sirve de justificación ideológica para su expansión y para el desarrollo continuo de plataformas que aspiran a escalar de forma infinita. Lo explicó Elon Musk en el Foro Anual de Davos en enero de 2026: «Si queremos resolver la pobreza en el mundo o asegurar altos niveles de vida, la única vía es la abundancia para todos a través de la IA y la robótica. Si tienes una inteligencia artificial ubicua que sea esencialmente gratuita o casi gratuita, y una robótica igualmente ubicua, tendrás una explosión de la economía global verdaderamente sin precedentes».

En el centro de esta atracción se encuentra la idea de que los bienes digitales tienden naturalmente a la abundancia. A diferencia de la economía material, donde la escasez es el principio organizador, el mundo de los datos y el software permite replicar, distribuir y optimizar procesos a un coste marginal cercano a cero. Y han construido modelos de negocio enteros sobre esta lógica: más usuarios generan más datos, más datos generan mejores servicios, y mejores servicios atraen aún más usuarios. La abundancia deja de ser un ideal filosófico y se convierte en un motor económico. Su promesa no es solo la de producir mucho, sino la de producir sin límites.

Las teorías de la abundancia funcionan como una narrativa capaz de legitimar grandes apuestas tecnológicas: desde la inteligencia artificial hasta la computación cuántica, pasando por las redes globales de infraestructura digital. Para estas empresas, imaginar un futuro donde las limitaciones actuales desaparecen permite justificar

inversiones masivas y a largo plazo, así como captar talento y capital bajo la promesa de participar en la construcción de un «mañana sin restricciones». También permite justificar la necesidad de evitar limitaciones en forma de reglas de juego, a las que se acusa de limitar la innovación y por lo tanto la abundancia. Esta retórica también suaviza las tensiones sociales y las desigualdades que generan su escala y su poder, presentando la concentración tecnológica no como un riesgo, sino como un paso necesario para desbloquear la próxima era de prosperidad.

Sin embargo, la atracción por la abundancia también tiene un reverso. Una concentración sin precedentes de poder económico: Elon Musk es más rico que el 80 % de los países del mundo y Meta vale más que el PIB anual de los Países Bajos. Las Big Tech subestiman o minimizan las capas de escasez que persisten en el mundo físico: recursos energéticos, materiales críticos, atención humana, estabilidad social y tiempo. La abundancia informacional no resuelve automáticamente las limitaciones materiales. Y, paradójicamente, las mismas plataformas que prometen abundancia operan sobre economías de atención profundamente escasas, donde la competencia por la visibilidad es feroz. Esta tensión revela un contraste entre la utopía tecnológica y las dinámicas sociales reales, recordando que las teorías de la abundancia son tanto una brújula para imaginar el futuro como una narrativa estratégica que da forma al presente. La gran pregunta del siglo xxi no es si la IA traerá abundancia, sino quién decide qué hacer con ella. Porque una sociedad puede ser tecnológicamente rica y extremadamente desigual.

Pero la tensión entre las Big Tech y Europa no se reduce a una disputa económica o tecnológica: descansa sobre dos culturas políticas profundamente distintas. En Silicon Valley domina una visión marcada por el tecno-optimismo, la fe en el mercado y la idea de que la innovación exponencial puede crear un futuro de abundancia donde la escasez deja de ser el principio organizador de la vida social. Esta mentalidad impulsa a las grandes empresas

tecnológicas a expandirse rápidamente, romper límites regulatorios y confiar en que el progreso técnico resolverá problemas estructurales. Para este imaginario, la regulación es algo que llega después de la disrupción —o incluso un freno innecesario—, y el riesgo es un motor legítimo del progreso económico y social.

Europa, en cambio, se construyó sobre una cultura política donde el Estado, la regulación y la protección social tienen un papel central. La historia del continente —guerras, escasez, reconstrucción, creación de Estados de bienestar— ha consolidado una visión del progreso como algo gradual, negociado y fuertemente institucionalizado. Desde esta perspectiva, la tecnología debe operar dentro de límites democráticos, garantizando derechos, soberanía de datos y equilibrio social. Por eso, mientras Silicon Valley promueve una narrativa de abundancia ilimitada, donde la tecnología es neutral, los mercados saben mejor que la política, los sistemas funcionan mejor sin interferencias humanas y los problemas sociales son, en el fondo, problemas de diseño, Europa se mantiene en una tradición que considera la gestión de la escasez, la equidad y la seguridad ciudadana como prioridades esenciales. El resultado es un choque no solo de modelos económicos, sino de filosofías políticas: una cree en la expansión sin fricción; la otra, en la protección frente a los excesos de esa expansión. No es colapso civilizatorio, como clama la administración estadounidense. Son dos concepciones distintas de la civilización.

Durante décadas, las democracias liberales pudieron explicar el malestar social como un efecto colateral de la globalización. Las deslocalizaciones, la desindustrialización, la pérdida de empleos industriales o los territorios abandonados eran una realidad como también lo era la promesa de futuro: «Puede que perdáis hoy, pero vuestros hijos vivirán mejor mañana». La IA, que no es sino un conjunto de algoritmos avanzados capaces de aprender, generalizar e incluso tomar decisiones, rompe esa narrativa. Se generan mayores desigualdades que afectan de manera particular a las clases medias y ya no solo a trabajadores de cuello azul, sino también a los

white collars. En el Foro Económico de Davos de enero de 2026, el CEO de Claude IA, Dario Amodei, explicó que en seis meses toda la programación de la IA sería realizada por la propia IA.

La IA no amenaza únicamente el empleo: cuestiona la arquitectura moral que sostuvo a las democracias modernas durante dos siglos. La noción de utilidad social —la idea de que cada individuo desempeña un rol que contribuye al bienestar común— ha sido el cemento que vinculó ciudadanía, trabajo y pertenencia. Cuando las máquinas comienzan a realizar tareas que antes eran consideradas exclusivamente humanas —desde la producción y la organización hasta la interpretación y el juicio—, se quiebra ese pacto implícito entre la persona y la comunidad. Si el trabajo deja de ser el espacio donde los individuos demuestran su valor y se conectan con el colectivo, la democracia pierde una de sus fuentes esenciales de legitimidad interna. Y cuando un individuo deja de sentirse útil a su comunidad, la promesa democrática pierde legitimidad: se resquebraja la confianza horizontal, el espacio público se fragmenta y la política se vuelve una disputa por identidades heridas en busca de relevancia.

La IA, al desplazar y absorber funciones cognitivas y organizativas, no solo automatiza tareas: desplaza el sentido mismo de participación social. Una sociedad donde la aportación humana parece prescindible corre el riesgo de generar ciudadanos desanclados, que ya no se perciben necesarios ni escuchados. Esto alimenta frustración, resentimiento y desconfianza, y abre la puerta a formas de autoritarismo que prometen restaurar un orden de reconocimiento perdido. En este sentido, la mayor amenaza de la IA no es tecnológica, sino política: puede vaciar de contenido la idea de ciudadanía al romper el vínculo fundamental entre utilidad, dignidad y pertenencia sobre el que se edificó la democracia. Aquí es donde podemos cavar la tumba de la democracia liberal.

La IA y los algoritmos marcan el amanecer de un nuevo orden político que ya no se parece en nada al ideal ateniense, donde cada

ciudadano participaba, aunque fuera mínimamente, en la construcción del destino común. Hoy, el «demos» ha sido reemplazado por arquitectos invisibles del futuro: un puñado de corporaciones, ingenieros y gobiernos que moldean el mundo a través del código. Su poder no deriva de la deliberación ni del consenso, sino de la capacidad de anticipar, clasificar y dirigir comportamientos humanos a escala masiva. En esta arquitectura algorítmica, la participación ciudadana es una ficción cómoda: unos pocos diseñan el porvenir, muchos lo consumen sin comprenderlo, y otros tantos lo sufren en silencio, atrapados en dinámicas que nunca votaron ni pueden revertir. Y cuando un individuo deja de sentirse útil a su comunidad, la promesa democrática pierde legitimidad: se resquebraja la confianza horizontal, el espacio público se fragmenta y la política se vuelve una disputa por identidades heridas en busca de relevancia.

Las democracias contemporáneas —herederas lejanas del ágora griega— corren así el riesgo de convertirse en cartón piedra, escenarios vacíos donde se representan rituales cívicos sin contenido real. Elecciones, parlamentos y debates se mantienen como formas, pero la sustancia del poder se desplaza hacia infraestructuras técnicas que escapan al control democrático. Mientras los algoritmos modulan emociones, hábitos y percepciones, el ciudadano deja de ser sujeto político para convertirse en variable estadística dentro de sistemas que optimizan todo menos la libertad. La IA no solo anuncia el fin de ciertos trabajos: anuncia el fin de una idea de democracia en la que todos tenían un lugar y una función. Y si Europa no actúa, corre el riesgo de ser solo espectadora de esa metamorfosis histórica.

¿Y qué significa actuar? En primer lugar, proteger el marco normativo para regular el uso de la IA y de los algoritmos que la Unión Europea ha adoptado de manera democrática del asalto de las tecnológicas estadounidenses y de la propia Administración, que regularmente amenaza al Viejo Continente con sanciones si no se pliega a sus deseos. No les gusta el «AI Act», la primera legislación

integral del mundo dedicada a regular la inteligencia artificial, que establece un marco basado en el riesgo donde las obligaciones aumentan según el impacto potencial de cada sistema. La norma, en vigor desde el 1 de agosto de 2024, clasifica la IA en riesgo mínimo, transparencia limitada, alto riesgo y riesgo inaceptable, prohibiendo prácticas como la puntuación social o la manipulación perjudicial, y exigiendo requisitos estrictos —supervisión humana, calidad de datos, evaluación y mitigación de riesgos— para los sistemas de alto riesgo en ámbitos como salud, empleo o servicios esenciales. También introduce obligaciones específicas para los modelos de IA de propósito general y sistemas generativos, refuerza la transparencia (incluida la obligación de informar cuando se interactúa con IA) y crea una Oficina Europea de IA que coordina la supervisión y la aplicación del reglamento. Con este marco, la Unión Europea busca proteger derechos fundamentales, la seguridad pública y la democracia, sin frenar la innovación tecnológica.

Tampoco les gusta el DSA (Ley de Servicios Digitales) que obliga a plataformas, redes sociales y servicios online a moderar contenido ilegal, proteger derechos fundamentales y ofrecer transparencia algorítmica, incluyendo explicar cómo funcionan sus sistemas de recomendación y permitir al usuario desactivarlos. Las plataformas deben publicar informes periódicos, facilitar datos a investigadores y crear mecanismos eficaces para gestionar riesgos sistémicos como la desinformación, el discurso del odio o los impactos sobre el discurso cívico y los procesos electorales. Las plataformas muy grandes tienen obligaciones reforzadas debido a su impacto.

También se quejan del DMA (Ley de Mercados Digitales) que se dirige a las grandes plataformas digitales que actúan como gatekeepers —como motores de búsqueda, redes sociales o tiendas de apps— para evitar abusos de poder y garantizar mercados más justos y competitivos. Establece obligaciones y prohibiciones claras: los gatekeepers deben permitir la interoperabilidad, no pueden favorecer sus propios servicios de forma desleal y deben facilitar el acceso a ciertos datos empresariales y métricas clave. Su objetivo es

limitar el poder estructural de los gigantes tecnológicos y complementar las normas de competencia existentes, reforzando la contestabilidad del mercado y evitando prácticas que puedan perjudicar a consumidores y empresas europeas.

Y también de la Data Act, la Ley de Datos que regula el acceso, uso y compartición de los datos generados por productos conectados y servicios digitales, como dispositivos IoT, maquinaria industrial, vehículos inteligentes o electrodomésticos conectados. Su propósito es corregir la asimetría entre fabricantes/proveedores —que tradicionalmente controlaban los datos generados por sus dispositivos— y los usuarios, otorgando a estos últimos el derecho a acceder, usar y compartir esos datos fácilmente y sin coste adicional. También limita cláusulas contractuales abusivas, exige interoperabilidad y garantiza un marco más competitivo, evitando que los datos se conviertan en cotos privados que refuercen posiciones dominantes.

Súmese a esto la legislación para mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan a través de plataformas digitales, y que incluye la obligación de estas de garantizar la transparencia y supervisión humana en la gestión algorítmica: las plataformas deben informar a los trabajadores sobre los criterios usados por sus algoritmos —incluido seguimiento, asignación de tareas o evaluación del rendimiento— y garantizar que cualquier decisión automatizada que afecte a las condiciones de trabajo pueda ser revisada por una persona.

Donde Europa ve defensa del consumidor, mejores condiciones laborales, control de prácticas monopolísticas o anticompetitivas y protección de la democracia, Estados Unidos ve censura, amenaza a la libertad de expresión, tiranía digital, extraterritorialidad y discriminación a sus empresas. En realidad, les preocupa que Europa pueda limitar el poder de los algoritmos y de sus dueños y que el modelo europeo pueda ser emulado por otros países. Por eso ahora

más que nunca hay que defender su integridad. No se puede negociar con la democracia, ni siquiera para apaciguar.

Resulta paradójico que Estados Unidos —país que construyó su identidad económica sobre el desmantelamiento de monopolios como Standard Oil o AT&T— hoy proteja de facto a sus gigantes tecnológicos frente a regulaciones como el DSA o el DMA. Esta paradoja se explica, por un lado, por la rivalidad estratégica con China, que lleva a Washington a considerar las Big Tech activos esenciales para mantener su supremacía tecnológica y evitar que Pekín gane terreno en IA, datos e infraestructura digital; y, por otro, por la profunda imbricación entre tecnoindustria y defensa: las Big Tech, y aquí sobresale Palantir, forman parte del ecosistema que sostiene la inteligencia militar, la ciberseguridad y la infraestructura crítica de Estados Unidos, lo que incentiva al gobierno a proteger su poder de mercado en vez de limitarlo. Pero no nos engañemos, también se explica porque la ausencia de reglas favorece la lucha por el poder político: quien controla las mentes captura los votos. Por eso no sorprende el intento federal de frenar la regulación estatal o subfederal de la IA, como el proyecto que buscaba prohibir a los estados regular la IA durante cinco o diez años, impulsado por la Administración Trump, pero que fue rechazado por el Senado (99-1). Por eso no debemos perder la esperanza de que quizá también veremos una resistencia desde los estados federados.

Pero volvamos a Europa. Proteger la democracia europea exige algo más que regulación sectorial o fondos para la innovación: implica redefinir la utilidad social en clave de soberanía democrática. Europa debe reclamar capacidad de decisión sobre los algoritmos que median su vida común y, a la vez, construir un nuevo contrato cívico que asigne valor político a contribuciones no sustituibles por máquinas: cuidado, deliberación, creación cultural, servicio público, mediación social. Solo así el continente podrá salir de su aislamiento: no como consumidor pasivo de tecnologías ajenas, sino como arquitecto de un ecosistema digital en el que la centralidad humana no sea una consigna retórica, sino la condición de posibilidad de la

libertad, la igualdad y la fraternidad que la fundaron. Si la IA desplaza a las personas de su rol social, la respuesta europea no puede ser la nostalgia ni la tecnofobia, sino una política de sentido: asegurar que cada ciudadano siga siendo imprescindible para la comunidad que lo reconoce y que, por ello, le debe derechos.

Todo ello dentro de un nuevo relato democrático. Un relato que restablezca una conexión emocional real, que no hable únicamente a la razón, sino también al sentimiento; que reconozca las desigualdades regionales no como fallas inevitables, sino como heridas que pueden y deben ser curadas; que hable de dignidad, de pertenencia, de seguridad vital y no solo de competitividad o métricas de convergencia. Frente al avance del populismo, este relato debe ofrecer algo que sus adversarios no pueden dar: una comunidad basada en la igualdad de respeto, no en la uniformidad; en la protección mutua, no en el resentimiento; en la libertad compartida, no en la exclusión. Solo si Europa rehace su propio sentido podrá defender su democracia frente a la desafección interior y las presiones exteriores. Y solo así podrá volver a ser sentida como lo que realmente es: un proyecto de civilización... europeo. Sin regulación solo habrá abismo.

10

NOSOTROS Y LOS OTROS

¿Qué es Europa hoy: una comunidad de valores o una comunidad de intereses? Esta cuestión ha ocupado a especialistas de las relaciones internacionales durante siglos. Pero hoy no es una pregunta académica. Ha entrado de lleno en el centro de poder europeo en el momento en que Europa descubre que la soledad no es un estado, sino una condición geopolítica cuando tus aliados dudan, tus adversarios amenazan y tus valores ya no ordenan el mundo. En un momento en que los europeos viven la geopolítica como ansiedad, desconcierto o temor al abandono.

El 9 de marzo ante los embajadores de la Unión Europea reunidos en Bruselas y en medio del fragor de las bombas cayendo sobre Oriente Próximo, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen decía:

Europa no podrá seguir siendo la guardiana del viejo orden internacional en un mundo que se ha ido para no volver. Siempre defenderemos y respetaremos el sistema internacional basado en reglas, aquel que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos contar con este como la única manera de defender nuestros intereses ni asumir que las reglas nos protegerán de las amenazas complejas que nos acechan. Necesitamos construir nuestra propia vía europea y encontrar nuevas maneras de cooperar

con nuestros socios... Necesitamos una política exterior más realista y guiada por intereses.

Se parecía mucho al mensaje enviado por el canciller alemán apenas unos días antes cuando dijo: «El orden mundial basado en reglas ya no existe». No fue un desliz verbal. Refleja la voluntad de transformación histórica que cuestiona el viejo papel de la Unión Europea como guardiana del multilateralismo y que abre la puerta a una política exterior menos jurídica y más estratégica. Su pronunciamiento revela que la guerra entre Israel y EE. UU. contra Irán ha actuado como catalizador filosófico, no solo geopolítico.

Muchos en Europa mostraron perplejidad. La réplica no se hizo esperar. Ante el mismo plantel un día después el presidente del Consejo Europeo António Costa defendió que Europa debe seguir sosteniendo el orden internacional basado en normas y la Carta de la ONU. Dijo: «Europa debe defender el orden internacional basado en reglas. Debemos defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas, tal y como dicen nuestros Tratados. No debemos aceptar violaciones del derecho internacional ni tampoco violaciones de los derechos humanos». Y añadió: «Nos interesa garantizar que el mundo siga basándose en normas y en la cooperación». No era postureo, era otra manera de entender cuál es el interés europeo.

Porque el debate no va sobre Irán, ni solo sobre Ucrania; va sobre el alma de la política exterior europea. Durante décadas, Europa creyó que su fuerza consistía en no parecerse a los imperios. Hoy empieza a preguntarse si esa virtud se ha convertido en una fragilidad. La cuestión de fondo es si Europa puede aprender a proyectar poder sin dejar de ser reconocible para sí misma. No va de orden o de desorden, sino de saber si Europa es hoy capaz de defender un orden internacional basado en reglas.

Para responder tenemos que empezar por establecer algunas certezas. La primera de ellas es precisamente el derrumbe de las certezas transatlánticas. El Occidente hoy somos nosotros, Estados Unidos se ha marchado. No es aliado —eso dice más del 80 % de los europeos—, pero es claramente un socio necesario, y lo es por la gran interdependencia que caracteriza nuestra relación. Y lo es también por los grandes vínculos y afectos construidos a lo largo de décadas. Y lo es porque nuestra puerta debe seguir abierta. Pero el vínculo transatlántico ya no ofrece certidumbre moral ni la previsibilidad estratégica. Ya no puede darse por descontado como comunidad política de valores compartidos. Incluso cuando Bruselas modera el tono, Washington actúa desde una lógica transaccional. El cambio en la relación es estructural, no coyuntural, porque así lo quieren al menos la mitad de los estadounidenses.

Pero este derrumbe no lo causa solo Washington. Rusia dinamita el derecho internacional por la vía militar, invadiendo Ucrania, un país europeo libre y soberano. China lo vacía por la vía selectiva, comercial y tecnológica. Israel y la guerra con Irán intensifican en Europa la sensación de doble rasero y de impotencia normativa. Todos ellos actúan como aceleradores de un cambio de época.

La segunda certeza es que la política exterior no consiste en elegir entre pureza moral o cinismo, consiste en la gestión satisfactoria de las incoherencias. Quien se coloca del lado de la pureza pronto descubre que defender derechos humanos debe compaginarse con acceder a materias primas críticas en manos de quienes los violan. Que liderar la transición verde depende de proveedores autoritarios y que quedarse en las energías fósiles también. Que defender la legalidad internacional requiere a veces de un paraguas de seguridad que no siempre la respeta.

Pero Europa tampoco es realismo desnudo. Sus cimientos se asentaron en la posguerra sobre valores liberales: democracia, derechos humanos, Estado de derecho, multilateralismo e integración. Esos valores no son cosméticos, son el núcleo identitario

europeo. Pero defenderlos exige unidad, poder y autonomía estratégica. Por eso el verdadero problema de la política exterior europea no es el veto, el verdadero problema es la falta de conciencia compartida de amenaza y de destino.

Y, además, lo que mata la política exterior es el doble rasero pretencioso, es decir, el que va vestido de superioridad moral. Le ha ocurrido a la Unión Europea en Ucrania, Gaza e Irán. En política exterior es a menudo inevitable caer en contradicciones, pero cuando esto ocurre es mejor asumirlas y explicarlas, que pretender que no existen porque esto permite también apuntar a las contradicciones y dobles raseros de los demás. Por eso no hay política exterior inocente. Lo que tiene que distinguir a Europa no es la ausencia de contradicciones, sino la forma en que decide administrarlas.

La tercera certeza es que Europa no puede permitirse un mundo regido solo por la fuerza. Su identidad política —basada en la ley, en la búsqueda del compromiso, en el multilateralismo y en los valores liberales — solo puede sobrevivir dentro de un marco internacional regulado. Por eso, el interés fundamental de la Unión Europea es preservar, reformar y defender un orden basado en reglas. Sin un orden, Europa pierde capacidad de acción y su voz se diluye. Para Europa la existencia de un orden internacional no es un lujo moral, es una necesidad estratégica. Si abandona el ser gendarme de un orden fuera, debilita su capacidad de serlo dentro de la Unión Europea, donde también abundan las violaciones del orden… europeo. Esta es hoy la postura más realista que Europa puede adoptar.

Pero volvamos a la pregunta: ¿puede Europa defender sus intereses y valores sin instrumentos de poder, o eso la condena a la irrelevancia moral?

La respuesta es un rotundo sí. Sí se puede. Pero ello requiere un nuevo internacionalismo: más rápido, más flexible y de filo más

duro.

La Unión Europea necesita menos fetichismo institucional, menos procesos y más resultados. Y para alcanzar estos se requerirá trabajar cada vez más con coaliciones flexibles dentro de la UE, pero también con países terceros a geometría variable. Requerirá también menos nostalgia del viejo orden y más capacidad para operar en el nuevo.

Este nuevo internacionalismo demanda de Europa ser capaz de proyectar poder en todas sus dimensiones, incluida la militar. La experiencia de Ucrania, Gaza y el Sahel mostró que el poder blando sin instrumentos duros no basta. Por eso una política exterior real requiere de capacidades militares. Pero a la vez Europa no debe abandonar su poder blando. Ello también le da profundidad geopolítica, calidad de alianzas y en último término amigos más fiables. Europa ya no puede limitarse a describir el mundo; tiene que intervenir en él. No es belicismo, pero sí capacidad de presión, de disuasión y de decisión. No se trata de militarizar el alma europea, sino de evitar que sus valores queden desarmados.

Europa tiene que endurecerse, pero sin dejar de ser Europa. Con más defensa europea y coordinación industrial; con sanciones más creíbles y sostenibles; con una política comercial que sirva también de instrumento geopolítico; con protección de infraestructuras, rutas y cadenas de suministro; y con el uso de un mercado único más integrado como palanca estratégica. Pero también con protección de los derechos humanos, con compasión, con solidaridad, porque estos son sus valores.

Europa tiene cartas, pero tiene que querer usarlas. La Unión Europea llegó a preparar un paquete de represalias comerciales de 93.000 millones de euros frente a EE. UU. lo cual muestra que Europa sí tiene bazas, pero a menudo duda en usarlas.

Insisto en que no se trata tanto de eliminar el derecho de veto, sino de conciencia de amenaza compartida. Sin ella no habrá política exterior común. Sin comunidad política, el veto es secundario; el problema no es técnico, es existencial.

La asignatura pendiente de Europa: ¿Cómo sería un patriotismo europeo? Ciertamente no una identidad étnica ni un nacionalismo continental sino una lealtad cívica mínima; un sentimiento de pertenencia suficiente para asumir costes comunes; la convicción de que Vilna, Almería, Hamburgo y Lisboa participan de un mismo destino político.

Se da la paradoja de que Europa fue exitosa desmilitarizándose, pero ese éxito hoy la debilita; sigue pensándose como un actor querido por todos, cuando muchos la ven como hipócrita o irrelevante; sin una nueva imaginación política, su pesimismo puede volverse autodestructivo.

Las identidades políticas se reafirman en relación con alteridades. El problema europeo es que su definición de «nosotros» se ha construido demasiado tiempo por contraste con un pasado propio —fascismo, guerra, nacionalismo— y demasiado poco frente a los desafíos externos actuales. Europa tiene dificultades para saber quién es porque siempre pensó su identidad en negativo, no en proyección.

Hoy los «otros» ya no son solo Rusia o China: también es un Estados Unidos que desestabiliza, un ecosistema de ultraderechas conectadas y una esfera tecnológica que erosiona democracias.

Pero también existen otros «otros», distintos tanto de los adversarios como de los aliados fallidos, actores con los que Europa puede y debe construir. A veces no serán totalmente afines a sus valores ni plenamente alineados con sus intereses, pero comparten suficiente terreno común como para articular proyectos, equilibrar dependencias y ampliar su margen estratégico. Son socios de

geometría variable, países del sur plural —el sur global no existe— del vecindario europeo, de América Latina, de África, de Asia, del Mediterráneo, de Oriente Próximo, países que buscan autonomía y reglas, democracias imperfectas pero cooperativas, potencias regionales que desean estabilidad más que hegemonía, y también organizaciones multilaterales debilitadas pero reformables. Con ellos puede Europa generar coaliciones flexibles, alianzas temáticas y pactos de interés mutuo donde los viejos bloques ya no estructuran la política internacional. Estos «otros posibles» no resuelven la soledad europea, pero la hacen gobernable, y en algunos casos, creativa.

Pero volvamos a casa, porque toda política exterior empieza en casa. Se ve afectada por la polarización interna; por el auge de extremismos que debilitan el centro político; por la ira alimentada por los algoritmos, por las expectativas malogradas, por los desequilibrios territoriales y generacionales. Todo eso limita la proyección exterior.

Sin un mínimo patriotismo europeo, la política exterior común seguirá siendo una suma de reflejos nacionales con bandera azul de fondo.

¿Cómo ser nosotros en un mundo de otros?

Aceptando que estamos transitando a otro orden que aún no está escrito pero cuya dirección solo podremos influir desde la fuerza y la firmeza. Aceptando que no podemos elegir entre valores e intereses como si fueran compartimentos estancos sino gestionando incoherencias sin dejar que nos devoren. Entendiendo que hoy la división interna europea es un riesgo mayor que el veto, que sin un «nosotros» mínimo, no habrá geopolítica europea. Finalmente, con un poder nuevo: más duro, más rápido, pero no belicista; más estratégico, sin dejar de ser normativo.

¿Puede Europa reinventarse como actor de poder sin traicionarse como comunidad de valores, o acabará convertida en el tablero sobre el que juegan otros?

Durante mucho tiempo Europa creyó que bastaba con ser ejemplo. El mundo que viene exige algo más difícil: seguir siendo ejemplo sin dejar de ser fuerza. Nosotros y los otros ya no designa una geografía moral cómoda. Designa una lucha por definir quiénes somos cuando los aliados ya no se comportan como aliados y cuando el poder vuelve a hablar más alto que el derecho.

EPÍLOGO

Adam Phillips, psicoanalista y ensayista británico, acuñó el término «soledad fértil» como el lugar donde la soledad deja de ser un vacío amenazante para convertirse en espacio donde uno puede reencontrarse consigo mismo y desplegar creatividad, deseo y libertad interior. Esta soledad fértil no surge de una autosuficiencia rígida, sino de haber internalizado suficientes «cuidados» como para soportar la separación sin colapsar. Estar solo, para Phillips, es desplazarse desde el aislamiento al hallazgo de recursos internos. Es entonces cuando la soledad deja de sentirse como desamparo y empieza a operar como un territorio productivo donde se gestan nuevas formas de hacer, pensar y relacionarse.

Es esta la imagen que hoy puede animar a la Unión Europea: transformar su soledad geopolítica en agencia. Europa descubre que el mundo vuelve a abrirse y que le toca construir nuevas alianzas. La paradoja de la soledad es la libertad europea de elegir aliados. Sin Estados Unidos como polo gravitacional, Europa puede redefinir su mapa diplomático sin complejos, sin tutelas, sin miedo a perder una protección que ya no existe. Europa sola es vulnerable. Pero Europa sola puede elegir. Eso nunca había ocurrido.

¿Y si ese nuevo amanecer empezase en Reikiavik?

Qué ironía si la próxima ampliación de la Unión Europea tuviese color ártico y se llamase Islandia. Sería pequeña en escala, pero de impacto descomunal. La Unión Europea se proyectaría hacia el Ártico, hacia las nuevas rutas marítimas, hacia las materias primas y la seguridad energética, dotando a la Unión Europea de profundidad geopolítica. Islandia como símbolo de una Europa que extiende el perímetro de su comunidad política.

Islandia se estableció como república en 1944 tras terminar la unión personal con el rey de Dinamarca que se había iniciado en 1918. Los primeros años de independencia lo fueron de afirmación de su recién ganada soberanía, generando gran controversia local la decisión de ingresar en la OTAN en 1949 por lo que ello suponía de posible presencia militar extranjera. Su localización estratégica y el contexto de la Guerra Fría la acercaron a Estados Unidos, que estableció bases militares en el país que permanecieron operativas hasta 2006. De hecho, la cumbre histórica entre Reagan y Gorbachov que puso fin a la Guerra Fría tuvo lugar en Reikiavik en 1986. Su resistencia a ceder soberanía y la prosperidad basada en el sector pesquero que reforzaba el interés por mantener el control total de sus aguas la alejó de la Comunidad Económica Europea hasta 1994, fecha de la firma del «Espacio Económico Europeo» junto con Noruega y Liechtenstein. El paso decisivo hacia la adhesión se dio tras la crisis financiera de 2008 que noqueó económicamente al país. El 17 de julio de 2009, Islandia presentó formalmente su solicitud de ingreso en la Unión Europea y las negociaciones comenzaron en 2010. Pero un nuevo gobierno del Partido de la Independencia, favorable a la OTAN, pero hostil a la entrada de la isla en la Unión Europea paralizó las negociaciones.

Pero a Islandia ha llegado también el huracán de la geopolítica y de Donald Trump. El nuevo gobierno socialdemócrata ha anunciado la celebración el 29 de agosto de 2026 de un referéndum para decidir sobre reanudar las negociaciones de adhesión, afirmando que, si el referéndum diera luz verde, Islandia podría completar su integración en la Unión Europea en «aproximadamente año y medio». Como dice el refrán: «Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar». Y es que la postura de la administración estadounidense sobre Groenlandia se ha escuchado como el chasquido de un látigo en Islandia. Hasta el punto de que, en este país ultradiscreto, el expresidente Olafur Ragnar Grimsson, ahora al frente del foro Arctic Circle, se vio obligado a intervenir advirtiendo de manera muy clara que un intento de Estados Unidos de

«apoderarse» de Groenlandia tendría «consecuencias monumentales para la alianza occidental y el orden global».

Es una tarde luminosa: la bandera azul europea ondea junto a la islandesa, sobre un cielo polar. Un símbolo de que Europa no se repliega: se expande. Y que la soledad, bien entendida, no es abandono: es comienzo. ¡Ojalá!